

Oficina para la Resolución de Disputas

Entendiendo las audiencias del proceso legal debido de educación especial para estudiantes dotados



Guía para padres



OFICINA PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

6340 Flank Drive

Harrisburg, PA 17112-2764

(800) 222-3353 (717) 541-4960

USUARIOS DE TDY: PA Relay 711

www.odr-pa.org



pennsylvania

DEPARTMENT OF EDUCATION

A través de la Oficina para la Resolución de Disputas, el Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE por sus siglas en inglés) cumple con su mandato legal para establecer un sistema del proceso legal debido de educación especial. El Departamento de Educación de Pennsylvania tiene un contrato con la Unidad Intermedia de Central Susquehanna para proveer apoyo fiscal y cierto apoyo administrativo a esa oficina sin ser parte de las operaciones fundamentales.

La Unidad Intermedia de Central Susquehanna no discriminará en los programas educativos, actividades o prácticas laborales en base a la raza, color, origen nacional, género, discapacidad, estado civil, edad, religión, orientación sexual, ascendencia, pertenencia a sindicato u otra clasificación protegida legalmente. El anuncio de esta política va de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas Educativas del 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990. Los empleados y participantes del programa que tengan alguna pregunta o preocupación sobre el acoso o la discriminación, o que necesiten información sobre acomodos para personas con discapacidades, deben contactar al Director de Recursos Humanos de CSIU, 90 Lawton Lane, Milton, PA 17847, teléfono 570-523-1155.

Tabla de



contenido

	Página
Resolviendo los desacuerdos de educación especial.....	1
Evaluando la solidez de su posición	12
Procedimientos del proceso legal debido.....	31
Objeciones.....	83
Mociones.....	94
La audiencia del proceso legal debido	101
Conclusión.....	115
Referencias	116
Glosario	117
Apéndices	123
Recursos adicionales	177

- Apéndice A. “Hoja de consideraciones” de PaTTAN
- Apéndice B. Glosario educativo
- Apéndice C. Información sobre la facilitación del GIEP
- Apéndice D. Información sobre la mediación
- Apéndice E. Regulaciones estatales del Capítulo 16
- Apéndice F. Regulaciones estatales del Capítulo 711
- Apéndice G. Consejo de Educación v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982)
- Apéndice H. Distrito escolar de Centennial v. el Departamento de Educación, 517 Pa. 540, 539 A.2d 785 (1988)
- Apéndice I. B. C. v. el Distrito escolar de Penn Manor, 906 A.2d 642 (Pa. Commw. 2006)
- Apéndice J. Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente
- Apéndice K. Ejemplo de queja del proceso legal debido
- Apéndice L. Queja del proceso legal debido en blanco
- Apéndice M. Guía sobre la mediación
- Apéndice N. Hoja informativa sobre los procedimientos del proceso legal debido para estudiantes dotados
- Apéndice O. Ejemplo de una carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia

Apéndice P. Ejemplos de pruebas enumeradas

Apéndice Q. Ejemplo de portada del cuaderno de pruebas

Apéndice R. Ejemplo de una moción

Esta guía ha sido escrita para los padres de los niños que han sido identificados o que podrían ser identificados como estudiantes dotados bajo el Capítulo 16 de las regulaciones de Pennsylvania. Las regulaciones y los procedimientos en esta guía aplican solamente a estos niños.

Si su niño también es elegible para recibir servicios como un niño con un impedimento bajo la ley IDEA y/o la sección 504, usted también debería revisar la guía para niños que reciben educación especial bajo la ley IDEA y/o la sección 504, ya que las leyes diferentes son aplicadas de forma diferente. Vea el Código 22 §16.7 de Pennsylvania en el apéndice.



Parte 1: Resolviendo los desacuerdos de educación especial



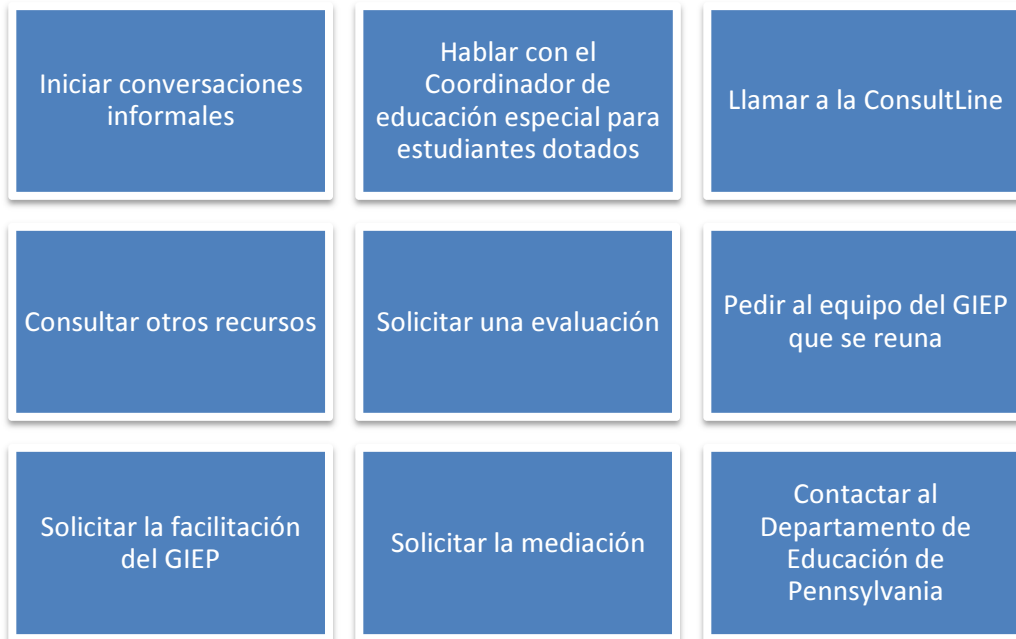
Todos los días en las escuelas de Pennsylvania, los equipos del GIEP trabajan en conjunto para escribir el GIEP de un niño.

Muchas veces, usted y la escuela están de acuerdo con el programa educativo para su niño.

Sin embargo, otras veces, a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones de todos, hay desacuerdos sobre la educación de su niño.

Una audiencia del proceso legal debido (litigio) no es la única forma de resolver estos desacuerdos.

Formas de resolver las disputas de educación especial



A. Empiece con una conversación informal

A veces hablar con el maestro de su niño o con los administradores escolares puede solucionar el problema. Es posible que la escuela no conozca sus preocupaciones. La comunicación abierta entre padres y la escuela beneficia a todos, particularmente al estudiante.

Empiece hablando con el maestro de su niño. Contáctelo para fijar una hora para reunirse o hablar por teléfono. De esta forma usted puede asegurarse de que el maestro tendrá tiempo para hablar con usted. Antes de reunirse, podría ser útil enviar al maestro una lista con sus preguntas o preocupaciones para que él/ella pueda prepararse. En la reunión, exprese sus preocupaciones, pero también esté dispuesto a escuchar la opinión del maestro. A menudo, ustedes podrán resolver el problema juntos.

También puede haber otras personas con las que usted quiera hablar. Sin importar con quien hable, si no entiende algo, pida una explicación.

Puede ser útil mantener un diario o registro de sus comunicaciones con la escuela. Después de hablar con alguien, usted puede enviar un correo electrónico o una carta a la escuela con un resumen sobre lo hablado. Esto le servirá como registro de sus conversaciones. Esto también le dará a la escuela la oportunidad de volver a analizar el asunto con usted si ellos entendieron sus conversaciones de forma diferente de como usted las resumió. De esta forma pueden evitarse los problemas de comunicación.



La [Red de Asistencia Técnica y Entrenamiento de Pennsylvania](#) (PaTTAN por sus siglas en inglés) ha preparado una “Hoja de consideraciones” para usar con los GIEP; sin embargo, esta hoja puede ayudarle a organizar sus preocupaciones. Ver el [Apéndice A](#).

B. Reúnase con el director de educación especial o con el coordinador de educación para estudiantes dotados

Usted podría querer reunirse con el [director de educación especial](#) o con el coordinador de educación para estudiantes dotados para hablar sobre sus preocupaciones. Si usted desea, puede enviarle una carta antes de la reunión para que él/ella tenga una idea sobre lo que usted desea hablar. Si hay algún documento que usted considera importante para la conversación, usted puede incluirlo en su carta. Esté dispuesto a escuchar lo que el director o coordinador tiene para decir. Muchas veces ustedes pueden resolver el problema juntos.



Existen muchas abreviaturas o siglas para los términos usados en el campo de la educación especial. Por ejemplo, el [Plan de educación individualizado para estudiantes dotados](#) es llamado 'GIEP', que son sus siglas en inglés. Puede ser útil conocer algunas de las abreviaciones/siglas usadas frecuentemente mientras usted se prepara para la audiencia. El [Apéndice B](#) contiene una lista.

C. Contacte a la ConsultLine de la Oficina de Educación Especial
(En Pennsylvania: 800-879-2301; fuera de Pennsylvania: 717-901-2146; usuarios de TTY – PA Relay 711)

La [Consultline](#) es una línea de ayuda para padres y defensores de los niños en edad escolar quienes son o podrían ser dotados y los niños con discapacidades. El personal de la ConsultLine puede hacer lo siguiente:

- Explicar las leyes de educación especial para estudiantes dotados
- Explicar el Aviso de las Garantías Procesales para estudiantes dotados
- Describir las opciones que los padres tienen cuando no están de acuerdo con la escuela de su niño
- Hacer referidos a otras agencias

D. Consulte otros recursos

Los Derechos de los padres para estudiantes dotados enumeran muchos recursos disponibles para los padres. Los recursos incluyen:

OFICINA PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112-2764
717-901-2145 (Teléfono)
800-222-3353 (Gratis sólo en PA)



Usuarios de TTY: PA Relay 711
717-657-5983 (Fax)

www.odr-pa.org

La Oficina para la Resolución de Disputas administra los sistemas del proceso legal debido y mediación por todo el estado, y provee entrenamiento y servicios sobre otros métodos alternos para la resolución de disputas.

PENNSYLVANIA ASSOCIATION FOR GIFTED EDUCATION (PAGE por sus siglas en inglés)

P.O. Box 15350
Pittsburgh, PA 15237
888-736-6443 (Línea de ayuda)
www.giftedpage.org

PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION

100 South Street
Harrisburg, PA 17101
800-932-0311 (Teléfono)
www.pabar.org

PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF EDUCATION

Bureau of Teaching and Learning
Division of Curriculum
333 Market Street, 3rd Floor
Harrisburg, PA 17126-0333
717-783-1832 (Teléfono)
www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393

Bureau of Special Education
333 Market Street, 7th Floor
Harrisburg, PA 17126-0333
717-786-6361 (Teléfono)
www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393

PENNSYLVANIANS FOR THE EDUCATION OF GIFTED STUDENTS (PEGS)

724-586-6286 (Teléfono)
www.pegsgifted.org/portal



E. **Solicite una evaluación**

Usted puede pedir que su niño sea evaluado o reevaluado. Los resultados de una **evaluación** o **revaluación** pueden ayudarle a usted y a la escuela a decidir cuál será el siguiente paso. Hay un límite en el número de evaluaciones que su niño puede recibir. Para aprender más sobre evaluaciones, usted puede hablar con un especialista de la ConsultLine llamando al 800-879-2301, usuarios de TTY: PA Relay 711.



El Departamento de Educación de Pennsylvania ha desarrollado un Reporte escrito del estudiante dotado (GWR por sus siglas en inglés) anotado, el cual describe el contenido del formulario de la Evaluación Multidisciplinaria del estudiante dotado en Pennsylvania. Este formulario está disponible en la página web del PDE : www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393 o en la página web de la Biblioteca para padres de la ODR ([http://odr-pa.org/parents/parent-resource-library/.](http://odr-pa.org/parents/parent-resource-library/))

F. **Solicite que el equipo del GIEP se reúna**

Usted puede pedir al **equipo del GIEP** que programe una reunión para hablar sobre sus preocupaciones. Para solicitar una reunión, escriba una carta al director, con copia al Director de educación especial o al Coordinador de educación para estudiantes dotados. Guarde una copia de la carta en sus archivos.

Los dos siguientes servicios, la facilitación y la mediación, son gratis para usted; sin embargo, hay un costo para el proveedor del servicio. Sin embargo, tanto usted como la escuela deben estar de acuerdo en usarlos. Si sólo uno de ustedes desea el servicio, la ODR no puede programarlo. La facilitación está disponible para la reunión del GIEP. La mediación está disponible para los desacuerdos sobre la educación para estudiantes dotados de su niño.



G. Solicite una facilitación del GIEP**(En Pennsylvania: 800-222-3353; fuera de Pennsylvania: 717-901-2145; usuarios de TTY: PA Relay 711)**

Usted puede solicitar que un facilitador asista a la reunión del GIEP de su niño para ayudar al equipo. La ODR ofrece [la facilitación del GIEP](#) gratis para los padres con un costo para la LEA. La facilitación no es necesaria en todas las reuniones del GIEP. La facilitación usualmente se solicita cuando el padre y la escuela sienten que hay problemas de comunicación que previenen que el equipo del GIEP esté de acuerdo con el GIEP. El facilitador no se convierte en miembro del equipo del GIEP. El facilitador no asiste a la reunión para dar consejos o para decirle al equipo lo que tiene que hacer. En cambio, el papel del facilitador es asegurar que todos tengan la oportunidad de hablar y trabajar juntos para tratar de llegar a un acuerdo. La meta de la facilitación del GIEP es que todos estén de acuerdo con el GIEP.

Si usted cree que un facilitador podría ayudar al equipo del GIEP a comunicarse mejor, contacte a la ODR. Usted puede dejarle saber a la escuela que usted ha hecho esta solicitud, pero no es obligatorio que lo haga. El personal de la ODR contactará a la escuela para ver si ellos están de acuerdo con su solicitud para la facilitación. (La escuela también puede pedirle que esté de acuerdo con la presencia de un facilitador en la reunión del GIEP.)





La ODR ha preparado un video corto sobre la facilitación del IEP, el cual está disponible en la página web de la ODR (<http://odr-pa.org/alternative-dispute-resolution/iep-facilitation/>)



Los materiales escritos sobre la facilitación del IEP están en el [Apéndice C.](#)



Los coordinadores de casos de mediación/facilitación de la ODR, así como también los especialistas de la ConsultLine, están disponibles para hablar con usted sobre estos servicios.

ConsultLine: 800-879-2301, usuarios de TTY: PA Relay 711

ODR: 800-222-3353, usuarios de TTY: PA Relay 711

H. Solicite una mediación

(En Pennsylvania: 800-222-3353; fuera de Pennsylvania: 717-541-4960, ext. 3319/3900; usuarios de TTY: PA Relay 711)

Usted puede solicitar a la ODR una **mediación**. La ODR ofrece la mediación gratis a los padres con un costo para el proveedor del servicio. Al igual que los facilitadores del GIEP, los mediadores no toman decisiones. El mediador facilitará la comunicación entre usted y la escuela. La meta de la mediación es que usted y la escuela resuelvan el problema y pongan su acuerdo por escrito. Esto se llama el acuerdo de la mediación. Los abogados no participan en la mediación, pero usted puede traer con usted a un defensor u otra persona de apoyo.



Usted puede solicitar la mediación y el proceso legal debido al mismo tiempo. Su audiencia del proceso legal debido no será retrasada porque usted solicitó la mediación. Ya que la mediación es usualmente más fácil de programar, y usualmente toma sólo un día, es posible que su preocupación sea resuelta y ya no necesite una audiencia del proceso legal debido.



La ODR ha preparado un video corto sobre la mediación, el cual está disponible en la página web de la ODR <http://odr-pa.org/mediation/overview/>



Los materiales escritos sobre la mediación están en el [Apéndice D](#).



Los coordinadores de casos de mediación/facilitación de la ODR, así como también los especialistas de la ConsultLine, están disponibles para hablar con usted sobre estos servicios.
ConsultLine: 800-879-2301, Usuarios de TTY: PA Relay 711
ODR: 800-222-3353, Usuarios de TTY: PA Relay 711

I. Contacte al Departamento de Educación de Pennsylvania

Si tiene una pregunta sobre asuntos de procedimiento (evaluación, identificación, proceso de planificación del GIEP o si el estudiante también está identificado con una discapacidad), dirija sus preguntas a:

Dra. Shirley Curl
Oficina de Educación Especial
717-786-6361

Si es una pregunta con relación a las opciones de programación y cómo el currículo y/o la enseñanza podría ser, por favor dirija sus preguntas a:

Sally Flaherty
Oficina del Enseñanza y Aprendizaje
717-783-1832





Para verificar...

- ✓ Si usted ha intentado alguna o todas estas sugerencias, y continúa teniendo preocupaciones sobre la educación de su niño, entonces tal vez es tiempo de considerar si quiere solicitar una audiencia del proceso legal debido.
- ✓ Esta es una decisión importante. Las audiencias del proceso legal debido no deben tomarse a la ligera.
- ✓ La audiencia del proceso legal debido es un procedimiento formal y complicado.
- ✓ Una audiencia del proceso legal debido puede ser financiera, física y emocionalmente agobiante para los padres. Es igual de difícil para el personal de la escuela.
- ✓ Pero, usted tiene el derecho de solicitar una audiencia del proceso legal debido y a veces esto es lo que se necesita para resolver un problema.
- ✓ Se recomienda que usted primero se asegure de que el problema no puede ser resuelto con los otros métodos antes de solicitar la audiencia.
- ✓ Además, incluso antes de solicitar una audiencia, usted deberá calcular si su caso tiene un argumento favorable. En otras palabras, usted necesita analizar si puede ganar su caso ante un oficial de la audiencia. El primer paso es recopilar tanta información como sea posible para que pueda tomar una decisión con fundamento.





Parte 2: Evaluando la solidez de su posición



Usted no desearía dedicar tiempo, energía y dinero en una audiencia del proceso legal debido si no es probable que gane. En otras palabras, ¿estará el oficial de la audiencia de acuerdo con usted o con la posición de la escuela?

El siguiente paso es determinar si tiene un caso sólido:

¿Cuál es la probabilidad de que el oficial de la audiencia estará de acuerdo con usted?

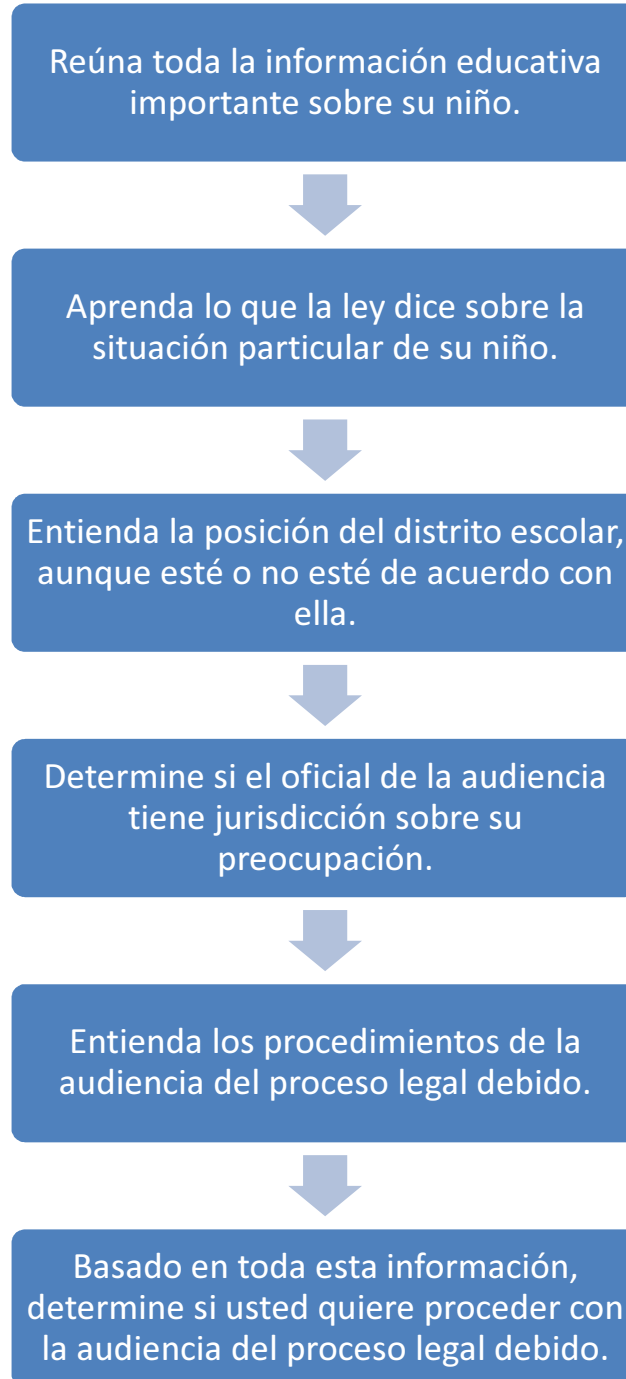
¿Qué dice la ley?

¿Qué documentos y testigos usted necesita para probar su caso?

¿Cómo funcionan las audiencias del proceso legal debido?

Estas preguntas pueden parecer abrumadoras, así que vaya paso por paso.

El siguiente es un resumen de los pasos que usted podría tomar para ayudarle a decidir si quiere solicitar una audiencia del proceso legal debido.





Paso 1: Reúna toda la información educativa importante sobre su niño

Usted necesita entender por completo las necesidades y el programa educativo de su niño. A continuación se encuentran algunas cosas que usted puede hacer para estar preparado.

Mientras usted reúne esta información, no deje de hablar y trabajar con la escuela. Compartir información al conseguirla puede ayudarle a usted y a la escuela a entender mejor la situación de su niño. Compartir información puede llevar a resolver el problema o prevenir problemas futuros. La mayoría de casos del proceso legal debido son resueltos antes de llegar a una audiencia.

Organice sus documentos

Empiece organizando sus documentos. A continuación listamos los documentos que podrían ser útiles para usted. Si usted no tiene copias, ahora es el momento de conseguirlas y revisarlas cuidadosamente:

Tarjetas de calificaciones - ¿Muestra la tarjeta de calificaciones que a su niño le va bien en la escuela? ¿Está teniendo dificultad o incluso reprobando? ¿Qué dicen los comentarios del maestro?

Tareas y pruebas – Las tareas y las pruebas ayudan a mostrar dos cosas: 1) lo que le están enseñando a su niño en la escuela; y 2) qué tan bien le va a su niño en la escuela. Las pruebas estandarizadas, tales como la prueba PSSA, el examen Keystone entre otras, también pueden proveer información importante.

Comunicación escrita con el personal escolar – El expediente escolar de su niño incluye notas y correos electrónicos sobre su niño para usted u otros miembros del personal. ¿Qué muestran estas comunicaciones? ¿Ha informado usted sus preocupaciones a la escuela? ¿Cómo ha respondido la escuela? ¿Ha habido progreso?



Información escolar que se distribuye generalmente – Esto se refiere a la información que la escuela envía al hogar con la mayoría de (o todos) los estudiantes o que coloca en su página web. Esta información podría ser panfletos, avisos, calendarios o políticas. Considere si alguna parte de esta información es importante con relación a la preocupación que usted tiene sobre el programa de su niño.

Hay tres documentos que son casi **siempre importantes** en cualquier audiencia del proceso legal debido:

- 1) El Reporte escrito para estudiantes dotados;
- 2) La Notificación de asignación recomendada (llamada la “NORA” por sus siglas en inglés); y
- 3) El Plan de educación individualizado para estudiantes dotados (llamado “GIEP” por sus siglas en inglés).

El Reporte escrito para estudiantes dotados, la NORA y el GIEP trabajan en conjunto para establecer el programa que su niño necesita.

Evaluaciones – La evaluación o evaluaciones de su niño son a menudo una parte importante de la audiencia del proceso legal debido. Asegúrese de que tiene copias de **todas** las evaluaciones hechas a su niño por la escuela o por evaluadores privados.

Notificación de asignación educativa recomendada (NORA por sus siglas en inglés) – En muchos casos este es un documento importante ya que indica la decisión del equipo del GIEP sobre el programa educativo que su niño necesita.

Plan de educación individualizado para estudiantes dotados (GIEP por sus siglas en inglés) – Este es el plan de acción (o esquema) para la educación y los servicios que su niño recibirá. Asegúrese de tener copias de cada GIEP concerniente a su preocupación. Revise cada uno detenidamente.



Algunos o todos estos documentos podrían ser usados como prueba documental en la audiencia del proceso legal debido, así que mientras más temprano los consigue, más preparado estará.

Visitas al salón de clases – Usted podría querer visitar el salón de clases de su niño. Su distrito escolar tendrá una política sobre las visitas de los padres al salón de clases. Verifique con su distrito escolar sobre su política para tales visitas. Siga las reglas escolares sobre las visitas.

Inspeccione los expedientes en la escuela – La escuela mantiene un [expediente educativo](#) para su niño. Usted tiene el derecho de revisar este expediente. Una vez que usted pida revisarlo, se requiere que la escuela responda a su petición puntualmente. Como mucho, la escuela debe tener el expediente disponible para usted en no más de 45 días calendario después de que usted lo solicite. Es posible que el distrito escolar cobre un pequeño cargo por página para cada documento que usted solicite ser copiado.

Considere una Evaluación educativa independiente (IEE por sus siglas en inglés) – Si usted no está de acuerdo con la evaluación de su niño hecha por la escuela, usted puede decidir buscar una evaluación independiente. Una [evaluación educativa independiente](#), o IEE, es una evaluación conducida por un evaluador calificado que no es empleado de la escuela. Sin embargo, para los estudiantes dotados, las IEE corren por cuenta de los padres, no de la escuela.

Si usted comparte con la escuela una evaluación que usted obtuvo y pagó por cuenta propia, los resultados de la evaluación:

- Deben ser considerados por la escuela al determinar el programa educativo de su niño, a menos que la evaluación no cumpla con los requisitos de la escuela; y
- Pueden ser usados por usted, la escuela o ambos como evidencia en la audiencia del proceso legal debido.





Para verificar...

Ahora usted ha recopilado toda la información que necesita sobre el programa educativo de su niño. Ahora la pregunta a responder es “¿Qué tan sólido es mi caso basado en toda esta información?”

Aquí se encuentran algunas preguntas que usted necesitará hacer:

- ✓ ¿Qué dice la ley?
- ✓ ¿Qué plazos de tiempo debo seguir?
- ✓ ¿Qué ha sucedido en otros casos similares?
- ✓ ¿Qué testigos y pruebas documentales ayudarán a validar mi caso?
- ✓ ¿Cuál es la posición del distrito escolar?





Paso 2: Aprenda sobre la ley

Regulaciones y leyes de educación especial para estudiantes dotados

Usted necesitará tener al menos un entendimiento básico sobre la ley de educación especial para estudiantes dotados y cómo esas leyes aplican al programa educativo de su niño.



La Biblioteca de recursos para padres en la página web de la ODR tiene información para padres sobre las [regulaciones](#), los derechos y procedimientos de la educación especial (<http://odr-pa.org/parents/parent-resource-library/gifted-education/>). Las páginas web de los recursos listados en el Aviso de derechos de los padres para estudiantes dotados, y los recursos listados en las páginas 4-5, también son buenos recursos para usted.



Los especialistas de la ConsultLine también están disponibles para explorar con usted las leyes y regulaciones de educación especial llamando al 800-879-2301, usuarios de TTY: PA Relay 711

Las leyes principales que aplican a las audiencias del proceso legal debido para estudiantes dotados se encuentran en el [Código de Pennsylvania](#) en el Título 22, [Capítulo 16](#).



Las regulaciones estatales se encuentran en el [Apéndice E](#). Las regulaciones estatales también pueden encontrarse en línea en el Código de Pennsylvania en la siguiente página web:
<http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter16/chap16toc.html>

La Oficina de Educación Especial de Pennsylvania ha desarrollado una lista de preguntas comunes sobre el Capítulo 16. Esta lista está disponible en la siguiente página web:
http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393



El Capítulo 16 no aplica a los estudiantes que asisten a una escuela chárter. Las escuelas chárter siguen diferentes regulaciones estatales de educación especial, las cuales se encuentran en el Código de Pennsylvania en el [Capítulo 711](#), el cual se encuentra en el [Apéndice F](#).



Es importante entender que sólo porque usted no está de acuerdo con el programa educativo de su niño, esto no significa que usted cumple con los estándares legales para establecer una violación de la ley estatal o federal.

Validando su caso bajo el estatuto de la ley IDEA

Es importante entender que sólo porque usted no está de acuerdo con el programa educativo de su niño, esto no significa que usted cumple con los estándares legales para establecer una violación de la ley estatal o federal.

Una frase que usted escuchará a menudo es que la escuela debe proporcionar *un programa apropiado, razonablemente calculado para permitir que el niño reciba beneficios educativos significativos.*

Las audiencias del proceso legal debido a menudo se centran en un acuerdo respecto a lo que es “apropiado” y/o un “beneficio educativo significativo”.



Tres casos sobre los que usted posiblemente escuchará son el caso Consejo de Educación v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982) ([Apéndice G](#)), el Distrito escolar de Centennial v. el Departamento de Educación, 517 Pa. 540, 539 A.2d 785 (1988), ([Apéndice H](#)) y B.C. v. el Distrito escolar de Penn Manor, 906 A.2d 642 (Pa. Commw. 2006) ([Apéndice I](#)). Hay muchos otros casos que tratan sobre estos mismos asuntos. Estos tres casos son un punto de partida para usted.



Podrá ver muchos otros casos sobre las decisiones del oficial de audiencia en la página web de la ODR: <http://odr-pa.org/du-process/hearing-officer-decision/>

Puede ser útil leer y entender las decisiones legales tomadas en casos previos similares al suyo. Esto puede ayudarle a entender mejor los aspectos legales de su propio caso. La página web de la ODR contiene copias de las recientes [decisiones del oficial de la audiencia](#) y las decisiones anteriores del [Panel de apelaciones](#). El panel de apelaciones fue discontinuado en el 2008, pero esas decisiones aún podrían ayudarle a entender la ley y su aplicación en su caso. Las decisiones del tribunal no están disponibles en la página web de la ODR, y éstas pueden requerir un individuo con conocimiento legal para tener acceso a ellas y ser interpretadas para usted.

La ley requiere planes de educación *individualizados* para los niños que son dotados. Una educación apropiada para un niño no es necesariamente un programa apropiado para su niño. Lea las decisiones del oficial de audiencias. Siéntase libre de hablar con otros padres, pero recuerde que el equipo del GIEP de su niño, el cual lo incluye a usted, determina lo que su niño necesita en base a sus necesidades únicas e individuales, no en base a lo que otro niño puede estar recibiendo.

Plazos de tiempo



Usted no tiene tiempo ilimitado para decidir si quiere solicitar el proceso legal debido.

Un tribunal de apelaciones de Pennsylvania ha determinado que “el inicio de la solicitud para una audiencia del proceso legal debido debe ocurrir dentro de un año, o dos años como mucho (si las circunstancias atenuantes muestran que la equidad en el caso justifica tal retraso), a partir de la fecha

en que el padre acepta un IEP propuesto.” *Distrito escolar de Montour v. S.T.*, 805 A.2d 29 (Pa. Commw. 29 (2002)).

Esta limitación o plazo de tiempo es conocido como la **ley de prescripción**.

Hay dos excepciones a esta regla de dos años:

Si la escuela presenta la ley de prescripción como un problema (el cual usted verá en la respuesta de la escuela a su aviso de queja o en una moción), el **oficial de la audiencia** hará lo siguiente:

1. Le pedirá a usted que explique antes de la audiencia por qué usted cree que ha solicitado la audiencia de forma oportuna (llamado un **alegato a favor de la prueba**, ver la página 51); y/o
2. En la audiencia, tomará evidencia de usted y la escuela con relación a las circunstancias atenuantes.

El oficial de la audiencia determinará si su solicitud fue presentada puntualmente o no.

Hay tres posibles resultados:

1. Usted solicitó la audiencia muy tarde, y su queja será desestimada. Usted tiene derecho a apelar esa decisión en el tribunal estatal o federal.
2. Usted solicitó la audiencia puntualmente, y la audiencia tendrá lugar.
3. Usted no solicitó la audiencia puntualmente para algunos, *pero no todos* los asuntos en su queja. La audiencia procederá sobre los asuntos que usted presentó puntualmente. Al final del proceso de audiencia, usted tiene el derecho de apelar cualquier aspecto de la decisión del oficial de la audiencia en el tribunal estatal y federal incluyendo la decisión del oficial de la audiencia con relación a cuáles asuntos fueron o no fueron presentados puntualmente.





La **Notificación de derechos de los padres para estudiantes dotados** está disponible en línea en la página www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393.



Los especialistas de la ConsultLine también están disponibles para explorar con usted las leyes y regulaciones sobre las audiencias del proceso legal debido llamando al 800-879-2301, usuarios de TTY: PA Relay 711

Agotamiento de soluciones

El concepto de agotamiento de soluciones significa esencialmente que una parte **primero** debe pasar por el proceso legal debido, antes de presentar una demanda en el tribunal estatal o federal. En otras palabras, en la mayoría de casos, a usted le será requerido usar el sistema del proceso legal debido para intentar resolver su problema.



Paso 3: **Considere la posición del distrito escolar**

Una parte de entender *su* caso es entender *el caso de la escuela*.

Hágase las siguientes preguntas:

- ❓ ¿Cuál es la posición de la escuela? ¿Cómo se diferencia su posición de la mía? ¿Por qué?
- ❓ (Si sabe), ¿qué testigos presentará la escuela en la audiencia? ¿Qué dirán ellos?
- ❓ (Si sabe), ¿qué documentos (pruebas documentales) usará la escuela en la audiencia? ¿Apoyan esos documentos lo que la escuela está diciendo o lo que yo estoy diciendo?
- ❓ ¿Apoyan las leyes mi posición o la posición de la escuela?





Paso 4: La jurisdicción del oficial de la audiencia

Usted también necesitará asegurarse de que el problema que usted tiene con el programa educativo de su niño es un problema que un oficial de la audiencia del proceso legal debido puede decidir. En otras palabras, ¿es su preocupación algo en lo que un oficial de la audiencia tiene la autoridad (**jurisdicción**) para escuchar y tomar una decisión al respecto?

La autoridad de un oficial de la audiencia normalmente cubre las siguientes categorías generales:

1. Determinar qué tan apropiado es un programa o colocación, lo cual puede incluir:
 - La calidad y el alcance del programa educativo;
 - Si el niño está recibiendo un beneficio educativo valioso del programa;
2. Determinar si un niño ha sido identificado correctamente para recibir servicios, lo cual puede incluir:
 - Determinar si un niño debería haber sido identificado como un niño dotado, pero no fue identificado como dotado;
 - Si los servicios de educación especial ya no son necesarios.
3. Solicitar o denegar los servicios **de educación compensatoria** .
4. Solicitar una evaluación independiente.

Usted debería preguntarse a sí mismo si su problema cae en una de las categorías generales antes mencionadas. Esta pregunta puede ser difícil de responder sin la ayuda de un abogado o **defensor**. Es importante entender que, aunque la jurisdicción de un oficial de la audiencia es bien amplia, un oficial de la audiencia no tiene jurisdicción en *todas* áreas de la educación de su niño.



Por ejemplo, para determinar qué tan apropiado es un programa o colocación, los oficiales de la audiencia pueden tomar decisiones sobre asuntos bien específicos acerca del programa tales como el contenido y el alcance de un GIEP. Sin embargo, un oficial de la audiencia no puede conducir una audiencia acerca de la preocupación del padre sobre un conflicto de personalidad entre el padre y el maestro.

Utilice todos los recursos que usted tiene disponibles en su análisis. Al fin y al cabo, usted es el único que puede decidir si hará a no hará la solicitud para una audiencia del proceso legal debido.





Paso 5: Entendiendo los procedimientos de las audiencias del proceso legal debido

Una **audiencia del proceso legal debido** es un procedimiento legal ante un oficial de la audiencia. En Pennsylvania, los oficiales de la audiencia son abogados o psicólogos con un doctorado. Cada oficial de la audiencia tiene antecedentes extensos en educación especial y los procedimientos de audiencia.



En la página web de la ODR siempre hay una lista actualizada de los oficiales de la audiencia de Pennsylvania (<http://odr-pa.org/due-process/hearing-officers/>). Usted y la escuela no pueden escoger a su oficial de la audiencia; la ODR los asigna imparcialmente.

En la audiencia, usted y la escuela (llamados de forma conjunta “las **partes**”) tendrán cada uno la oportunidad de presentar testigos y documentos que apoyen su posición. Como en cualquier procedimiento del tribunal, se requerirá que usted pruebe su caso. Para hacer esto, usted:

- Resumirá los problemas para la audiencia a través de su “**alegato de apertura**”;
- Presentará **pruebas documentales** al oficial de la audiencia para probar su posición en el asunto;
- Interrogará tanto a sus **testigos** como a los de la escuela; y
- Probablemente usted mismo querrá testificar. (Si ambos padres están involucrados y testificarán los mismos hechos, escoja a uno de ustedes para ser el testigo).

Un taquígrafo judicial (o **estenógrafo**) asistirá a cada audiencia para documentar todo lo que sea dicho “en el registro”. El documento que el taquígrafo judicial produce se llama **transcripción**. A usted le será dada una copia de la transcripción gratis.

La mayor parte de lo que ocurre en la audiencia será registrada (“transcrita”) por el taquígrafo judicial. Sin embargo, en ocasiones, el oficial de la audiencia le pedirá al taquígrafo judicial “que pare el registro”. El oficial de la audiencia parará el registro cuando no sea necesario que el taquígrafo judicial registre una conversación (como por ejemplo sobre el horario). El oficial de la audiencia determina si las conversaciones serán o no serán registradas.

El oficial de la audiencia tomará su decisión aplicando la ley a la evidencia presentada en la audiencia. Usted o la escuela, o ambos, pueden apelar la decisión del oficial de la audiencia en el tribunal estatal. Se recomienda que consulte a un abogado para ayudarlo a decidir si debe apelar, así como también para ayudarlo a cumplir con cualquier plazo de tiempo impuesto por el tribunal y los requerimientos del proceso. El oficial de la audiencia le dará información sobre las apelaciones cuando envíe su decisión.



Para aprender más sobre las audiencias del proceso legal debido, usted puede hacer algunas o todas las siguientes cosas:



Leer las instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente en el [Apéndice J](#).



Leer la sección sobre las audiencias del proceso legal debido en la página web de la ODR. <http://odr-pa.org/du-process/overview/>

Leer otra vez el Aviso de los derechos de los padres para estudiantes dotados.
www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/gifted_education/7393.

Ver los videos de la ODR sobre la práctica de moción y los procedimientos de la audiencia del proceso legal debido:
<http://odr-pa.org/du-process/hearing-procedures/>



Llame a la ConsultLine para recibir información general sobre la audiencia del proceso legal debido al 800-879-2301, usuarios de TTY: PA Relay 711.



Para verificar...

Usted ya ha hecho las siguientes cosas:

- ✓ Recopiló información sobre su niño
- ✓ Aprendió lo que la ley dice sobre su preocupación particular
- ✓ Determinó cuál es la posición de la escuela sobre el asunto
- ✓ Consideró si el oficial de la audiencia tiene jurisdicción sobre su preocupación
- ✓ Aprendió cierta información básica sobre las audiencias del proceso legal debido

La siguiente sección le dará información detallada sobre las audiencias, incluyendo cómo solicitar una.





Parte 3: Procedimientos del proceso legal debido



Esta sección provee información detallada sobre los procedimientos del proceso legal debido.

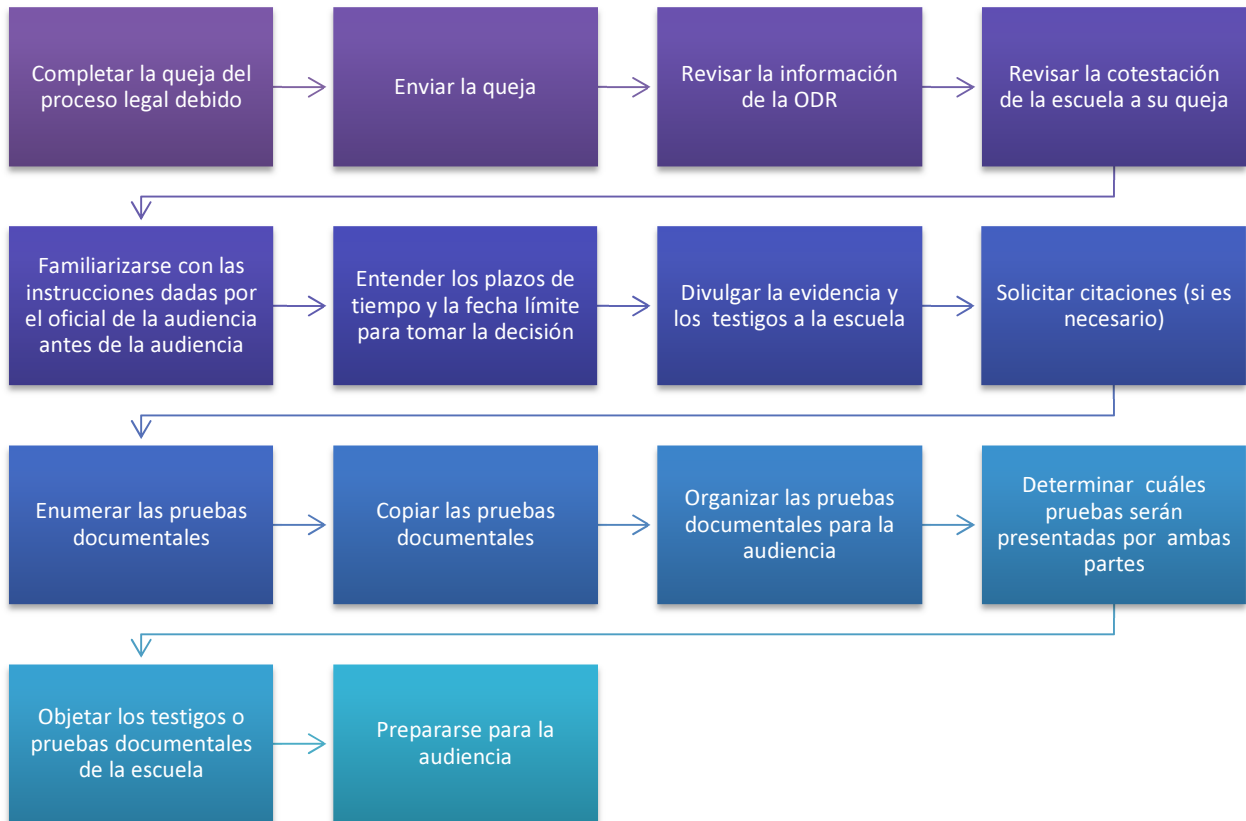
Primero ofrecemos un resumen general de la audiencia, y luego hablamos sobre cómo solicitar el proceso legal debido. Esta sección provee una guía paso por paso sobre los procedimientos del proceso legal debido.

Aunque las objeciones y las mociones son parte de los procedimientos del proceso legal debido, éstos son tratados en dos secciones separadas: Parte 4 (Objeciones) y Parte 5 (Mociones).



Procedimientos del proceso legal debido

A continuación se encuentra un diagrama de flujo que menciona cada paso del proceso. Cada sección será explicada por completo más adelante.



Representación en una audiencia del proceso legal debido

Usted tiene dos opciones al decidir sobre quién representará a usted y a su niño en la audiencia del proceso legal debido.

1. Usted puede representarse a sí mismo en la audiencia. Cuando un padre participa en una audiencia del proceso legal debido sin un asesor legal, esto se llama **derecho propio**.
2. Usted puede usar un abogado para que lo represente. Si usted decide usar un abogado, usted será responsable por el costo del abogado.

Usted puede ser acompañado y aconsejado por individuos que tengan conocimiento o entrenamiento especial en el área de educación para estudiantes dotados, como por ejemplo un defensor. Sin embargo, es importante notar que un defensor no puede representarlo en la audiencia a menos que él o ella sea un abogado.

La escuela, así como también sus administradores u otros empleados que comparezcan en la audiencia, deben ser representados por un abogado.





Paso 1: Completar la queja del proceso legal debido

Con el fin de solicitar una audiencia del proceso legal debido, primero usted debe hacer uno de los siguientes:

1. Llenar una [queja del proceso legal debido](#), o
2. Poner toda la información requerida en una carta.

El formulario de queja del proceso legal debido no es requerido, pero está disponible para ayudarle a asegurarse de que está incluyendo toda la información necesaria. Si usted se siente más cómodo escribiendo una carta en lugar de llenar el formulario, puede hacerlo. Sólo asegúrese de incluir toda la información que se pide en el formulario.

La queja es un documento importante:

1. Es una aviso formal para la escuela sobre sus preocupaciones; e
2. Inicia el plazo de tiempo para completar la audiencia.



Un ejemplo del formulario de la queja del proceso legal debido se encuentra en el [Apéndice K](#).

Un formulario en blanco de la queja del proceso legal debido se encuentra en el [Apéndice L](#).



Un formulario en blanco de la queja del proceso legal debido también se encuentra disponible en la página web de la ODR, <http://odr-pa.org/odr-request-forms/>, o llamando a la ODR al 800-222-3353, usuarios de TTY: PA Relay 711.

El formulario (o la carta) de la queja debería incluir:

- 1. El nombre completo del niño, incluyendo el nombre, segundo nombre y apellido.**
- 2. La dirección donde vive el niño.**

Si usted comparte la custodia de su niño con otra persona, escriba el domicilio principal de su niño. Si usted cree que es importante explicar cualquier problema de domicilio, puede hacerlo en su solicitud para una audiencia.

- 3. El nombre de la escuela a la que el niño asiste. Incluya el distrito escolar y el nombre del edificio escolar de su niño.**

Particularmente en distritos escolares grandes (con varias escuelas primarias, medias y secundarias) es importante que usted identifique el edificio escolar de su niño:

Por ejemplo: “Mi niño asiste a la escuela Hamilton Elementary School en el distrito escolar de América.”

Si usted tiene un desacuerdo con un distrito escolar que no es el distrito escolar donde su niño asiste a la escuela, escriba el nombre de la escuela que estaría envuelta en la audiencia del proceso legal debido.



Por ejemplo: “Mi niño actualmente asiste a la American Academy, pero mi queja va contra el distrito escolar de USA.”

4. Información de contacto. Tanto la ODR como el oficial de la audiencia necesitarán tener un número de teléfono confiable para poder comunicarse con usted y su dirección de correo electrónico, si tiene una. La mayoría de la correspondencia entre usted y el oficial de la audiencia se realizará por medio de correo electrónico; si usted no tiene correo electrónico, la correspondencia se realizará a través del correo postal de los Estados Unidos, pero le tomará más tiempo recibirla.

5. Una descripción de su preocupación, incluyendo todos los hechos que inducen su preocupación.

Usted debería describir su preocupación para que la escuela y el oficial de la audiencia puedan entenderla. Por ejemplo, si usted cree que su niño no recibió una instrucción especialmente diseñada que haya sido calculada razonablemente para producir un beneficio educativo significativo y el progreso del estudiante, usted debería explicar por qué cree esto. Usted puede decir que su niño no recibió un beneficio educativo significativo, pero luego dé hechos específicos para demostrar por qué usted cree que su niño no recibió un beneficio educativo significativo. Explique lo que usted cree que su niño necesita a fin de recibir un beneficio educativo significativo. Sin importar cuál sea su problema, usted necesita proveer suficiente información para que la escuela y el oficial de la audiencia entiendan por completo sus preocupaciones.

6. La solución que usted propone para el problema (si usted conoce la posible solución al momento de completar la queja).



El oficial de la audiencia sólo puede tomar decisiones sobre los asuntos que están identificados en la queja. Asegúrese de que usted ha incluido en la queja todos los asuntos y preocupaciones que usted quiera llevar ante el oficial de la audiencia. Si luego usted descubre que se le olvidó incluir algo, infórmele al oficial de la audiencia. Es posible que se le permita presentar otra queja que contenga esos asuntos y el oficial de la audiencia tomará una decisión sobre éstos. Por otra parte, el oficial de la audiencia podría decirle que es muy tarde. Siempre es mejor incluir todo en la primera queja para evitar retrasos.





Paso 2: Enviar la queja del proceso legal debido

Una vez que usted haya completado el formulario de la queja, o su carta, usted debe hacer lo siguiente:

1. Envíe una copia de su queja a la escuela y al mismo tiempo,
2. Envíe una copia por correo a la ODR a la siguiente dirección:

Office for Dispute Resolution
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112-2764

0

Envíe una copia por correo electrónico a la ODR al:

odr@odr-pa.org

0

Envíe una copia por fax a la ODR al:

717-657-5983



Puede encontrar instrucciones sobre cómo enviar la queja por correo electrónico en la página web de la ODR: <http://odr-pa.org/odr-request-forms/>



Paso 3: Revisar la información de la ODR

Una vez que la ODR reciba su queja, usted recibirá la siguiente información sobre su audiencia del proceso debido:

- Una carta del coordinador de casos de la ODR indicando el nombre y la información de contacto del oficial de la audiencia; y
- Un [Aviso de la audiencia](#), indicando la fecha y la hora de la audiencia.

El coordinador de casos también le enviará la siguiente información general:

- Guía sobre la mediación (vea el [Apéndice M](#))
- Hoja informativa sobre el proceso legal debido para estudiantes dotados (vea el [Apéndice N](#))

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta información, usted puede contactar al coordinador de casos de la ODR que ha sido asignado a su caso. Mientras el oficial de la audiencia decide todos los aspectos del caso (horarios, mociones, etc.), el coordinador de casos de la ODR está disponible para responder preguntas generales que usted pueda tener sobre el proceso.

Usted también recibirá información del oficial de la audiencia. Esta información incluirá:

- Instrucciones dadas antes de la audiencia
- Una explicación sobre los plazos de tiempo del proceso legal debido, desde la queja hasta la toma de decisión
- Una carta explicando los procedimientos de la audiencia a los padres que se representarán a sí mismos



Si usted será representado por un abogado, el oficial de la audiencia enviará los dos primeros artículos a su abogado en vez de a usted.



Usted puede encontrar copias de los formularios que recibirá de la ODR en los apéndices.

Guía sobre la mediación- [Apéndice M](#)

Hoja informativa sobre los procedimientos del proceso legal debido para estudiantes dotados- [Apéndice N](#)



Paso 4: Revisar cualquier contestación de la escuela a su queja

El distrito escolar puede presentar una contestación a su queja.

Si la escuela presentó la queja, usted puede presentar una contestación. Los mismos procedimientos aplican si usted es el que presenta la contestación.

A continuación se encuentra una explicación sobre cómo presentar una contestación:

- No hay formularios a seguir al presentar una contestación. Una carta con su respuesta es aceptable.
- En la contestación, la escuela (o usted, si la escuela presentó la queja) debe describir su posición. En otras palabras, la contestación debería tratar la información que se encuentra en la queja.

Por ejemplo: Si su queja indica que usted cree que su niño no recibió una instrucción especialmente diseñada que haya sido calculada razonablemente para producir un beneficio educativo significativo y el progreso del estudiante, la contestación del distrito indicará por qué cree que su niño sí recibió un beneficio educativo significativo.

Ejemplo: Si la escuela solicita una audiencia para demostrar que la evaluación de su niño fue hecha de forma apropiada, en su contestación, usted debería indicar todas las razones por las cuales usted cree que no fue una evaluación apropiada.

- La contestación debe ser enviada al oficial de la audiencia y a la otra parte. También se debe enviar una copia a la ODR.



Lea con detenimiento la contestación del distrito con respecto a su queja. La contestación le ayudará a entender la posición del distrito (o sus convicciones) sobre la información que se encuentra en su aviso de la queja. Esto le dará una mejor idea sobre cómo el punto de vista del distrito (con relación a la situación de su niño) difiere del suyo, y lo que el distrito planea probar en la audiencia del proceso legal debido.

Retiro de la solicitud de audiencia

Usted y la escuela pueden decidir sostener una reunión para hablar sobre la queja del proceso legal debido y tratar de resolverla. El retiro de la solicitud de audiencia ocurre en estas situaciones:

- a. Usted y la escuela han resuelto el asunto, ya sea en una reunión, en la mediación o en algún otro momento, y entonces no se necesita la reunión de resolución. Notifique al oficial de la audiencia inmediatamente que usted desea retirar la queja por una de estas razones. El oficial de la audiencia normalmente concederá su solicitud de retiro.
- b. Si, por otras razones, usted decide que no quiere continuar con la audiencia del proceso legal debido, usted debe notificar al oficial de la audiencia que usted desea retirar su queja. El oficial de la audiencia decidirá si permitirá o no que la queja sea retirada. Algunos de los factores que un oficial de la audiencia podría considerar al decidir si le permitirá retirar su queja son:
 - La etapa en que se encuentra el procedimiento. Si la audiencia está casi completa, es menos probable que el oficial de la audiencia conceda la solicitud;
 - Si la escuela (o usted, si es la escuela quien está tratando de retirar su queja) está de acuerdo con el retiro;



- Si la escuela no está de acuerdo con el retiro, la cantidad de daños que el retiro puede causar a la escuela (o a usted si es la escuela quien está tratando de retirar su aviso de la queja)
- La probabilidad de tener que sostener otra audiencia más adelante sobre los mismos asuntos.





Paso 5: Familiarizarse con las instrucciones dadas por el oficial de la audiencia antes de la audiencia y que se aplican generalmente

Los oficiales de la audiencia han preparado un documento llamado **Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente.**



Las instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente pueden ser encontradas en el [Apéndice J](#).

Uno de los asuntos que las instrucciones trata es sobre cómo comunicarse con el oficial de la audiencia. (Vea el [Apéndice J](#) #1).

A. Cómo contactar al oficial de la audiencia

A través del curso de los procedimientos, habrá ocasiones en que usted necesite comunicarse con el oficial de la audiencia. Los oficiales de la audiencia tienen reglas específicas sobre tales comunicaciones.

Estas son las reglas de los oficiales de la audiencia para comunicarse con ellos:

- **Correo electrónico.** Si el abogado de la escuela o el padre tiene una cuenta de correo electrónico, esta será *la única forma* de comunicarse con el oficial de la audiencia. Si una parte envía un correo electrónico al oficial de la audiencia, él o ella debe copiar a la otra parte en ese correo electrónico. A menos que el oficial de la audiencia indique lo contrario, no será necesario enviar copias impresas (copias de papel) de cualquier correspondencia o documento que sea enviado al oficial de la audiencia. Todos los correos electrónicos deben incluir el número de caso de la ODR en la línea de asunto. Los oficiales de la audiencia no recomiendan gráficas incrustadas ni “papelería” electrónica.



- **Correo y fax.** Si el abogado de la escuela o el padre no tiene una cuenta de correo electrónico, la correspondencia y otros documentos pueden ser enviados por correo o por fax. Los oficiales de la audiencia prefieren usar el correo en lugar del fax.
- **Conferencias telefónicas.** Si cualquiera de las partes cree que se necesita una llamada de conferencia con el oficial de la audiencia, él o ella debe notificar al oficial de la audiencia y a la otra parte como se explica en las partes antes mencionadas.

El oficial de la audiencia no trabaja en un horario normal de 9 a.m. a 5 p.m. Por lo tanto, no se sorprenda si usted recibe correos electrónicos del oficial de la audiencia asignado durante la noche o el fin de semana. Revise su correo o su correo electrónico regularmente para verificar si ha recibido cualquier comunicación del oficial de la audiencia o del abogado de la escuela.

B. El decoro en la audiencia

Las instrucciones dadas por el oficial de la audiencia antes de la audiencia y que se aplican generalmente tratan sobre el decoro (vea el [Apéndice I](#) #12) o cómo se espera que todos actúen durante la audiencia. Las instrucciones indican lo siguiente:

Se les informa a los abogados, a los participantes y a los observadores en la audiencia del proceso legal debido que los oficiales de la audiencia prohibirán la lectura de periódicos, revistas, libros, y demás, o realizar trabajos que no estén relacionados a la audiencia en el salón de audiencias mientras la audiencia esté en sesión. Los teléfonos celulares no pueden ser usados por ningún individuo en la sala de audiencias mientras la audiencia esté en sesión. Los oficiales de la audiencia pueden limitar o prohibir el uso de computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos que sean una distracción para el proceso de



audiencia. Sin embargo, los oficiales de la audiencia no limitarán el uso de computadoras portátiles u otros aparatos electrónicos cuando tal tecnología sea necesaria para ofrecer acomodados a personas con discapacidades. Los oficiales de la audiencia se dirigirán a las personas presentes, según sea necesario, con relación al decoro durante la audiencia.

C. Reducción de evidencia innecesaria/redundante

Las instrucciones dadas por el oficial de la audiencia antes de la audiencia y que se aplican generalmente hablan sobre la reducción de la evidencia innecesaria y redundante (ver el [Apéndice I](#) #11). Las instrucciones indican lo siguiente:

La resolución oportuna de la audiencia del proceso legal debido no es solamente lo que la ley busca, sino que también, en términos prácticos, es mejor para el estudiante, la familia, y los educadores. Por ello, se hará todo lo posible para concluir la audiencia dentro de dos días completos. Es la intención de los oficiales de la audiencia que las audiencias no se extiendan por más de cuatro días completos.

Un oficial de la audiencia, según su criterio, o a solicitud de una de las partes, puede sostener una conferencia antes de la primera sesión de una audiencia.

Sin importar si una conferencia antes de la audiencia es sostenida o no, las partes expondrán en su alegato de apertura que será registrada, el asunto o los asuntos que serán determinados por el oficial de la audiencia. Luego de los alegatos de apertura, el oficial de la audiencia volverá a declarar los asuntos para que sean precisos en el registro, pidiendo que las partes confirmen el asunto o los asuntos a ser determinados en la audiencia. Los asuntos que se encuentran en el registro y que fueron expuestos otra vez por el oficial de la audiencia controlarán el alcance de la audiencia y de la evidencia a ser presentada.



D. Notificando al oficial de la audiencia si se llega a un acuerdo

Las instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente hablan sobre llegar a un **acuerdo** (vea el [Apéndice I #7](#)). [Si su caso llega a un acuerdo en cualquier momento luego](#) de que un oficial de la audiencia haya sido asignado, se le debe notificar inmediatamente. Si usted fue quien solicitó la audiencia, usted debe notificar al oficial de la audiencia.





Paso 6: Entender los plazos de tiempo y la fecha límite para tomar la decisión

Existen plazos de tiempo específicos para sostener la audiencia del proceso legal debido y para la decisión del oficial de la audiencia.

Las regulaciones de Pennsylvania requieren que la audiencia del proceso legal debido sea sostenida dentro de 30 días después de haber solicitado la audiencia, y la decisión del oficial debe ser emitida dentro de 45 días después de haber solicitado la audiencia.

En la primera carta que usted recibirá de la ODR se le dará la fecha límite para tomar la decisión basado en este simple cálculo. La **fecha límite para tomar la decisión** es la fecha en que el oficial de la audiencia difundirá su decisión, y el caso del proceso legal debido será cerrado.





Paso 7: Divulgar la evidencia y los testigos a la escuela



Este paso es críticamente importante y tiene plazos de tiempo que usted debe seguir.

Hay tres tipos de [evidencia](#) que son usualmente presentadas al oficial de la audiencia en una audiencia del proceso legal debido:

1. Su testimonio;
2. El testimonio de sus testigos y los de la escuela, incluyendo cualquier experto; y
3. Documentos (llamados “pruebas documentales” en la audiencia)

Antes de que la audiencia tenga lugar, usted debe dejar saber a la escuela quiénes son sus testigos y qué documentos usted planea usar. Se requiere que la escuela le provea la misma información a usted.

Usted debe divulgar todos los testigos y todas las pruebas documentales a la otra parte 5 días antes de que la audiencia empiece.

Usted no tiene que usar un formulario en particular. Puede escribir una carta. Vea el [Apéndice N](#) para ver un ejemplo de una [carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia](#).

Usted puede enviarla por correo, entregarla o hasta enviarla por fax, pero debe usar un método que le permita probar que ha divulgado sus testigos y pruebas documentales de forma oportuna. Esto normalmente se llama “la divulgación dada 5 días antes de la audiencia.”



Vea el [Apéndice O](#) para ver un ejemplo de una carta de divulgación.

Tanto usted como la escuela deben cumplir las reglas de divulgación. Si alguno de ustedes no lo hace, la parte contraria puede pedir al oficial de la audiencia que impida que esos testigos testifiquen y evitar que la parte use las pruebas documentales. Si esto le sucede a usted, puede impedirle que pruebe su caso ante el oficial de la audiencia. No tome el riesgo de que el oficial de la audiencia le diga que no puede presentar todos sus testigos y evidencia porque no siguió las reglas de divulgación. Dele esta información al abogado de la escuela en el plazo de tiempo requerido. Esté listo para probar que proporcionó la información dentro del plazo de tiempo requerido, en caso de que alguien pregunte.

Para decidir qué mencionar en su documento de divulgación, considere lo que está tratando de probar al oficial de la audiencia. ¿Qué testigos le ayudarán a probar su caso? ¿Qué pruebas documentales le ayudarán a probar su caso?

Sus testigos deben cumplir todos estos requisitos:

- Tienen información sobre su niño y la situación que le está preocupando;
- Pueden proveer información relevante sobre el asunto;
- Su testimonio ayudará al oficial de la audiencia a tomar una decisión.

No use testigos que estarán testificando los mismos hechos; escoja los testigos que usted cree que serán más efectivos. Si usted presenta una lista larga de testigos, el oficial de la audiencia puede pedirle que le diga sobre qué usted espera que cada testigo testifique. Esto se llama dar “un alegato a favor de la prueba”. El oficial de la audiencia puede prohibirle que presente los testigos que él/ella cree que sean redundantes.

Usted tiene el derecho de traer su niño a la audiencia para que testifique. Esto no pasa frecuentemente. Sin embargo, usted sabrá mejor si es una buena idea hacer que su niño participe de esta forma. Si usted decide que su niño tiene información relevante que proveer, asegúrese de agregarlo a la lista de divulgación.

Si usted quiere que su niño testifique, pero que no esté presente durante toda la audiencia, asegúrese de mencionar esto con anticipación al oficial de la audiencia y al abogado de la escuela. Se pueden hacer los arreglos para que su niño testifique en cierto momento sin tener que estar presente durante toda la audiencia.

La escuela puede oponerse a que usted presente a algún testigo de su lista (de la misma forma que usted puede oponerse a que la escuela presente a algún testigo que se encuentre en su divulgación). El oficial de la audiencia decidirá en última instancia si un testigo particular puede testificar o no. A continuación se presentan algunas circunstancias que pueden causar que la escuela se oponga:

Ejemplo: Su vecino puede dar testimonio sobre las habilidades de su niño en casa, pero si el asunto trata sobre las necesidades y habilidades de su niño en la escuela, entonces no es probable que su vecino pueda dar un testimonio relevante. La escuela puede oponerse basado en la “relevancia”, y el oficial de la audiencia puede prevenir que su vecino testifique.



Ejemplo: El niño de su vecino recibió un programa particular de enriquecimiento que funcionó bien para él. Usted está interesado en el mismo programa de enriquecimiento. La ley requiere planes de educación individualizados. Esto significa que lo que funcionó para un niño no es necesariamente lo que otro niño necesita. El testimonio de su vecino probablemente no es apropiado.

Usted también necesitará determinar qué documentos (pruebas documentales) pretende usar en la audiencia. Muchas de sus pruebas documentales serán documentos que ha recopilado mientras estaba determinando si podía validar su caso o no (vea la página 13).





Paso 8: Solicitar citaciones (si es necesario)

Después de haber listado sus testigos en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia para la escuela, es su responsabilidad notificar a sus testigos sobre la fecha y la hora de la audiencia. El oficial de la audiencia puede programar sesiones específicas de la audiencia para testigos particulares, basado en sus horarios y disponibilidad.

Tan pronto usted sepa la fecha de la audiencia, notifique a sus testigos sobre la fecha, hora y lugar de la audiencia. Si hay problemas de planificación, notifique al oficial de la audiencia inmediatamente.

Una **citación** es una orden legal emitida por el oficial de la audiencia indicando a una persona que debe asistir a la audiencia del proceso legal debido. (Una citación también puede ser usada para obligar a alguien a entregar documentos).

Usualmente los testigos son conocidos de las partes y testificarán voluntariamente. Si usted ha listado a un testigo en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia, pero usted se entera que dicho testigo no asistirá a la audiencia por voluntad propia, usted puede pedir al oficial de la audiencia que emita una citación. Esto toma tiempo, así que asegúrese de solicitar la citación con mucho tiempo de anticipación antes de la fecha de la audiencia.

Usted debe incluir la siguiente información en su carta para el oficial de la audiencia para pedir una citación:

- El nombre de la persona que usted desea citar;
- Por qué es importante para su caso que esta persona asista y testifique;
- También sería provechoso que usted haga un esfuerzo para hacer que la persona asista a la audiencia sin necesidad de una citación.



Envíe una copia de esta carta al abogado de la escuela.

Siga el mismo procedimiento general si necesita una citación para obtener documentos que no han sido proporcionados para la audiencia. Envíe una carta al oficial de la audiencia solicitando una citación, e incluya la siguiente información:

- El documento o los documentos que usted está tratando de conseguir
- Por qué es importante para su caso tener ese o esos documentos
- También sería provechoso que usted haga un esfuerzo para obtener el documento (o los documentos) sin necesidad de una citación.

Envíe una copia de esta carta al abogado de la escuela.

El oficial de la audiencia determinará si la presencia del testigo o el documento es necesario o no.

Usted será responsable de entregar la citación al individuo. El oficial de la audiencia no será responsable de entregar la citación directamente al individuo. La citación será enviada a usted.

Si usted está teniendo problemas para obtener copias del expediente académico de su niño por parte de la escuela, usted no tiene que solicitar una citación. Contacte al abogado de la escuela y al oficial de la audiencia y explíqueles las dificultades que está teniendo para obtener los expedientes de su niño.





Paso 9: Enumerar las pruebas documentales

Después de haber decidido qué pruebas documentales usará en la audiencia, ahora es un buen momento para organizarlas y enumerarlas (identificarlas) en preparación para la audiencia. Los oficiales de la audiencia tienen reglas estrictas sobre la forma en que las pruebas documentales deben ser enumeradas. Este es un proceso estándar para los procedimientos legales.

La siguiente información explica exactamente cómo enumerar las pruebas documentales según lo exigen las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente ([Apéndice I #3](#)).

1. Empiece poniendo las pruebas documentales en el orden que tenga sentido para usted. Si su primer testigo hablará sobre el GIEP, por ejemplo, entonces tiene sentido que el GIEP sea su primera prueba documental. No hay una forma correcta o incorrecta de organizar sus pruebas documentales. El orden dependerá de lo que tiene sentido para usted y lo que es mejor para usted.
2. Luego de haber organizado sus pruebas documentales, es tiempo de enumerarlas. Todas sus pruebas documentales deben ser marcadas con una 'P' de Padre. (La escuela usualmente marcará sus pruebas documentales con una 'S').
3. En **cada página** de **cada prueba documental**, deberá incluirse el número de la prueba documental y el número de la página como parte del número total de páginas que hay en la prueba documental.
 - Por ejemplo, la primera prueba documental del padre, si tiene cuatro páginas, debe ser enumerada así: P-1, página 1 de 4; la página dos debe ser enumerada: P-1 página 2 de 4, la página 3 debe ser enumerada: P-1, página 3 de 4; la página 4 debe ser enumerada: P-1, página 4 de 4. Cada página debe ser enumerada por separado y por completo.
 - El número de la prueba documental y el número de página deben ser escritos en la esquina inferior derecha de la página. Para que los

números no sean cortados al ser copiados, éstos deben ser escritos al menos $\frac{1}{2}$ pulgada del borde de abajo y $\frac{1}{2}$ pulgada del borde derecho de la página.

- Cuando las pruebas documentales están en orientación horizontal (como a veces están los GIEP), éstas deben ser orientadas de forma que al ser colocadas verticalmente, la letra mire hacia el lado derecho. De hecho, el texto de una prueba documental en orientación horizontal debe ser leído desde abajo hacia arriba al agarrar la página verticalmente.



Vea el [Apéndice P](#) para ver ejemplos de pruebas documentales enumeradas.



Paso 10: Copiar las pruebas documentales

Después de haber enumerado sus pruebas documentales, usted necesita hacer copias. Se exige que usted haga cuatro juegos de copias de todas sus pruebas documentales para la audiencia.

Las cuatro copias serán usadas de la siguiente forma:

1. Una copia de las pruebas documentales será para usted.
2. Una copia de las pruebas documentales será dada al oficial de la audiencia durante la primera sesión de la audiencia.
3. Una copia de las pruebas documentales será dada al abogado de la escuela durante o antes de la primera sesión de la audiencia.
4. Una copia de las pruebas documentales estará disponible para el testigo para verlas mientras está testificando.

A continuación se encuentran las reglas para el copiado de pruebas documentales (tomado de las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente).

1. Las copias de sus pruebas documentales para el oficial de la audiencia deben estar en un solo lado de la hoja.
2. Las copias de sus pruebas documentales para el abogado de la escuela y para cualquier testigo pueden estar en un solo lado de la hoja o en ambos lados.

Sus pruebas documentales serán distribuidas de la siguiente manera:

1. Usted puede proveer una copia de sus pruebas documentales al abogado de la escuela antes de la primera audiencia, o durante la primera audiencia. El abogado de la escuela hará lo mismo.

2. Usted proveerá una copia de sus pruebas documentales al oficial de la audiencia durante la primera audiencia.

Si un documento está en una carpeta pero no es usado en la audiencia, lo más probable es que el oficial de la audiencia no lo acepte como parte del registro y lo más probable es que no lo use para tomar su decisión. Si usted quiere que una prueba documental sea considerada, usted debe asegurarse de usarla o hacer referencia a ella durante el curso de la audiencia.





Paso 11: Organizar las pruebas documentales para la audiencia

Se recomienda que usted coloque cada juego de copias de las pruebas documentales (enumeradas) en cuatro carpetas individuales (cuadernos), y que ponga una pestaña a cada prueba documental para que pueda encontrarla fácilmente. La primera página de la carpeta deberá listar todas las pruebas documentales con su número de pestaña asociado. Es muy común que todos los participantes de la audiencia del proceso legal estén nerviosos, y es probable que usted esté nervioso también. Se ha encontrado que este sistema de organización es la mejor forma de manejar la gran cantidad de pruebas documentales (y a menudo tienen más de una hoja) que son comúnmente usadas en la audiencia.



Vea el [Apéndice Q](#) para ver un ejemplo de la portada de una carpeta de pruebas documentales.



Paso 12: **Determinar cuáles pruebas documentales serán presentadas por ambas partes**

Una vez que usted haya intercambiado una lista de las pruebas documentales con la escuela, es probable que usted vea que el abogado de la escuela pretende usar alguna o todas las mismas pruebas documentales que usted usará. Los GIEP, NORA, reportes de **evaluaciones multidisciplinarias** para estudiantes dotados, tarjetas de calificaciones, etc. son mencionados frecuentemente por los padres y las escuelas entre las pruebas documentales para la audiencia. Eliminar las pruebas documentales duplicadas hace que el registro de la audiencia sea mucho más claro y conciso.

Las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente hablan sobre las **pruebas documentales que serán presentadas por ambas partes:**

Antes de la audiencia, el padre y el abogado de la escuela deben designar una copia de los siguientes documentos para servir como prueba documental del registro:

Pruebas documentales del registro:

- Permisos para evaluar/revaluar
- Reportes de expertos
- Invitaciones a cualquier reunión
- IEP para estudiantes dotados
- NORA

Estas “pruebas documentales del registro” pueden ser identificadas como pertenecientes al padre, o a la escuela, o a ambas partes. Sin importar cómo usted y la escuela decidan marcar estas pruebas documentales, sólo se debe usar una copia en la audiencia. El abogado de la escuela trabajará con usted a través de este proceso.

Ejemplo: En su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia, usted indica que el GIEP con fecha de septiembre del 2011 será una prueba



documental. Al enumerar sus pruebas documentales (Paso 9), usted enumeró este GIEP “P-1”. El abogado de la escuela, en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia, indicó que el GIEP con fecha de septiembre del 2011 será una prueba documental, y lo enumeró como “S-1”. En la audiencia, sólo se usará una copia del GIEP de septiembre del 2011. Usted y el abogado de la escuela decidirán si será marcado con una P de Padre, o una S para la escuela o una J para indicar que ambas partes usarán la misma prueba documental, pero, sin importar lo que decidan, solamente una copia será usada.

Los oficiales de la audiencia exhortan a usted y a la escuela a hablar sobre otras pruebas documentales listadas en ambas cartas de divulgación dadas 5 días antes de la audiencia y a escoger una sola copia para usarla en la audiencia. Pero, los oficiales de la audiencia podrían *exigir* que las partes designen una sola copia de las pruebas documentales para el registro.



Estas instrucciones se dirigen a ser aplicadas a los documentos duplicados. Si usted y/o el abogado de la escuela creen que hay una diferencia (significativa) en el material de cualquiera de las pruebas documentales del registro y que es importante que el oficial de la audiencia conozca, entonces usted y la escuela pueden usar sus propias copias (duplicadas) de la prueba documental en la audiencia.



Paso 13: **Objetar a los testigos o las pruebas documentales de la escuela**

En la carta de divulgación de la escuela dada 5 días antes de la audiencia se listarán los testigos que la escuela pretende presentar en la audiencia y las pruebas documentales que pretende usar. Revise esta información con detenimiento. Determine si tiene alguna objeción a los testigos y pruebas documentales listadas. (Si la escuela tiene una objeción sobre alguno de sus testigos o pruebas documentales, esté preparado para explicar al oficial de la audiencia por qué usted cree que esos testigos y pruebas documentales han sido incluidos apropiadamente en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia.)

Recuerde que es probable que el abogado de la escuela tenga mucha experiencia en las audiencias del proceso legal debido de educación especial, y que sepa cuáles testigos y pruebas documentales han sido incluidos apropiadamente en la carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia. En otras palabras, es una excepción, y no lo normal, que un padre tenga una objeción a la carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia de la escuela, y que el oficial esté de acuerdo con el padre y prohíba que el testigo testifique o impida que una prueba documental sea usada en la audiencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que usted tenga una objeción legítima, así que revise con detenimiento la carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia.

Un testigo o un documento no son considerados como objetables simplemente porque usted no está de acuerdo con lo que usted cree que el testigo dirá en la audiencia, o si no está de acuerdo con lo que se encuentra en la prueba documental. Si usted estuviera de acuerdo con los testigos y pruebas documentales de la escuela, no estuviera yendo a la audiencia del proceso legal debido.

Aunque es imposible enumerar todas las posibles razones por las cuales la escuela podría objetar, aquí hay algunas posibilidades:

- El testigo que usted ha incluido en la lista no es una persona apropiada para testificar en la audiencia.

Ejemplo: Usted ha incluido en la lista al Superintendente de la escuela de su niño o miembros del Consejo escolar como testigos para la audiencia del proceso legal debido. Aunque puede haber un raro caso en que el Superintendente o miembro del Consejo sea realmente necesario para establecer un hecho en la audiencia, la mayoría de veces es el director, el director de educación especial, los maestros u otro personal escolar quien tiene conocimiento directo sobre su niño y por lo tanto son los testigos apropiados para la audiencia.

- Usted ha incluido en la lista múltiples testigos para establecer la misma cosa.

Ejemplo: Si un maestro puede establecer un hecho importante en la audiencia, no es necesario presentar el testimonio de otros cinco maestros para decir la misma cosa. Recuerde que lo importante no es la cantidad (el número) de testigos y pruebas documentales, sino la calidad del testimonio del testigo y las pruebas documentales.

- Usted ha incluido en la lista todos los GIEP que su niño ha tenido como sus pruebas documentales.

Ejemplo: Antes de que la audiencia del proceso legal debido comience, el oficial de la audiencia identificará muy cuidadosa y deliberadamente los asuntos a ser tratados en la audiencia. Si el GIEP del 5^{to} grado de su niño será discutido en la audiencia, probablemente es irrelevante lo que dice el GIEP de su niño del 2^{do} grado. Esto no es una regla estricta; cada caso es diferente y usted podría establecer la relevancia del GIEP anterior. Pero esté preparado para explicar al oficial de la audiencia por qué este documento es verdaderamente relevante para los asuntos en cuestión.



Vea la Parte cuatro sobre las objeciones. Allí encontrará mucha más información sobre las objeciones.

Si usted cree que tiene una objeción legítima a la/las pruebas documentales o testigos de la escuela, usted puede hacer una de estas dos cosas:

1. Usted puede enviar una carta al oficial de la audiencia, y una copia al abogado de la escuela, explicando, en términos bien precisos, por qué usted cree que se debe prohibir que la escuela presente ciertos testigos, o usar cierta prueba documental. El oficial de la audiencia puede responder de varias formas diferentes:
 - El oficial de la audiencia puede responder su carta con el fallo sobre su objeción (indicándole si él o ella está o no está de acuerdo con usted);
 - El oficial de la audiencia puede pedir al abogado de la escuela que responda a su objeción/objeciones antes del fallo del oficial de la audiencia.
 - El oficial de la audiencia puede decidir encargarse de su objeción/objeciones en una conferencia telefónica;
 - El oficial de la audiencia puede decidir encargarse de su objeción/objeciones en la primera audiencia.
2. Su otra opción es tomar nota para usted mismo para que pueda presentar sus preocupaciones (objeciones) en la audiencia, y pedir al oficial de la audiencia que tome una decisión.





Para verificar...

Hasta ahora, ha ocurrido lo siguiente:

- ✓ Una queja fue presentada por usted o la escuela.
- ✓ Quien no presentó la queja, pudo haber presentado una respuesta a la queja.
- ✓ Usted y la escuela han intercambiado sus listas de divulgación dadas 5 días antes de la audiencia
- ✓ Usted ha enumerado y hecho cuatro juegos de copias de sus pruebas documentales
- ✓ Usted ha hablado con el abogado de la escuela sobre las pruebas documentales a ser usadas por ambas partes.
- ✓ Usted ha recopilado las cuatro copias de sus pruebas documentales y ha considerado ponerlas en carpetas individuales.
- ✓ Usted ha revisado la carta de la escuela con las listas de divulgación dadas 5 días antes de la audiencia para ver si tiene alguna objeción a sus testigos y/o pruebas documentales.
- ✓ Usted y el abogado de la escuela han intercambiado copias de sus pruebas documentales o lo harán en la primera audiencia.

Ahora es tiempo de hacer los preparativos finales para la audiencia. Cada quien se prepara de forma y en orden diferente, pero a continuación se encuentra una lista con las actividades comunes para prepararse.





Paso 14: Prepárese para la audiencia

Alegato de apertura

En la primera sesión de la audiencia, el oficial de la audiencia le pedirá a usted que haga un alegato de apertura.

Un alegato de apertura no es evidencia. El oficial de la audiencia no decidirá el caso basado en lo que usted diga o no diga en su alegato de apertura. Pero el alegato de apertura ayuda al oficial de la audiencia a determinar exactamente cuáles son los problemas (las cosas en que usted y la escuela no están de acuerdo). El alegato de apertura también da al oficial de la audiencia una visión general sobre su caso. Usted puede explicar los hechos básicos de la situación, y lo que le gustaría que el oficial de la audiencia hiciera.

Recuerde, hasta este momento, lo único que el oficial de la audiencia sabe sobre su caso es lo que usted puso en la queja, y lo que la escuela ha puesto en su respuesta. El alegato de apertura es su oportunidad para explicar con sus propias palabras sobre qué se trata su caso.

Tenga presente que el oficial de la audiencia espera que la parte que solicitó la audiencia declare exactamente cuáles son los problemas en la audiencia. El oficial de la audiencia sólo escuchará el testimonio y considerará los documentos relacionados a los problemas identificados en los alegatos de apertura.



Si no se plantea un problema en el alegato de apertura, éste no será tratado en la decisión del oficial de la audiencia, con algunas raras excepciones.

Después de que usted termine de hacer su alegato de apertura, el abogado de la escuela hará su alegato de apertura. Escuche con atención, ya que le dará una buena idea de cómo la escuela piensa cuestionar su punto de vista sobre el programa educativo de su niño.

Después de que las dos partes hayan dado su alegato de apertura, normalmente el oficial de la audiencia declarará los problemas de forma precisa en el registro. El oficial de la audiencia preguntará a cada parte si ha resumido correctamente los problemas y trabajará con las partes hasta que los problemas sean finalizados y aclarados. Si algo no fue incluido en el resumen final del oficial de la audiencia, esto no será tratado en la audiencia y no será incluido en la decisión del oficial de la audiencia.

Mientras usted comienza a prepararse para la audiencia que se acerca, usted podría empezar escribiendo su alegato de apertura para organizar sus pensamientos. Otras personas prefieren escribir el alegato de apertura después de haber terminado de prepararse para la audiencia. Usted puede hacer lo que mejor funcione para usted. Sin embargo, usted debería escribir su alegato de apertura antes de la audiencia y probablemente debería leerlo en la audiencia. Normalmente, el alegato de apertura dura unos 5 minutos.

A continuación damos algunos consejos para planificar su alegato de apertura:

- Diga los hechos como usted cree que sean.
- Sea claro.
- Sea firme, pero positivo. Este no es el momento de ser argumentativo.
- No exagere su caso.
- Explique la teoría de su caso (lo que usted cree que la situación es, y lo que usted cree que la situación debería ser).
- Termine explicando la solución o el resultado que busca.

(Mauet, 1980)



Ejemplos de formatos de alegatos de apertura

A continuación se encuentra un formato que tal vez quiera usar. Usted no tiene que usarlo, pero le da una idea de cómo estructurar su alegato de apertura:

- **Introducción:**
“Oficial de la audiencia [*Nombre*]: Mi nombre es Beth Jones, y soy la madre de Connor Jones, un estudiante de 5^{to} grado en [distrito escolar].”
- **Descripción breve sobre los hechos relevantes con relación a su niño y la razón por la cual solicitó el proceso legal debido:**
“Yo solicité el proceso legal debido porque tengo preocupaciones sobre el programa para estudiantes dotados de mi niño. Se ha identificado que Connor es dotado en matemáticas. A él le había ido muy bien en la escuela hasta este año.....”
- **Explique lo que usted cree que ha ocurrido.**
- **Explique lo que usted cree que la evidencia mostrará:**
“El GIEP de noviembre del 2012 indica que..... “
- **Lo que está buscando:**
“Esto es lo que estoy pidiéndole que haga.....”
“Gracias.”

Orden de los testigos en la audiencia

Mire su listado de testigos en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia. Usted necesitará decidir en qué orden quiere presentar su caso.

- ¿Qué orden tiene más sentido lógico?
- ¿Qué testigo debería testificar primero?
- ¿Existe algún problema de horario para programar a algún testigo? De ser así, es posible que tenga que ir fuera de orden. Esto significa



presentar a un testigo en un momento diferente de cuando usted hubiera preferido. Usualmente esto no afecta su caso de ninguna manera.

- ¿Qué usted quiere que cada testigo establezca?
- ¿Quiere usted que un testigo testifique sobre alguna prueba documental? Incluya esto en sus notas para que no se le olvide.

Su testimonio en la audiencia

Es posible que usted quiera ser testigo en la audiencia. Normalmente a los testigos se les hacen preguntas que deben contestar. Ya que usted no tiene un abogado que le haga preguntas, en vez de esto, a usted se le permitirá hacer una declaración. El taquígrafo judicial tomará su juramento, como a cualquier otro testigo, pidiéndole que jure o afirme decir la verdad. Entonces, a usted se le dará la oportunidad de testificar. Luego, el abogado de la escuela, y tal vez el oficial de la audiencia, le hará preguntas.

Usted puede escribir su testimonio y consultarlo, o incluso leerlo, si esto lo hace sentir más cómodo.

Preparando las preguntas para los testigos

Los testigos, (aparte de usted; vea la página 70) no pueden simplemente hacer una serie de declaraciones. En lugar de esto, el abogado o el padre deben hacer preguntas al testigo. La forma en que usted se prepara para interrogar al testigo dependerá de usted y de su estilo y preferencia. Es posible que usted quiera escribir preguntas específicas para cada testigo. Usted puede escribir una lista de los temas que le gustaría tratar con cada testigo, en lugar de las preguntas. Pero sin importar cómo decida hacerlo, usted debe determinar lo que desea preguntar a todos los testigos (tanto a los suyos como a los de la escuela) en la audiencia.

Recuerde, las preguntas que usted haga a sus testigos y las respuestas que espera obtener de ellos están destinadas a probar su caso, es decir, a establecer lo que usted crea que son los hechos. Tenga esto pendiente al escribir las preguntas, pero tenga en cuenta que usted no puede saber con 100% de certeza lo que los testigos dirán.



Pautas para interrogar a los testigos

Hay reglas para interrogar a los testigos. La audiencia del proceso legal debido es un procedimiento administrativo más que un procedimiento judicial, así que el oficial de la audiencia no está obligado a seguir las reglas estrictas que aplican en un procedimiento judicial. Sin embargo, es importante que usted se familiarice con algunas de estas reglas ya que el oficial de la audiencia espera que usted y el abogado de la escuela sigan dichas reglas de cierta forma.

Una de las reglas fundamentales para recordar es que usted no puede testificar por sus testigos. Usted presenta o llama un testigo en la audiencia porque usted cree que ese testigo testificará hechos importantes que el oficial de la audiencia necesita escuchar. Usted no llama a sus testigos y luego les da las respuestas que usted está esperando escuchar en su pregunta, ni sugiere las respuestas en su pregunta. Esto se llama **pregunta sugestiva**.

Así que cuando usted esté interrogando a sus propios testigos (esto se llama **interrogatorio directo**) usualmente no se permitirá que usted haga preguntas sugestivas, las cuales son preguntas que sugieren o contienen la respuesta.

A continuación damos un ejemplo de una pregunta sugestiva, la cual es inapropiada:

Padre: “Así que mi niño no recibió actividades de enriquecimiento de matemáticas durante los meses de enero a marzo, tres veces a la semana como lo requiere su GIEP, ¿correcto?”

Abogado del distrito escolar: “Objeción. [Nombre del padre] está haciendo una pregunta sugestiva.”

En lugar de esto, el interrogatorio debería proceder de la siguiente forma:

Padre (pregunta no sugestiva): “¿Qué tan a menudo recibió mi niño actividades de enriquecimiento de matemáticas durante los meses de enero a marzo?”



[El testigo responde]

“¿Qué tan a menudo dice el GIEP que mi niño debería haber recibido actividades de enriquecimiento de matemáticas durante ese tiempo?”

[El testigo responde]

“¿Qué efecto, si hubo alguno, causó esta reducción en las actividades de enriquecimiento de matemáticas en la habilidad de mi niño para progresar en las metas del GIEP?”

[El testigo responde]

Es muy fácil hacer preguntas sugestivas; en ocasiones, incluso los abogados expertos podrían hacerlo. Podría ser útil empezar sus preguntas con palabras como quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, para reducir la posibilidad de hacer preguntas sugestivas.

Usted no puede hacer preguntas sugestivas a sus propios testigos, pero usted *puede* hacer preguntas sugestivas a los testigos de la escuela. La interrogación de los testigos de la escuela sucede durante el **contrainterrogatorio**.

La forma típica de conducir un contrainterrogatorio es empezar con:

“No es cierto que...”

O

“Usted estaría de acuerdo conmigo en que...”

Cuando esté decidiendo qué preguntas quiere hacer a los testigos, recuerde que no debe hacer preguntas sugestivas a sus testigos, pero puede hacer preguntas sugestivas a los testigos de la escuela. Si no está seguro de que un testigo sea testigo del padre o de la escuela, hable con el oficial de la audiencia sobre esto.



Hechos versus opinión

Normalmente, un testigo sólo puede testificar sobre los hechos que son parte de su conocimiento, y no su opinión. Una excepción a esto son los **testigos expertos**, quienes pueden testificar sobre sus opiniones; sin embargo, usted debe probar que su testigo es un experto haciéndole preguntas que muestren que él o ella tiene conocimiento en el área en que testificará. El experto es usualmente un profesional en el área en la cual se busca el testimonio. Por ejemplo, un psicólogo, terapeuta u otro profesional que trabaje con su niño. La escuela también puede presentar a sus expertos para testificar en la audiencia.

Para que un testigo califique como experto, usualmente se le hacen preguntas que tratan sobre la educación de la persona, sus títulos y experiencia laboral. Sus respuestas demuestran que tienen conocimiento sobre el tema que se les pedirá que testifiquen, tales como pruebas psicológicas, terapia física, etc.

A continuación damos un ejemplo de preguntas que se les hacen a los expertos:

Padre: “Dr. Smith, ¿Puede usted describir sus antecedentes educativos?”

[El testigo responde]

“Por favor describa su experiencia laboral.”

[El testigo responde]

Si el experto ha publicado libros o documentos sobre el tema, o si ha hecho alguna otra cosa importante, usted puede preguntarle sobre eso. Usted puede obtener ideas para hacerle preguntas al revisar el currículum vitae del experto.

Usted debe finalizar su interrogatorio con “Ofrezco al Sr. Smith como experto en el campo de [área de especialidad]”.



Nota: Es posible que no se le exija mostrar que su experto está capacitado. Si el abogado de la escuela y el oficial de la audiencia ya conocen al experto, es posible que no tenga que pasar por este proceso. A veces las partes pueden estipular, o estar de acuerdo sobre la capacidad de un experto.

Siempre tenga una copia actualizada del currículum vitae de su experto para presentarla al oficial de la audiencia (y una copia para el abogado de la escuela).

Si usted está presentando a un experto que exige una tarifa para asistir a la audiencia, usted será responsable de pagar esa tarifa. Hable con su experto tan pronto como sea posible para determinar qué tarifa él o ella cobrará para asistir a la audiencia. Si usted tiene un reporte o evaluación privada completada por un doctor u otro profesional, usualmente es mejor que ellos estén allí para testificar sobre el reporte. Sin embargo, ya que el costo puede ser considerable, usted tendrá que determinar si va a pedir al experto que asista a la audiencia, o pedir al oficial de la audiencia que le permita al experto testificar por teléfono (lo cual puede ahorrarle dinero), o sólo presentar el reporte del experto para el registro. Vea las páginas 109-111 para obtener información sobre cómo usar los reportes de los expertos en la audiencia.

Antes de escribir sus preguntas, lea la Parte Cuatro sobre las objeciones. Entender las objeciones comunes aumentará la probabilidad de que sus preguntas no sean “objetable”. Luego, continúe leyendo esta sección, y empiece a preparar las preguntas o las áreas de preguntas para cada testigo.

Preparación final para la audiencia

Verifique otra vez la fecha, la hora y el lugar de la audiencia.

Confirme que sus testigos sepan la fecha, la hora y el lugar de la audiencia.



Asegúrese de que sus testigos estarán disponibles todo el día para la audiencia. Si no lo están, establezca la hora en que estarán disponibles con el oficial de la audiencia y el abogado de la escuela para que la audiencia se desarrolle de forma eficaz y su testigo pueda testificar.

Déjele saber a su testigo qué esperar. Explíqueles que estarán bajo juramento y necesitarán responder las preguntas con la verdad. Déjeles saber que el distrito podrá hacerles preguntas cuando usted haya terminado de interrogarlos. Déjeles saber que el oficial de la audiencia también podría hacerles preguntas.

Es importante que usted confirme con anticipación los arreglos para las bebidas/agua durante la audiencia, los arreglos para el almuerzo o cena, dependiendo de la hora de la audiencia, y cualquier otra cosa especial que usted o cualquier otra persona que asista a la audiencia puedan necesitar.

Traiga los artículos que le ayudarán a estar más cómodo (café, agua, meriendas para los descansos, almuerzo). Traiga su almuerzo o traiga dinero para comprarlo. Es posible que no haya un lugar para mantener su almuerzo refrigerado, así que tenga esto en cuenta.

Pida permiso para faltar al trabajo.

Haga los arreglos para el cuidado de niños o de transporte, si es necesario.

No hay un código de vestir para las audiencias, pero ya que son un procedimiento legal, no se recomienda que se vista demasiado casual (pantalones cortos, sandalias, etc.)



Una simulación de la audiencia del proceso legal debido está disponible en la página web de la ODR. Puede ser útil ver el video antes de su audiencia. <http://odr-pa.org/odr-training-videos/>



Paso 15: Información miscelánea: Solicitar que una audiencia sea reprogramada

Cuando un oficial de la audiencia sea asignado al caso, él/ella programará la audiencia.

Habrán veces en que usted simplemente no puede asistir a la audiencia que ha sido programada. Sepa que no hay hechos particulares que siempre resultarán en que la audiencia sea reprogramada. En lugar de esto, el oficial de la audiencia tiene que considerar cada caso individual. La única persona con la autoridad para decidir (el oficial de la audiencia) debe comparar numerosos factores que frecuentemente son incompatibles.

Hay un número de razones comunes por las que un padre podría pedir que una audiencia sea reprogramada. Ya sea que el oficial de la audiencia esté o no esté de acuerdo en reprogramar la audiencia, esto no debe ser interpretado como un reflejo de lo fuerte o débil que es su caso, o la preferencia del oficial de la audiencia por una parte sobre la otra.

Tenga en cuenta que cada caso es diferente, y que el oficial de la audiencia tiene que considerar muchos factores al decidir si una audiencia debe ser reprogramada, incluyendo los plazos de tiempo requeridos para sostener la audiencia y para emitir la decisión.

Los oficiales de la audiencia tienen reglas sobre cómo solicitar que una audiencia sea reprogramada. Estas reglas se encuentran en las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente. (Vea el [Apéndice I #2.](#)) Al solicitar que una audiencia sea reprogramada, usted deberá seguir este procedimiento:

1. Verifique con el abogado de la escuela para ver si se opone a que la audiencia sea reprogramada.
2. Notifique inmediatamente al oficial de la audiencia sobre la necesidad de reprogramar la audiencia tan pronto sepa que necesita hacerlo.
3. Indique la **razón exacta** de su solicitud.

4. Deje saber al oficial de la audiencia si la escuela está de acuerdo con su solicitud de reprogramar la audiencia.

Ejemplos de razones para solicitar que la audiencia sea reprogramada:

1. “Mi jefe no me dará permiso para faltar al trabajo ese día.”

En la medida de lo posible, trate de obtener permiso de su empleador para ausentarse lo más pronto que pueda.

2. “Actualmente estoy buscando un abogado.”

Si usted está tratando de encontrar a un abogado, deje saber al oficial de la audiencia que esta es la razón por la cual está solicitando reprogramar la audiencia. No se demore en localizar a un abogado, ya que en algún momento el oficial de la audiencia insistirá en proceder incluso si no puede encontrar a un abogado.

3. “No puedo conseguir cuidado de niños ese día.”

Trate de anticipar y hacer arreglos para el cuidado de niños antes de la fecha de la audiencia.

4. “Tengo que asistir a un evento especial con mi niño o mi familia en la fecha de la audiencia.”

Si al iniciar el proceso de la audiencia usted sabe que tiene algún evento especial programado, notifique al oficial de la audiencia que no está disponible en ese día en particular. El oficial de la audiencia puede permitir esto dependiendo del evento y del estatus de la audiencia.

5. “Tengo una evaluación pendiente y me darán los resultados antes de la fecha de la audiencia.”

Cuando esto sucede, el oficial de la audiencia puede hacer una de dos cosas:



- Reprogramar la audiencia para permitir que la evaluación sea completada;

0

- Indicar a la parte que solicitó el proceso legal debido que retire la solicitud, y que vuelva a presentar la queja cuando la evaluación sea completada y estén preparados para ir a la audiencia.

Lo más probable es que el oficial de la audiencia concederá la solicitud para reprogramar la audiencia cuando la evaluación ya esté en proceso y va a ser completada bien pronto, siempre y cuando los plazos de tiempo aún puedan ser seguidos.

6. “Tengo otro asunto en el tribunal en esa misma fecha y hora.”

Dele al oficial de la audiencia tanta información como sea posible sobre el otro asunto. El oficial de la audiencia puede pedirle una prueba de este conflicto de agenda (tal como el aviso de la audiencia u orden judicial). Recuerde, la audiencia del proceso legal debido también es un procedimiento legal, y usualmente es tan importante como cualquier otro asunto legal.

7. “Estaré lejos en mis vacaciones durante esa fecha.”

Si al iniciar el proceso de la audiencia usted sabe que tiene alguna vacación programada, notifique al oficial de la audiencia sobre las fechas de su vacación tan pronto como sea posible. Es mejor alertar al oficial de la audiencia sobre vacaciones que estén pre-planificadas tan pronto como le den el nombre del oficial de la audiencia asignado.

8. “Estoy teniendo problemas para obtener los expedientes escolares y necesito más tiempo.”

Si usted está teniendo problemas para obtener los expedientes educativos de su niño, usted debe solicitar esos documentos a la escuela por escrito y enviar una copia al oficial de la audiencia. El oficial



de la audiencia puede permitir que la fecha de la audiencia sea reprogramada con el fin de que la escuela dé acceso a los expedientes.

9. “Mis testigos no están disponibles el día de la audiencia.”

Cuando esto sucede, el oficial de la audiencia puede responder de varias maneras:

- El oficial de la audiencia puede reprogramar la audiencia a una fecha en que sus testigos estén disponibles.
- El oficial de la audiencia puede permitir que el testimonio sea dado por teléfono en la audiencia en lugar de que su testigo asista a la audiencia.
- El oficial de la audiencia puede indicar que se tome una declaración jurada de su testigo en lugar de que asista a la audiencia. Aunque esto es una excepción en las audiencias del proceso legal debido, en la declaración jurada los testigos pueden testificar ante un taquígrafo judicial y los representantes de ambas partes, y luego, la transcripción puede ser presentada al oficial de la audiencia. (Vea el paso 16).
- En el caso de un testigo experto, también puede ser posible entrar su reporte en el registro, en lugar de que el experto testifique en persona en la audiencia. Vea la página 109.

10. “Tengo una emergencia repentina (enfermedad, accidente, etc.).”

Contacte al oficial de la audiencia y a la escuela tan pronto como sea posible después de que suceda la emergencia para notificarles a todos de forma oportuna que usted no puede asistir a la audiencia.

11. “La escuela y yo estamos tratando de resolver el caso (llegar a un acuerdo), pero necesitamos más tiempo para hablar.”

Si usted y la escuela están tratando de resolver el caso sin tener que ir a una audiencia, pero necesitan un poco más de tiempo para hablar,



avise al oficial de la audiencia sobre esto. El oficial de la audiencia podría estar dispuesto a conceder un corto retraso de los procedimientos para dar tiempo a ver si se puede llegar a un acuerdo y retirar la solicitud de audiencia.

12. “No recibí el aviso de la audiencia hasta justo antes de haber sido programada a tener lugar.”

Si usted recibió el aviso justo antes de la fecha de la audiencia y no tiene suficiente tiempo para prepararse, usted debería dejarle saber al oficial de la audiencia y solicitar que la audiencia sea reprogramada. Sin embargo, es raro que las partes reciban un aviso atrasado, e incluso si esto sucede, los preparativos para la audiencia deberían haber empezado antes de presentar la queja, o tan pronto como la queja de la otra parte sea recibida.

Información básica sobre las audiencias reprogramadas

Se debe recordar lo siguiente con relación a las audiencias reprogramadas:

- Es muy probable, pero no seguro, que el oficial de la audiencia concederá una solicitud hecha por ambas partes (en donde usted y la escuela desean que la audiencia sea reprogramada).
- Cualquiera de las dos partes tiene el derecho de oponerse a la solicitud de la otra parte para reprogramar una audiencia. Si usted piensa que el oficial de la audiencia no debería acceder a la solicitud del distrito escolar para reprogramar una audiencia, debe enviar un correo electrónico o carta al oficial de la audiencia sin demora (junto con una copia para la escuela), explicando por qué usted piensa de esa forma.
- Recuerde, los oficiales de la audiencia son los únicos que pueden decidir si un caso debe ser reprogramado o no. Las cosas que un oficial de la audiencia podría considerar incluyen:
 - Los plazos de tiempo para completar la audiencia y tomar la decisión.



- Si la audiencia ya ha sido reprogramada;
- La cantidad de tiempo disponible que usted ha tenido para encontrar a un abogado que lo represente;
- La cantidad de tiempo que usted o la escuela ha tenido para prepararse para la audiencia;
- El estatus de su niño. Por ejemplo, si su niño está sin una colocación educativa, es probable que el oficial de la audiencia se muestre renuente a posponer los procedimientos excepto por las razones más persuasivas.

La audiencia del proceso legal debido se asemeja más a un procedimiento judicial que a una cita personal. Debido a que las rutinas diarias de los muchos individuos que deben estar allí casi siempre estarán en conflicto, sólo las razones más críticas son una buena causa para solicitar que sea reprogramada. Esto aplica a solicitudes que usted presenta para reprogramar la audiencia, así como también a las solicitudes que la escuela presenta para reprogramar la audiencia. Si la solicitud para reprogramar la audiencia es rechazada, es importante que usted asista de todos modos y que haga lo posible para presentar el caso a favor de los programas o servicios que usted cree que su niño necesita. Si usted no asiste a la audiencia, ésta puede proceder sin usted y las decisiones pueden ser tomadas sin su aporte.





Paso 16: Información miscelánea: La declaración jurada

Una **declaración jurada** es el proceso en donde se toma el testimonio de un testigo fuera de la audiencia programada. La declaración jurada se usa cuando no es posible que el testigo asista a la audiencia. Las declaraciones juradas siguen mucho del mismo procedimiento que las audiencias: un taquígrafo judicial está presente; el testigo jura o afirma decir la verdad; toda lo hablado es registrado por el taquígrafo judicial, etc. La mayor diferencia, por supuesto, es que el oficial de la audiencia no está presente. Si se hacen objeciones, son anotadas en el registro para que el oficial de la audiencia tome una decisión más adelante. La transcripción de la declaración jurada es presentada al oficial de la audiencia como evidencia. Las declaraciones juradas no se usan frecuentemente en las audiencias del proceso legal debido, pero son una posible solución para los problemas de horario. Si usted cree que podría tener que tomar una declaración jurada, informe al oficial de la audiencia tan pronto como sea posible.



Para verificar...

Ya usted ha hecho lo siguiente para prepararse para la audiencia:

- ✓ Se preparó para la audiencia al planificar:
 - Su alegato de apertura
 - El orden en que presentará a sus testigos
 - Su testimonio
 - Las preguntas para los testigos

- ✓ Vio los videos de la audiencia del proceso legal debido que se encuentran en la página web de la ODR para tener una mejor idea sobre lo que podría pasar durante la audiencia. <http://odr-pa.org/odr-training-videos/>

- ✓ Confirmó la fecha, la hora y el lugar de la audiencia y examinó esta información con sus testigos.

- ✓ Se familiarizó con las reglas del oficial de la audiencia para reprogramar audiencias en caso de que surja algún conflicto en el horario. Estas reglas se encuentran en la página web de la ODR en las Instrucciones dadas antes de la audiencia.

- ✓ Habló con el oficial de la audiencia para ver si una declaración jurada sería adecuada. Esto sólo es necesario si se entera que un testigo no puede asistir a la audiencia.

- ✓ La próxima sección lo preparará más para la audiencia al explicar las objeciones.





Parte cuatro: Objeciones



Las objeciones son oposiciones orales o escritas a los testigos o evidencias presentadas por una parte. El padre o la escuela pueden objetar la evidencia de la otra parte. Esta sección enumera las objeciones más comunes y provee una corta explicación sobre cada una.

La audiencia del proceso legal debido es un procedimiento administrativo, a diferencia de una audiencia ante el tribunal. Esto significa que los oficiales de la audiencia no tienen que seguir las reglas estrictas sobre evidencia y los testigos como un juez hace. No obstante, es probable que el abogado de la escuela haga **objeciones** durante el curso de la audiencia; esto es un procedimiento estándar. Usted puede hacer sus propias objeciones también. En cualquier caso, sería útil que usted tuviera un conocimiento general sobre las objeciones comunes hechas durante una audiencia. Tanto el oficial de la audiencia como el abogado de la escuela entenderán que usted no es un abogado y que no estará tan familiarizado y cómodo con las objeciones como ellos lo están.

Es probable que usted no esté de acuerdo con parte del testimonio dado. Esto no significa que usted debe hacer una objeción. Haga sus objeciones a las preguntas y respuestas que verdaderamente sean “objetable”. Recuerde que usted también tendrá la oportunidad de interrogar a cada testigo. Si usted cree que los testigos de la escuela no están tomando en consideración algún hecho importante, por ejemplo, usted puede señalar esto durante su conainterrogatorio.

Relevancia

Las preguntas hechas a los testigos, y las pruebas documentales usadas en la audiencia, deben ser relevantes a los asuntos tratados en la audiencia. En otras palabras, los documentos y los testigos deben ayudar al oficial de la audiencia a decidir el caso.

Ejemplo: Los asuntos de la audiencia tienen que ver con el programa de enriquecimiento de matemáticas de su niño en el 5^{to} grado. Las preguntas sobre la clase de matemáticas de su niño en 2^{do} grado probablemente no son relevantes a los asuntos de la audiencia. El abogado de la escuela puede objetar a estas preguntas basado en la relevancia.



Al pensar sobre las preguntas para los testigos, pregúntese a sí mismo si la pregunta en particular o la serie de preguntas ayuda a establecer lo que usted está tratando de probar al oficial de la audiencia.

Repetición (ya se hizo la pregunta y fue contestada)

Si al testigo se le hace la misma pregunta repetidamente, y él contesta, esto puede ser la base para una objeción.

Ejemplo: Si a un testigo se le hace la misma pregunta repetidamente, usted puede escuchar la siguiente objeción del abogado de la escuela: “Objeción. Ya se preguntó y contestó. El testigo ya ha dicho varias veces que.....[respuesta del testigo]. Estas preguntas son repetitivas.”

Recuerde que el oficial de la audiencia está escuchando el testimonio en la audiencia, y analizará la transcripción antes de tomar una decisión. Repetir el testimonio no va a aumentar la probabilidad de que una parte gane. Si el testigo ha declarado claramente su respuesta, no es necesario que la repita otra vez.

Declaración de referencia

Las [declaraciones de referencia](#) son:

- Declaraciones hechas por una persona en otro lugar que no es la audiencia;
- Presentadas en la audiencia para probar la veracidad de una declaración hecha.

El problema con las declaraciones de referencia es que la persona no está presente en la audiencia para poder interrogarla sobre lo que dijo o no dijo.

Ejemplo: La Sra. Jones tiene información importante para la audiencia. La Sra. Jones no está en la audiencia. Usted le pregunta al testigo, “¿Qué dijo la



Sra. Jones sobre...?” Usted podría escuchar lo siguiente del abogado de la escuela: “Objeción. La pregunta exige una respuesta de referencia.”

Hay muchas excepciones a la regla sobre las declaraciones de referencia. Sin embargo, hay tres cosas importantes que se deben recordar sobre las declaraciones de referencia:

1. El oficial de la audiencia del proceso legal debido no tiene que seguir las reglas sobre las declaraciones de referencia de forma exacta, como debe hacerlo un tribunal. Su oficial de la audiencia *puede* permitir cierta evidencia de referencia.
2. Un oficial de la audiencia no puede basar su decisión únicamente en evidencia de referencia.
3. Si la declaración hecha por una persona en algún momento fuera de la audiencia es crucialmente importante, usted debería presentar a esa persona como testigo en la audiencia.

Exige una opinión

Como se indica en las páginas 109-111, sólo los expertos o peritos pueden testificar sobre sus opiniones. Los testigos que no son peritos únicamente pueden testificar sobre hechos, aunque tengan opiniones sobre los asuntos del caso en el proceso legal debido.

Ejemplo: Su vecino testifica en la audiencia. Usted le hace esta pregunta: “¿Cree usted que la falta de actividades de enriquecimiento afectó la educación de mi niño?”

El abogado de la escuela podría hacer la siguiente objeción: “Objeción. Esa pregunta necesita la opinión de un experto. Este testigo no está capacitado para dar esa información.” Es probable que el oficial de la audiencia esté de acuerdo.

Ya que los expertos pueden dar opiniones, usted tiene más libertad al interrogar a su experto.



Asegúrese de hacer preguntas a sus testigos no expertos sobre los hechos referentes a la situación de su niño. No haga preguntas a los testigos no expertos sobre sus opiniones con relación a la situación de su niño.

Para organizar su evidencia, enumere a sus testigos expertos separado de los testigos no expertos en sus materiales de preparación para la audiencia y asegúrese de que las preguntas que usted hace a sus testigos no expertos no pidan una opinión.

Expone erróneamente la evidencia/Cita erróneamente a los testigos

Esta objeción es exactamente lo que parece. La pregunta al testigo expone erróneamente la evidencia que ha sido presentada de alguna forma.

Ejemplo: El testigo del distrito escolar testifica que es demasiado temprano para determinar si un programa particular de enriquecimiento de ciencias es apropiado para su niño. En su pregunta a la persona del distrito escolar, usted dice “usted ha testificado que el programa de ciencias no está estimulando a mi niño, ¿correcto?”. Usted podría escuchar la siguiente objeción del abogado de la escuela: “Objeción. Esta pregunta cita erróneamente lo que el testigo dijo en su testimonio.”

Preguntas confusas/capciosas/ambiguas/imprecisas/incomprensibles

Hacer las preguntas apropiadas en la audiencia es una destreza. ¡Es por esto que hay escuelas de leyes que enseñan estas habilidades! Para su información, sepa que las preguntas deben ser hechas en una forma que sean razonablemente claras y directas. No se trata de enredar al testigo con una pregunta redactada pobremente. Se trata de hacer preguntas que obtengan información de cada testigo para ser considerada por el oficial de la audiencia.

Lo mismo aplica para las respuestas que los testigos den. Si un testigo da una respuesta difícil de entender, se puede hacer una objeción. Se le pedirá al testigo que aclare su declaración.

Ejemplo: “No escuché (o entendí) la última parte de la respuesta del testigo. ¿Ella la puede repetir?”

Preguntas especulativas

Cualquier pregunta que pida al testigo que suponga algo puede ser considerada inapropiada.

Ejemplo: Las preguntas que comienzan de la siguiente forma son consideradas generalmente como preguntas que requieren una suposición:

“¿Entonces qué cree usted que hubiera pasado si...”

“¿No es posible que...”

Trate de hacer preguntas que permitan al testigo hablar sobre lo que realmente pasó, y no que supongan lo que pudo haber pasado.

Preguntas compuestas

Una pregunta compuesta es aquella que presenta dos hechos diferentes en una misma pregunta. El problema con las preguntas compuestas es que pueden ocasionar respuestas confusas. Por ejemplo, el testigo podría responder “Sí” a la primera parte de la pregunta, y “no” a la segunda parte.

Ejemplo: Esta es una pregunta compuesta: “¿Usted proporcionó actividades de enriquecimiento de matemáticas el lunes y luego no hubo enriquecimiento el miércoles?” En lugar de esto, usted preguntaría:

“¿Proporcionó usted enriquecimiento de matemáticas el lunes?”

[El testigo responde]

“¿Hubo enriquecimiento de matemáticas el miércoles?”



Divida las preguntas compuestas en dos preguntas, y permita que el testigo responda a la primera pregunta antes de hacer la segunda pregunta.

La pregunta es argumentativa

Su pregunta no debería parecer una discusión para el oficial de la audiencia. Para saber si su pregunta es argumentativa, hágase las siguientes preguntas:

- ¿La respuesta del testigo dará nueva información?
O
- ¿Estoy presentando una conclusión en mi pregunta y pidiéndole al testigo que la discuta conmigo?

Ejemplo: Usted podría creer que, debido a que su niño no se le proporcionó ciertas opciones de aceleración, él/ella no recibió un beneficio educativo significativo. Usted necesita probar con hechos y tal vez con la opinión de un experto que este es el caso. Preguntar simplemente a un testigo si está de acuerdo o no con su posición probablemente no contribuirá mucho a la audiencia. La siguiente pregunta puede causar una objeción del abogado de la escuela:

“Ya que mi niño no recibió tal programa, entonces ella no recibió un beneficio educativo significativo, y tiene derecho a recibir educación compensatoria, ¿correcto?”

“Objeción; la pregunta es argumentativa.”

Una objeción también puede ser hecha si la persona que hace la pregunta empieza a discutir con el testigo. Esto puede suceder cuando la persona que hace la pregunta no está de acuerdo con la respuesta del testigo. Recuerde que usted no estará de acuerdo con todo lo que cada testigo dice. Usted puede señalar los problemas que usted ve con el testimonio de un testigo y presentar su propia evidencia (pruebas documentales, testigos) que demuestren su posición, pero usted no puede discutir con un testigo con quien no esté de acuerdo.



Ejemplo: “¿Cómo puede usted decir que está bien que mi niño no vaya a las sesiones de enriquecimiento?”

Usted podría escuchar esta objeción del abogado de la escuela: “Objeción. La Sra. Smith está discutiendo con el testigo” o simplemente “Objeción. Pregunta argumentativa”.

La respuesta no contesta la pregunta

¡Asegúrese de que el testigo conteste la pregunta! Los testigos no siempre contestan la pregunta exacta que ha sido hecha. Es por esto que usted debe escuchar detenidamente cada respuesta antes de hacer la siguiente pregunta. Si el testigo no responde la pregunta, puede hacerse una objeción:

Ejemplo: Pregunta: “¿Qué tan a menudo el estudiante recibió actividades de enriquecimiento?”

Respuesta: “El estudiante recibió todo el enriquecimiento necesario.”

Usted podría escuchar la siguiente objeción del abogado de la escuela: “Objeción. El testigo no respondió la pregunta.”

Asegúrese de que su testigo conteste la pregunta hecha. Escuche la respuesta dada y *luego* haga la siguiente pregunta. No se preocupe tanto por hacer la siguiente pregunta de tal manera que no se dé cuenta que el testigo no respondió la pregunta anterior.

El interrogatorio es acumulativo

El oficial de la audiencia no permitirá que múltiples testigos testifiquen la misma cosa. Por lo tanto, si un testigo puede establecer un hecho, el oficial de la audiencia podría impedir que presente otros cinco testigos para decir exactamente lo mismo. Recuerde, lo que decide el caso no es la *cantidad* de evidencia, sino la calidad de la misma.



Ejemplo: Usted podría escuchar al abogado de la escuela decir esto: “Yo me objeto a esta evidencia. Ya ha sido dada por otros testigos.”

Al crear su lista de testigos y pruebas documentales para divulgar a la escuela, considere si puede establecer los mismos hechos con un testigo o prueba documental, en lugar de usar múltiples testigos y pruebas documentales. Recuerde, lo importante es la calidad de la evidencia presentada al oficial de la audiencia, no la cantidad de la misma.

Falta de base

“Crear la base” para que un testigo testifique o para usar una prueba documental en la audiencia significa ponerlo en contexto. En otras palabras, ¿por qué el testigo o prueba documental son importantes para la audiencia?

Ejemplo: Usted ha incluido a su vecino en su carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia. Para la escuela podría no ser aparente la razón por la cual su vecino es relevante para la audiencia del proceso legal debido y el programa educativo de su niño. El abogado de la escuela podría pedir que cree la base para establecer por qué su vecino tiene información relevante. El abogado de la escuela podría pedir un “alegato a favor de la prueba”. Un alegato a favor de la prueba explica al oficial de la audiencia por qué el testigo o prueba documental en particular es importante con relación a los asuntos.

Las pruebas documentales deben tener la base necesaria antes de ser presentadas como evidencia. Entonces, por ejemplo, usted no puede simplemente entregar al oficial de la audiencia un papel con algo escrito y decir que usted quiere presentarlo como una prueba documental. Primero usted debe establecer quién preparó el documento, cuándo, y a qué concierne.





Para verificar...

- ✓ Lea los consejos para los testigos en la sección de apéndices de esta guía. Comparta esta información con los testigos que ha seleccionado.
- ✓ Vea una simulación de la audiencia del proceso legal debido en la página web de la ODR.
- ✓ Haga una lista con las preguntas que le gustaría hacer a cada testigo para traerla a la audiencia. Esto le ayudará a organizar sus ideas y asegurar que no se le olvide nada el día de la audiencia.
- ✓ Haga una lista de la evidencia que le gustaría examinar con un testigo o presentar durante el tiempo en que el testigo es interrogado. Ponga el nombre del testigo al lado de la evidencia en su lista.
- ✓ Usted no puede objetar a un documento o al testimonio de un testigo simplemente porque usted no está de acuerdo con él. (Usted establece su desacuerdo al producir otra evidencia (testigos y documentos) que apoyen su punto de vista, así como también a través del conainterrogatorio del testigo.)
- ✓ Usted puede objetar a que un documento sea una prueba documental, o que un testigo testifique en la audiencia, si usted cree que tiene la base para que dicho documento o testigo sea excluido. Debe prepararse para explicar por qué usted cree esto.
- ✓ La mayoría de las veces, las objeciones son formuladas a las preguntas hechas a los testigos por el padre o el abogado de la escuela o a la respuesta del testigo. Pero recuerde, sólo porque un testigo dé una respuesta que usted no le gusta, no hace que la objeción sea válida.

Más a menudo las objeciones son hechas en la audiencia en respuesta a las preguntas hechas a los testigos por la otra parte o las objeciones son hechas a las respuestas de los testigos.



Sin importar si la objeción es escrita u oral, si es hecha antes o durante la audiencia, usted debe estar preparado para describir la base legal o factual de su objeción.





Parte cinco: Mociones



Las mociones son solicitudes escritas u orales para pedir al oficial de la audiencia que ciertas acciones ocurran. Esta sección habla sobre los tipos más comunes de mociones, y los procedimientos a seguir.

Información general sobre las mociones

Las **mociones** pueden ser presentadas por cualquiera de las partes.

Una copia escrita de una moción debe ser provista a la otra parte al mismo tiempo que es enviada o proporcionada al oficial de la audiencia.

Las mociones pueden ser dirigidas al oficial de la audiencia en cualquier momento durante el proceso.

El oficial de la audiencia decidirá (o emitirá un fallo) sobre la moción.

No todas las mociones son escritas; algunas mociones son orales. La complejidad del asunto de la moción usualmente determina si tiene más sentido poner la moción por escrito, o presentarla oralmente al oficial de la audiencia. La preferencia personal también puede determinar que la moción sea escrita u oral. Si la moción trata asuntos legales complicados, probablemente una moción escrita sea una buena idea para asegurar que todas las cosas que usted quiera decir estén listadas. Si la moción es bastante sencilla, entonces tal vez una moción oral sea más apropiada. También, puede presentarse un asunto inesperado en la audiencia, lo cual hace que sea imposible saber si una moción necesitará ser preparada. Existen dos posibles soluciones:

1. Hacer una moción oral en la audiencia; o
2. Dependiendo si esto funciona en cuanto al tiempo y si el oficial de la audiencia lo permite, una solicitud puede ser hecha para que se dé tiempo para preparar una moción escrita. Usualmente esto es necesario sólo cuando los asuntos son complejos.

No hay normas estrictas sobre cómo debe hacerse una moción, si por escrito u oralmente.

Tipos de mociones

Moción para limitar los asuntos: El oficial de la audiencia escuchará evidencia sobre dos tipos de asuntos:



1. Los asuntos que el oficial de la audiencia identifica al inicio de la audiencia después de escuchar los alegatos de apertura;
2. Los asuntos que se encuentran dentro de la jurisdicción del oficial de la audiencia.

Si usted o la escuela intenta tratar otros asuntos que no sean estos, una moción para limitar los asuntos podría ser hecha. (O, en vez de esto, puede hacerse una objeción; vea la Parte cuatro sobre las objeciones.)

Ejemplo: En la primera audiencia, se acuerda que el único asunto a ser tratado será el programa de matemáticas de su niño. Si usted hace preguntas sobre su programa de lectura, el cual no tiene ninguna conexión con el asunto sobre el programa de matemáticas, el abogado de la escuela puede pedirle al oficial de la audiencia que impida que usted haga esto.

Ejemplo: La queja plantea asuntos sobre la custodia de menores. El oficial de la audiencia no decide asuntos de custodia. La escuela puede presentar una moción para asegurar que este asunto no sea parte del caso.

Al preparar su queja, asegúrese de que 1) los asuntos que usted plantee puedan ser decididos por el oficial de la audiencia; y 2) que usted plantee todos sus problemas en ese momento, para asegurarse de que serán escuchados al mismo tiempo.

Moción para reconsiderar: Una moción para reconsiderar es exactamente eso. El oficial de la audiencia ha emitido un fallo (tomó una decisión) sobre una moción durante la audiencia. Una de las partes, usualmente la que presentó la moción, no está de acuerdo con la decisión del oficial de la audiencia y le pide que reconsidere la decisión. Una moción para la reconsideración sólo debe ser presentada si usted cree que al oficial de la audiencia se le pasó algún hecho crítico o aspecto de la ley. Una moción para reconsiderar no debe ser presentada simplemente porque usted no está de acuerdo con la decisión del oficial sobre la moción. Sin embargo, las mociones para reconsiderar la decisión final del oficial de la audiencia al final del caso no serán consideradas.



Moción para desestimar: Existen muchas razones por las cuales se podría presentar una moción para desestimar la queja.

1. Falta de jurisdicción (autoridad). Si el único asunto en la queja es sobre algo que el oficial de la audiencia no puede decidir, es probable que la escuela presente una moción para desestimar.
2. Cosa juzgada (del latín Res Judicata). Este término significa que el asunto ya ha sido decidido en una previa audiencia del proceso legal debido. Esto significa que las audiencias del proceso legal debido no pueden ser solicitadas una y otra vez para tratar el mismo asunto.
3. Recusación. Una moción para una recusación es una solicitud para que un oficial de la audiencia se retire de la audiencia. La moción para la recusación sólo debe ser presentada en los casos más serios, cuando usted cree que la evidencia es clara sobre la incapacidad del oficial de la audiencia para servir de forma imparcial. Las regulaciones enumeran los ejemplos que requieren que el oficial de la audiencia se retire del caso. Si alguna de estas circunstancias existe, el oficial de la audiencia debe ceder el caso a la ODR para ser reasignado.

Los Estándares de conducta para los oficiales de la audiencia de educación especial de la ODR en Pennsylvania (disponibles en la página web de la ODR) describen las circunstancias cuando un oficial de la audiencia debe recusarse a sí mismo, y los procedimientos a seguir.

Los requisitos para un oficial de la audiencia imparcial son:

- No debe ser un empleado del distrito escolar o de la agencia educativa que tiene que ver con la educación o cuidado del niño; y
- Él o ella no puede tener un interés personal o profesional que entre en conflicto con la objetividad del oficial de la audiencia en la audiencia.





Vea el Capítulo 16 ([Apéndice E](#)) para leer los reglamentos de Pennsylvania que rigen las audiencias del proceso legal debido, incluyendo los requisitos para el oficial de la audiencia.

El oficial de la audiencia decide todas las mociones de recusación. Si usted no está de acuerdo con la decisión del oficial de la audiencia, usted necesita apelar este asunto en el tribunal estatal o federal. Nadie, aparte del juez estatal o federal, puede anular la decisión del oficial de la audiencia sobre la solicitud de recusación.

4. **Excluir testimonio.** Una moción puede ser presentada para excluir (o impedir) un testimonio bajo estas circunstancias:
 - El testimonio es irrelevante (no tiene nada que ver con los asuntos tratados en la audiencia);
 - El testimonio es repetitivo (ya fue testificado);
 - No se permite el testimonio (por ejemplo, normalmente no se permite testimonio sobre las conversaciones para llegar a un acuerdo o la mediación);
 - El testigo no fue revelado correctamente en el documento de divulgación dado 5 días antes de la audiencia.

A veces las objeciones funcionan con la misma eficacia que una moción. Así que, por ejemplo, si una parte trata de presentar tres testigos que dirán la misma cosa, una objeción puede ser hecha (vea la Parte cuatro sobre las objeciones) o una moción puede ser hecha oralmente o preparada por escrito. Considere lo siguiente al decidir si una objeción es suficiente, o si quiere hacer una moción formal:



- ¿Es el asunto tan sencillo que probablemente una objeción será suficiente para alertar al oficial de la audiencia sobre su preocupación?
- ¿Es el asunto tan complicado que se necesita una moción escrita para explicar todas las complejidades?
- ¿Es el asunto tan crítico para su caso que parece lógico preparar una moción formal, en lugar de simplemente hacer una objeción?



Vea el [Apéndice R](#) para ver un ejemplo de una moción.



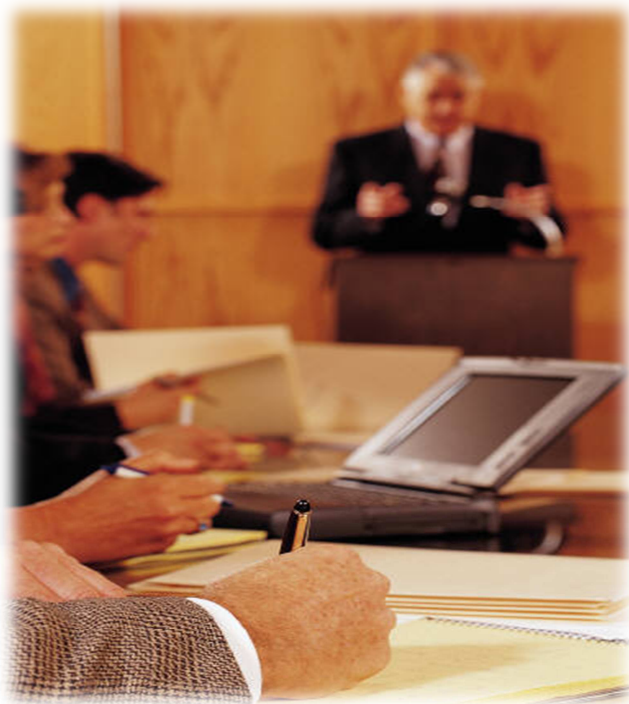
Para verificar...

- ✓ Las mociones a veces se necesitan durante el curso de una audiencia del proceso legal debido.
- ✓ Las mociones pueden ser presentadas por cualquiera de las partes. Pueden ser dirigidas al oficial de la audiencia en cualquier momento durante el procedimiento.
- ✓ Las mociones pueden ser escritas u orales. La complejidad del asunto de la moción usualmente determina si la moción debe ser por escrito o presentada oralmente al oficial de la audiencia.
- ✓ Hay diferentes tipos de mociones, incluyendo:
 - mociones para limitar los asuntos
 - mociones para reconsiderar
 - mociones para desestimar
- ✓ A veces una objeción funciona con la misma eficacia que una moción. Considere la complejidad y la naturaleza crítica del asunto al determinar si debe usar una moción o una objeción.





Parte seis: La audiencia del proceso legal debido



Usted probablemente tiene muchas preguntas sobre la audiencia del proceso legal debido, incluyendo dónde sentarse, cómo dirigirse al oficial de la audiencia, y cuándo recibirá la decisión del oficial de la audiencia. Esta sección de la guía provee información detallada sobre muchos de los aspectos de la audiencia del proceso legal debido.

Localización de la audiencia

La audiencia es casi siempre sostenida en algún lugar dentro del distrito escolar. La ley requiere que la audiencia sea en un lugar “razonablemente conveniente” para el padre, el cual es la escuela más a menudo.

La audiencia usualmente tiene lugar en una sala de conferencias. Antes de que la audiencia empiece, el oficial de la audiencia organizará la sala en la forma que él/ella desee. El oficial de la audiencia le dejará saber a usted y a sus testigos dónde pueden sentarse.

Usualmente el oficial de la audiencia se sienta a la cabecera de la mesa, el taquígrafo judicial se sienta a un lado y el “asiento del testigo” está al otro lado. Esto asegura que tanto el oficial de la audiencia como el taquígrafo judicial (quien está registrando todo el testimonio) puedan escuchar al testigo. Usualmente los padres y los testigos se sientan en un mismo lado de la mesa, y el abogado y personal de la escuela se sientan al otro lado de mesa.

Dependiendo de cuántos testigos hayan, éstos podrían tener que sentarse en sillas a lo largo de la pared, detrás de la mesa dónde usted se sentará. Sin embargo, tenga en cuenta que el tipo de edificio, sala, y mobiliario disponibles, así como también la preferencia individual del oficial de la audiencia, pueden cambiar un poco o mucho cómo la sala será organizada.

Las personas que asisten a la audiencia usualmente incluyen las partes, los abogados, los defensores, los testigos tales como maestros o psicólogos entre otros, observadores ocasionales de la ODR (con el propósito de evaluar al oficial de la audiencia o de entrenamiento), y los representantes de las agencias públicas, además de su distrito escolar, que puedan estar involucrados. Como cortesía, a usted se le notificará con anticipación si alguien de la ODR asistirá.

- En el día de la audiencia, asegúrese de tener todas sus pruebas documentales y su aviso de audiencia (el cual incluye los nombres y teléfonos de todos los participantes y la dirección y número de teléfono del lugar), así como también sus propias notas y preguntas propuestas para los testigos.



- Verifique todos los mensajes antes de salir a la audiencia para asegurar que nada ha sido cancelado o retrasado.
- En caso de mal tiempo, contacte al lugar de la audiencia (si el oficial de la audiencia no le ha dado otras instrucciones) para asegurarse de que no ha sido pospuesta.
- Si usted inevitablemente llegará tarde o no puede asistir debido a una emergencia de último minuto en el día de la audiencia, contacte al oficial de la audiencia inmediatamente a través de cualquier medio que él/ella le haya proporcionado y a alguien que esté en el lugar de la audiencia (usualmente la escuela).
- Una sesión de la audiencia puede durar algunas horas o todo el día. Las partes usualmente tienen una idea de la duración de la audiencia antes de tiempo, pero venga preparado por si acaso. Usted puede traer café u otra bebida a la audiencia, y también meriendas para comer durante los descansos.

Cómo dirigirse al oficial de la audiencia

Muchos oficiales de la audiencia tienen tarjetas de presentación que colocan sobre la mesa. Usted puede asumir que el nombre en la tarjeta es la forma en que al oficial de la audiencia le gustaría que usted se dirigiera a él, tal como “Dr. Jones” u “oficial de la audiencia Jones”. Si no hay tarjetas de presentación, o no está seguro de cómo dirigirse al oficial de la audiencia y/o abogado del distrito escolar, pregúnteles al inicio de la audiencia cómo debe hacerlo.

Debido al gran volumen de casos y el relativamente pequeño número de oficiales de la audiencia, es totalmente posible y probable que el oficial de la audiencia ya conozca a uno o más de los abogados involucrados en el caso. Esto no significa que el oficial de la audiencia está violando los estándares legales de imparcialidad. Sin embargo, si usted tiene alguna preocupación, usted puede preguntarle al oficial de la audiencia sobre esto.



Duración de las audiencias

La Parte Tres, Paso 6, de esta guía habla sobre los plazos de tiempo para finalizar una audiencia. El oficial de la audiencia puede hablar sobre la duración que una audiencia debe tener basado en los plazos de tiempo y la evidencia a ser presentada.

La resolución oportuna de las audiencias del proceso legal debido no es sólo exigida por ley, sino que en términos prácticos es mejor para el estudiante, la familia y los educadores.

Conferencias antes de la audiencia

Antes de la primera audiencia, el oficial de la audiencia puede sostener una **conferencia antes de la audiencia** por teléfono con usted y el abogado de la escuela. El propósito de la llamada es a menudo tratar de aclarar los asuntos. (Vea el [Apéndice J](#) #11).

Alegato de apertura del oficial de la audiencia

La audiencia comenzará con el alegato de apertura del oficial de la audiencia. El oficial de la audiencia se presentará a sí mismo, identificará a las partes y expondrá el propósito general de la audiencia. El oficial de la audiencia se asegurará de que usted entienda su derecho a ser representado por un abogado. Él/ella también explicará la diferencia entre una audiencia abierta (al público) y una audiencia cerrada (confidencial), asegurándose de que usted conoce la diferencia. Él/ella le informará que la audiencia será cerrada a menos que usted quiera que sea abierta. El oficial de la audiencia también le notificará sobre su derecho a una transcripción gratis, y los diferentes formatos de las transcripciones. El oficial de la audiencia se asegurará de que las partes han intercambiado las listas de testigos y pruebas documentales.



A veces, antes de que la audiencia comience, el oficial de la audiencia preguntará a las partes si desean un tiempo informal para hablar sobre un posible acuerdo. Esto es simplemente un esfuerzo para asegurar que las partes han tenido todas las oportunidades deseadas antes de la audiencia para explorar un acuerdo. Considere tomar esta última oportunidad para hablar con la escuela sobre la resolución del caso, pero no se sienta obligado a hacerlo o a llegar a un acuerdo.

Alegatos de apertura de las partes

Después de que el oficial de la audiencia haya completado esos aspectos iniciales, se le pedirá a cada parte un alegato de apertura, y lo más probable es que usted dé el suyo primero (ya que usualmente es el padre quien solicita la audiencia del proceso legal debido). Esto usualmente es una declaración de 5 minutos o menos sobre los asuntos específicos a ser resueltos en la audiencia así como también la decisión que usted quiere que el oficial de la audiencia tome, y que es similar a lo que se encuentra en la queja. Usted puede traer un alegato escrito y leerlo, si usted desea. Vea la página 66 sobre alegatos de apertura. Después de los alegatos de apertura, el oficial de la audiencia normalmente volverá a decir los asuntos precisos en el registro, para obtener confirmación de las partes sobre el/los asuntos. A partir de entonces, la audiencia sólo tratará los asuntos que han sido identificados y que las partes han acordado. (Ver el [Apéndice I](#) #11)

Orden de los testigos y progresión del testimonio

Normalmente, la parte que solicitó la audiencia del proceso legal debido será la primera en presentar su evidencia (vea el [Apéndice I](#) #8). Así que si usted solicitó la audiencia al presentar la queja, esté preparado para empezar con un alegato de apertura, y luego llamar a su primer testigo al estrado. Usted puede hablar con el oficial de la audiencia y el abogado del distrito escolar antes de que empiece la audiencia sobre el orden de los testigos. A veces usted y la escuela habrán presentado una queja para tratar múltiples asuntos.



Si esto sucede, contacte al oficial de la audiencia (y envíe una copia al abogado de la escuela), y pregunte cómo se presentará la evidencia, esto es, si se espera que usted empiece primero, o la escuela.

Interrogatorio de los testigos

Las preguntas que una parte hace a sus propios testigos se llaman interrogatorio directo o simplemente preguntas directas. Las preguntas que una parte hace a los testigos de la otra parte se llaman conainterrogatorio. A partir de entonces, usted podría ver que el interrogatorio va entre el **segundo interrogatorio directo** y el **segundo conainterrogatorio**. El **segundo interrogatorio directo** consiste en preguntas sobre la información provista por el testigo durante el conainterrogatorio. El **segundo conainterrogatorio** consiste en preguntas sobre información provista por el testigo durante el segundo interrogatorio directo.

El propósito del segundo interrogatorio directo y del segundo conainterrogatorio no es repetir lo que ya ha sido tratado a través del testimonio del testigo. En lugar de esto, el segundo interrogatorio directo y el segundo conainterrogatorio se limitan a la información provista por el testigo durante el conainterrogatorio (en el caso del segundo interrogatorio directo) y a la información provista por el testigo durante el segundo interrogatorio directo (en el caso del segundo conainterrogatorio).

Ejemplo: La presentación del testimonio del testigo puede proceder de la siguiente forma:

- Usted llama a su testigo. Usted le hace una serie de preguntas, llamadas interrogatorio directo.
- Cuando usted termina de interrogar a su testigo, el abogado de la escuela tiene la oportunidad de conainterrogar a este testigo.
- Cuando el abogado de la escuela termina de hacer preguntas a su testigo, usted tiene la oportunidad de hacer preguntas en el segundo



interrogatorio directo basado en la información que el testigo proporcionó durante el conainterrogatorio.

- Cuando usted termina de hacer preguntas a su testigo, el abogado de la escuela puede tener la oportunidad de hacer preguntas en el segundo conainterrogatorio basado en la información que el testigo proporcionó en respuesta a sus preguntas en el segundo interrogatorio directo.

Cuando todo esto haya terminado, el oficial de la audiencia también puede hacer preguntas. El oficial de la audiencia puede también interrumpir el interrogatorio directo o el conainterrogatorio para hacer preguntas.

Fuera del alcance del (interrogatorio directo, conainterrogatorio, segundo interrogatorio directo, o segundo conainterrogatorio)

Bajo las estrictas reglas de la evidencia, el conainterrogatorio está supuesto a limitarse a los hechos e información tratados durante el interrogatorio directo. De la misma forma, el segundo interrogatorio directo (el cual sigue al conainterrogatorio) está supuesto a limitarse a los hechos e información tratados durante el conainterrogatorio. De lo contrario, la misma información será tratada una y otra vez. Llevar la cuenta de lo que fue tratado en el interrogatorio directo en lugar de lo que se trató durante el conainterrogatorio puede ser un desafío incluso para los abogados más expertos, por ejemplo. Y a menudo hay desacuerdos sobre si la pregunta está **fuera del alcance de** lo que fue tratado en el interrogatorio anterior. Los oficiales de la audiencia no están obligados a seguir reglas estrictas de la evidencia, así que no necesita estancarse con esto, pero entienda que generalmente el mismo tipo de pregunta no puede ser preguntado a un testigo una y otra vez.

Cuando la audiencia está ocurriendo, el oficial de la audiencia sólo debe tener a una persona hablando a la vez. De lo contrario, no sólo será difícil para el oficial de la audiencia seguir el caso, pero el taquígrafo judicial no será capaz de registrar los procedimientos si hay más de una persona hablando a la vez.



¡Esto es más difícil de lo que parece! No se ofenda si el oficial de la audiencia le dice varias veces que espere hasta que alguien haya terminado de hablar antes de usted empezar. Es muy común para el oficial de la audiencia tener que recordar esto a las personas.

Notas y otros recordatorios

A menudo los testigos desean tener notas en sus manos cuando testifican para asegurarse de recordar todo lo que quieren decir. Un testigo puede usar notas u otros artículos para refrescarse la memoria sobre el propósito del testimonio. Esto es aceptable, pero tenga en cuenta que la otra parte (y el oficial de la audiencia) tiene el derecho de ver las notas que el testigo usa.

1. Si un testigo usa notas u otros artículos para refrescarse la memoria, la otra parte puede:
 - Solicitar ver las notas u otros artículos;
 - Contrainterrogar al testigo sobre las notas u otros artículos;
 - Presentar las notas u otros artículos como una prueba documental.
2. Si un testigo se rehúsa a mostrar las notas u otros artículos, la otra parte puede solicitar que todo el testimonio basado en esas notas u otros artículos sea borrado del registro.

Alegatos a favor de la prueba (Vea también la Parte cuatro: Objeciones)

Antes de y a través de la presentación de su caso, el abogado de la escuela puede pedir un “alegato a favor de la prueba”. Esto significa que el abogado de la escuela no entiende exactamente por qué usted está presentando un testigo o prueba documental, o por qué está haciendo preguntas particulares a un testigo. La solicitud de un alegato a favor de la prueba lo alerta a usted sobre el hecho de que el abogado tiene una posible objeción a ese testigo o prueba documental o serie de preguntas. Explique al oficial de la audiencia por qué usted está procediendo de la forma en que lo está haciendo. De la



misma forma, un alegato a favor de la prueba puede ser solicitado cuando una serie de preguntas parece ser objetable para la otra parte.

Ejemplo: “Me gustaría un alegato a favor de la prueba para esta serie de preguntas. La capacidad del maestro no es un problema en este caso, el problema es la frecuencia de las actividades de enriquecimiento.”

Usted también puede pedir un alegato a favor de la prueba al abogado de la escuela si tiene alguna preocupación u objeción a sus testigos o pruebas documentales. Ejemplo: “Me gustaría un alegato a favor de la prueba para este testigo. No veo cómo este testigo puede añadir algo nuevo a lo que ya se ha dicho hasta ahora.”

(Mauet, 1980)

Reportes de los expertos

Antes de usted llegar a la audiencia, usted habrá decidido cómo presentará el testimonio de su experto, si tiene uno:

1. Presente el reporte del experto como evidencia para ser considerado como prueba documental;
2. Pida al experto que asista a la audiencia y que presente su testimonio;
3. Pida al experto que testifique por teléfono en la audiencia.

Las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente hablan sobre los reportes de los expertos presentados como evidencia (Vea el [Apéndice I](#) #10). Las reglas sobre los **reportes de los expertos** fueron hechas específicamente con el propósito de hacer las audiencias más eficaces.

Si su experto no asistirá a la audiencia, las instrucciones indican lo siguiente:



Donde el autor no testifica. Cualquier reporte de evaluación, reporte de reevaluación, reporte independiente u otro reporte deberá ser ofrecido como prueba documental. El reporté deberá hablar por sí solo. Cada oficial de la audiencia dará al reporte el peso que el oficial de la audiencia determine apropiado al ejercer su propio criterio.

Si su experto no asistirá a la audiencia, usted deberá presentar su reporte al oficial de la audiencia como una prueba documental al hacer referencia a dicho reporte en su testimonio. Esta es la forma más económica de manejar el testimonio del experto.

Por otra parte, esto previene que el oficial de la audiencia escuche directamente al testigo. Previene que el distrito escolar cuestione la opinión del experto a través del conainterrogatorio. Previene que el oficial de la audiencia haga preguntas. Debido a estas limitaciones, el punto #8 de las Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente dice: “Cada oficial de la audiencia dará al reporte el peso que el oficial de la audiencia determine apropiado al ejercer su propio criterio”.

Si su experto asistirá a la audiencia o testificará por teléfono, las instrucciones dicen lo siguiente:

Donde el autor testifica. Cualquier reporte de evaluación, reporte de reevaluación, reporte independiente u otro reporte que sea ofrecido como prueba documental deberá hablar por sí solo, y deberá servir como testimonio directo de su autor sobre los *contenidos substanciales del reporte*. Sin embargo, un oficial de la audiencia puede permitir la interrogación directa del autor sobre asuntos que, mientras no repitan los contenidos substanciales del reporte, son importantes para establecer su peso y/o relevancia como evidencia, o fomentar el entendimiento del reporte. Una vez que el reporte sea admitido y se haya hecho la interrogación directa al autor, la parte contraria puede conainterrogar al autor. Se permitirá el segundo interrogatorio directo.

Muchas veces, mientras se interroga al experto, éste sólo leerá lo que él/ella ha escrito en el reporte. Ya que el experto no está añadiendo nada a lo que está escrito en el reporte, no tiene sentido tomar este momento para pedirle que lo lea, cuando el oficial de la audiencia puede leer el reporte del experto



por sí mismo. En otras palabras, “el documento habla por sí solo”. No es aceptable que el experto esencialmente lea su reporte para el registro.

Sin embargo, en otras ocasiones, el experto puede necesitar explicar ciertas partes de su reporte. En otras palabras, el testimonio del experto irá más allá de simplemente leer lo que él/ella ha escrito en el reporte. Esto es aceptable.

Entonces, el testimonio de su experto será manejado en una de estas dos formas:

1. Su experto no tiene nada que agregar aparte de lo que ya está escrito en su reporte. El reporte en sí servirá como testimonio de interrogación directa del experto. Se permitirá que el abogado de la escuela conainterrogue al experto. Luego usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas en el segundo interrogatorio directo. (Vea las páginas 106-107 para obtener información sobre los interrogatorios directos/ conainterrogatorios/ segundos interrogatorios directos). Luego usted le dirá al oficial de la audiencia que quiere que el reporte del experto sea una prueba documental.

o

2. Hay áreas del reporte sobre las que su experto quisiera hablar o dar más detalles. Usted hará preguntas a su experto sobre estas áreas solamente. Por lo tanto, el testimonio directo del experto consistirá en lo que está escrito en el reporte; y lo que él/ella testifique en respuesta a su interrogatorio. Se permitirá que el abogado de la escuela conainterrogue al experto. Luego usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas en el segundo interrogatorio directo. (Vea las páginas 106-107 para obtener información sobre los interrogatorios directos/ conainterrogatorios/ segundos interrogatorios directos). Luego usted le dirá al oficial de la audiencia que quiere que el reporte del experto sea una prueba documental.

Tomando descansos en la audiencia

El oficial de la audiencia determinará cuando ocurrirán los descansos y qué tan a menudo. Si usted necesita tomar un descanso de los procedimientos, por cualquier razón, deje saber al oficial de la audiencia que necesita hacerlo.



Si su solicitud es razonable, probablemente será concedida. El oficial de la audiencia también hablará antes de la audiencia o antes de que la audiencia comience sobre cómo se distribuirán los descansos para comer. Los descansos para almorzar son manejados de forma diferente según el distrito escolar y usted puede escoger si desea o no participar en cada caso:

- Algunas escuelas pedirán el almuerzo para todos los participantes del proceso legal debido, sin costo para los participantes.
- Algunas escuelas repartirán un menú, tomarán los pedidos, y recogerán el dinero.
- Algunas escuelas pondrán a la orden sus cafeterías para los participantes, y cada uno pagará por su almuerzo.
- El oficial de la audiencia puede permitir a los participantes que salgan de la escuela y que compren su almuerzo en los restaurantes cercanos. Esto tiende a tomar más tiempo, lo cual impacta el valioso tiempo de la audiencia, así que esto no es lo que algunos oficiales de la audiencia prefieren.
- Sin importar lo antes mencionado, usted puede traer su propio almuerzo, si lo prefiere. No cuente con tener acceso a un refrigerador para guardar su almuerzo hasta la hora de almorzar.

Alegatos de clausura

Cuando toda la evidencia haya sido presentada, el oficial de la audiencia pedirá que cada parte haga un alegato de clausura. Su alegato debe resumir los asuntos, la evidencia presentada, y la solución que usted desea. Según el criterio del oficial de la audiencia, esto puede ser hecho de forma verbal, en cuyo caso usted puede leer de un papel escrito; o podría permitírsele entregar ese papel al oficial de la audiencia; o el oficial de la audiencia podría pedirle a las partes que presenten sus alegatos de clausura por escrito para una fecha específica.



La fecha límite para la decisión

En la audiencia final, el oficial de la audiencia normalmente confirmará a las partes cuál es la fecha límite para tomar la decisión. Esta es la fecha en que el oficial de la audiencia debe haber escrito y distribuido a las partes su decisión. Para obtener más información sobre las fechas límites para la decisión, vea la página 48.

La decisión

Usted sabrá al inicio del caso cuando será la fecha límite para la decisión. En la audiencia final, la fecha límite para la decisión será mencionada otra vez para que usted conozca la fecha (más reciente) en la cual usted recibirá la decisión del oficial de la audiencia.

Apelaciones

Si usted no está satisfecho con la decisión del oficial de la audiencia, y cree que se han cometido errores legales, usted puede [apelar](#) la decisión en el Tribunal del estado de Pennsylvania. El oficial de la audiencia le dará los procedimientos de apelación junto con la decisión. Aunque a veces un empleado del tribunal puede estar dispuesto a proveer cierta ayuda sobre cómo presentar documentos, existen complejidades al hacer esto, las cuales hacen que sea preferible que le pida a un abogado que lo haga de parte suya. Como mínimo, se le exhorta a que consulte con cualquiera de los grupos defensores que se encuentran en el apéndice para ayudarlo.

Comentarios finales

Esta guía contiene mucha información legal. El oficial de la audiencia entenderá que usted no es un abogado, y, por lo tanto, que no estará tan familiarizado con los procedimientos legales como el abogado de la escuela. A través del curso de la audiencia, usted puede hacer preguntas al oficial de la audiencia con relación a los procedimientos. Sin embargo, entienda que el oficial de la audiencia esté legalmente obligado a permanecer imparcial a través del curso de los procedimientos. Él/ella no puede ayudarlo en la presentación de su caso como lo haría un abogado (o defensor). Su ayuda se limitará a explicarle los procedimientos que se deben seguir durante la audiencia. Los oficiales de la audiencia no pueden dar consejo legal a una parte sobre cómo presentar su caso.





Para verificar...

- ✓ El día de la audiencia, asegúrese de que tiene todas sus pruebas documentales, el aviso de la audiencia, sus propias notas, y cualquier cosa que pueda necesitar durante el día (bebidas, meriendas, etc.).
- ✓ Verifique sus mensajes antes de salir a la audiencia para asegurarse de que algo no ha sido retrasado o cancelado.
- ✓ Esté preparado para dar un alegato de apertura que trate sobre los asuntos específicos a ser resueltos y qué decisión le gustaría que el oficial de la audiencia tomara.
- ✓ Al interrogar a un testigo, entienda cómo procede usualmente la presentación del testimonio del testigo. Esto incluye el interrogatorio directo, el conainterrogatorio, el segundo interrogatorio directo y usualmente el segundo conainterrogatorio.
- ✓ El abogado de la escuela puede pedirle un alegato a favor de la prueba. Si esto sucede, usted necesitará explicar al oficial de la audiencia por qué está procediendo de la forma en que lo está haciendo. Usted también puede pedir un alegato a favor de la prueba si tiene preocupaciones sobre los testigos o pruebas documentales de la otra parte.
- ✓ Determine cómo el testimonio de su experto será presentado.
- ✓ Tenga sus alegatos de clausura preparados para que pueda proporcionarlos al oficial de la audiencia en la forma en que él/ella elija.
- ✓ Si usted no está satisfecho con la decisión del oficial de la audiencia, y cree que se han cometido errores legales, usted puede apelar la decisión en el tribunal.





Conclusión

Evidentemente, proceder con una audiencia del proceso legal debido no es una decisión para ser tomada a la ligera. De hecho, existen varios caminos que pueden ser tomados antes de esa opción. Sin embargo, si usted decide que la audiencia del proceso legal debido es la única alternativa, esta guía complementada con otros recursos provistos en los apéndices debería proveerle una buena base para el procedimiento por derecho propio.



Referencias

Mauet, T. (1980) *Fundamentals of Trial Techniques*. Boston, MS: Little, Brown & Company



Glosario

Acuerdo: Acuerdo privado entre el padre y la escuela que resuelve la disputa entre ellos

Alegato a favor de la prueba: Explicación para un oficial de la audiencia sobre por qué se debe permitir a una parte que presente a un testigo, que use una prueba documental, que haga ciertas preguntas, etc.

Alegato de apertura: Oportunidad dada a cada parte al inicio de la audiencia del proceso legal debido para proveer un resumen breve del caso y explicar exactamente qué problemas se le pide al oficial de la audiencia que decida

Apelar: Presentar papeles al tribunal estatal o federal dentro de un plazo de tiempo específico, explicando por qué la decisión del oficial de la audiencia está incorrecta legalmente y pidiendo que sea cambiada

Audiencia del proceso legal debido: Procedimiento legal similar a un procedimiento judicial en donde las partes en desacuerdo presentan evidencia ante un oficial de la audiencia y éste toma una decisión

Aviso de audiencia: Documento de la Oficina para la Resolución de Disputas indicando la hora y la fecha de la audiencia

Capítulo 16: Sección de la ley de educación de Pennsylvania que aplica a los estudiantes quienes son dotados.

Capítulo 711: Sección de la ley de educación de Pennsylvania que provee reglamentos de educación especial en conformidad con la ley federal de educación y que concierne a estudiantes con discapacidades que están matriculados en escuelas *chárter*, *cyber chárter* y *regional chárter*

Carta de divulgación dada 5 días antes de la audiencia: Carta requerida de ambas partes (padre y escuela) en la que se enumera a los testigos y las pruebas documentales a ser presentadas en la audiencia del proceso legal debido.



Citación: Orden legal hecha por el oficial de la audiencia indicando a una persona que asista a la audiencia del proceso legal debido o que provea registros

Código de Pennsylvania: Publicación de Pennsylvania que contiene todas las reglas y regulaciones del gobierno estatal. Las regulaciones sobre educación se encuentran bajo el Título 22

Conferencia antes de la audiencia: Conferencia telefónica entre el oficial de la audiencia y ambas partes para tratar cualquier asunto que necesite ser tratado antes de la audiencia

ConsultLine: (800-879-2301) Línea telefónica gratis de ayuda provista por la Oficina de educación especial del Departamento de Educación de Pennsylvania para ayudar a los padres de los niños con discapacidades que tienen preguntas sobre los programas educativos de sus niños

Contrainterrogatorio: Preguntas que una parte hace a los testigos de la parte contraria

Decisión del oficial de la audiencia: Documento que el oficial de la audiencia escribe luego de que la audiencia termina y que resume el caso y la conclusión legal del oficial de la audiencia

Declaración jurada: Proceso de tomar el testimonio de un testigo fuera de la audiencia programada. Usada en raras ocasiones cuando no hay otra forma de obtener el testimonio del testigo

Declaraciones de referencia: Declaraciones hechas por una persona en algún momento fuera de la audiencia y que son presentadas en la audiencia para probar la veracidad de la declaración hecha

Defensor: Una persona con conocimiento sobre el proceso y los requisitos de la educación para estudiantes dotados y/o la educación especial y que puede ayudar a un padre a buscar un servicio o programa específico

Derecho propio (*Pro Se* en latín) Término que significa que el padre no es representado por un abogado



Director de educación especial: Término general para un administrador de educación que supervisa los programas de educación especial del distrito escolar

Educación compensatoria: Servicios educativos adicionales o suplementarios provistos a un estudiante que no recibió una educación gratuita y apropiada para compensar la pérdida de no haber recibido un beneficio educativo significativo.

Equipo del GIEP: Grupo de individuos, incluyendo a los padres del niño, que desarrollan el GIEP

Estenógrafo: También llamado “taquígrafo judicial”, esta persona registra (escribe a máquina) todo lo que se dice en la audiencia

Estudiante doblemente excepcional: Un estudiante que ha sido identificado como un niño que tiene problemas de educación especial conforme al Capítulo 14 y que también es dotado

Evaluación: Serie de pruebas y observaciones realizadas por un equipo multidisciplinario para detectar si un niño continúa siendo dotado o si necesita un programa educativo para estudiantes dotados.

Evaluación educativa independiente (IEE por sus siglas en inglés): Una evaluación conducida por un evaluador capacitado que no es empleado de la escuela

Evaluación multidisciplinaria: Serie de pruebas y evaluaciones realizadas por un equipo multidisciplinario para hacer una recomendación sobre si un estudiante es o no es dotado o necesita educación para estudiantes dotados

Evidencia: Pruebas documentales y testigos usados en la audiencia del proceso legal debido para apoyar el caso de la otra parte y su caso

Expedientes educativos: Expedientes que se relacionan directamente al estudiante y que son mantenidos por una agencia o institución educativa o por una parte que representa a la agencia o institución



Facilitación del GIEP: Proceso de resolución de disputas ofrecido por la Oficina para la Resolución de Disputas en donde un facilitador imparcial entrenado asiste a la reunión del GIEP para ayudar al equipo del GIEP

Fecha límite para tomar la decisión: Fecha para la cual el oficial de la audiencia deberá haber escrito y distribuido su decisión a las partes

Fuera del alcance de: Término legal que significa que el padre o el abogado de la escuela ha ido fuera del tema del área a ser tratada

Instrucciones dadas antes de la audiencia y que se aplican generalmente: Documento preparado por los oficiales de la audiencia y que explica los procedimientos aceptados generalmente a seguir en la audiencia

Interrogatorio directo: Preguntas que una parte hace a su propio testigo

Jurisdicción: La autoridad del oficial de la audiencia para escuchar y tomar una decisión sobre un asunto

Ley de prescripción: Período de tiempo que una parte tiene para solicitar una audiencia del proceso legal debido

Mediación: Proceso voluntario donde un mediador imparcial facilita conversaciones entre los padres y el personal de la escuela

Mociones: Solicitudes escritas u orales hechas al oficial de la audiencia pidiéndole que ciertas acciones ocurran

Notificación de asignación educativa recomendada (NORA por sus siglas en inglés): Documento que resume para los padres las recomendaciones de la escuela para el programa educativo o asignación del niño y otras acciones tomadas por la escuela

Notificación de derechos de los padres para estudiantes dotados: Notificación que describe los derechos de los padres en el Capítulo 16 (educación para niños dotados) y los procedimientos que protegen esos derechos



Objeciones: Oposiciones orales o escritas a la evidencia y testigos presentados por una parte

Oficial de la audiencia: Individuo imparcial entrenado para conducir la audiencia del proceso legal debido

Panel de apelaciones: Ya no existe. El Panel de apelaciones tomaba decisiones sobre las apelaciones de las decisiones de los oficiales de la audiencia antes de que el caso fuera apelado al tribunal estatal o federal. Vea “Apelar”

Parte/Partes: Nombre genérico dado a los padres y distrito escolar que participan en la audiencia del proceso legal debido

Plan de educación individualizado para estudiantes dotados (GIEP por sus siglas en inglés): Declaración escrita sobre el nivel de desempeño actual de un niño dotado y el plan de instrucción individualizado del niño

Preguntas sugestivas: Preguntas hechas de tal forma que sugieren la respuesta al testigo

Pruebas documentales: Documentos usados como evidencia para apoyar su caso durante la audiencia del proceso legal debido

Pruebas documentales presentadas por ambas partes: Documentos que ambos padres pretenden usar en la audiencia

Queja del proceso legal debido: Solicitud escrita para una audiencia del proceso legal debido

Red de Asistencia Técnica y Entrenamiento de Pennsylvania (PaTTAN por sus siglas en inglés): Iniciativa de la Oficina de Educación Especial (BSE por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE por sus siglas en inglés). PaTTAN trabaja en colaboración con las familias y agencias educativas locales para apoyar programas y servicios para mejorar el aprendizaje y logro del estudiante

Regulaciones: Interpretación del estatuto estatal o federal que provee más información específica sobre cómo el estatuto debe ser seguido



Reportes de los expertos: Un reporte escrito por un experto y que incluye la opinión del experto y se usa como evidencia en la audiencia del proceso legal debido

Revaluación: Serie de pruebas y observaciones realizadas por un equipo multidisciplinario para detectar si un niño continúa siendo dotado o si necesita un programa educativo para estudiantes dotados

Segundo conainterrogatorio: Preguntas sobre la información provista por el testigo durante el segundo interrogatorio directo

Segundo interrogatorio directo: Preguntas sobre la información provista por el testigo durante el conainterrogatorio

Testigos: Aquellas personas que testifican en la audiencia del proceso legal debido (incluyendo a los padres)

Testigo experto: Una persona con conocimiento especializado sobre un tema y que testifica su opinión sobre un asunto

Transcripción: Documento preparado por el estenógrafo (taquígrafo judicial) con todo lo que fue dicho en el registro durante la audiencia del proceso legal debido



Appendix A: PaTTAN “Considerations Worksheet”

IDENTIFICATION

Describe your concerns regarding the identification determined through the evaluation process.

What are your concerns with the evaluation/reevaluation process?

If there is information or interpretations within the evaluation report that you disagree with, clarify what that is and what your interpretation is.

Does the evaluation clarify how the student is performing in relation to the regular education curriculum and regular education setting?



PLACEMENT

What are your concerns regarding the suggested location of services?

What are your concerns regarding the type of services suggested or offered through the IEP or Evaluation Report? What is the alternative you are recommending?

What are your concerns regarding the type of supports suggested or offered through the IEP or Evaluation Report? What is the alternative you are recommending?



SERVICES

Is there agreement on the services that are offered, the frequency at which they are offered and the duration for which they are offered? If not, what alternative are you suggesting? Clarify why you feel your alternative is more appropriate.

Do you feel the services meet the student's needs as determined through the assessment data collected? What do you feel needs changed and what are you basing that on?

Describe your concerns with the personnel involved in providing the services.



PROCEDURAL

Have timelines been honored throughout the process?
Identify when they may not have been.

Did the appropriate people have an opportunity to participate in the process? Were parents, appropriate professionals, outside agency staff, private practitioners or others involved in the process?

Describe your concerns with the documentation. Has it been complete, received within timelines, thorough and accurate?



Appendix B: Educational ABCs

[Educational ABCs](#)

Appendix C: IEP Facilitation Information

[IEP Facilitation Brochure](#)

[IEP Facilitation Request Form](#)

Appendix D: Mediation Information

[Mediation Guide](#)

[Stay-Put during the Mediation Process](#)

[FAQs regarding Pendency during Mediation](#)

[Mediation Request Form](#)

Appendix E: Chapter 16 State Regulations

[Chapter 16 State Regulations](#)

Appendix F: Chapter 711 State Regulations

[Chapter 711 State Regulations](#)



Appendix G: Board of Education v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982)

102 S.Ct. 3034
458 U.S. 176, 102 S.Ct. 3034, 73 L.Ed.2d 690, 5 Ed. Law Rep. 34, 1 A.D.D. 85
(Cite as: **458 U.S. 176, 102 S.Ct. 3034**)

Supreme Court of the United States
BOARD OF EDUCATION OF the HENDRICK HUDSON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WESTCHESTER
COUNTY, et al., Petitioners

v.

Amy ROWLEY, by her parents and natural guardians, Clifford and Nancy Rowley etc.

No. 80-1002.
Argued March 23, 1982.
Decided June 28, 1982.

Petition for writ of certiorari was filed seeking review of a decision of the United States Court of Appeals for the Second Circuit, [632 F.2d 945](#), which affirmed a decision of the United States District Court for the Southern District of New York, Vincent L. Broderick, J., [483 F.Supp. 528](#), [483 F.Supp. 536](#), denying motion by Commissioner of Education of New York to dismiss for lack of jurisdiction and directing appellants to provide a sign-language interpreter in the classroom of appellee, an eight-year-old deaf child. The Supreme Court, Justice Rehnquist, held that: (1) Education for All Handicapped Children Act's requirement of a "free appropriate public education" is satisfied when state provides personalized instruction with sufficient support services to permit the handicapped child to benefit educationally from that instruction; (2) Education for All Handicapped Children Act's requirement of a "free appropriate public education" did not require state to maximize potential of each handicapped child commensurate with opportunity provided nonhandicapped children; and (3) in light of finding that deaf child, who performed better than average child in her class and was advancing easily from grade to grade, was receiving personalized instruction and related services calculated by school administrators to meet her educational needs, Act did not require provision of a sign-language interpreter for the deaf child.

Reversed and remanded.

Justice Blackmun filed separate opinion concurring in the judgment.

Justice White filed dissenting opinion in which Justice Brennan and Justice Marshall joined.

****3035 *176 Syllabus [FN*](#)**

[FN*](#) The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See [United States v. Detroit Lumber Co., 200 U.S. 321, 337, 26 S.Ct. 282, 287, 50 L.Ed. 499](#).

The Education of the Handicapped Act (Act) provides federal money to assist state and local agencies in educating handicapped children. To qualify for federal assistance, a State must demonstrate, through a detailed plan submitted for federal approval, that it has in effect a policy that assures all handicapped children the right to a "free appropriate public education," which policy must be tailored to the unique needs of the handicapped child by means of an "individualized educational program" (IEP). The IEP must be prepared (and reviewed at least annually) by school officials with participation by the child's parents or guardian. The Act also requires that a participating State provide specified administrative procedures by which the child's parents or guardian may challenge any change in the evaluation and education of the child. Any party aggrieved by the state administrative decisions is authorized to bring a civil action in either a state court or a federal district court. Respondents—a child



with only minimal residual hearing who had been furnished by school authorities with a special hearing aid for use in the classroom and who was to receive additional instruction from tutors, and the child's parents-filed suit in Federal District Court to review New York administrative proceedings that had upheld the school administrators' denial of the parents' request that the child also be provided a qualified sign-language interpreter in all of her academic classes. Entering judgment for respondents, the District Court found that although the child performed better than the average child in her class and was advancing easily from grade to grade, she was not performing as well academically as she would without her handicap. Because of this disparity between the child's achievement and her potential, the court held that she was not receiving a "free appropriate public education," which the court defined as "an opportunity to achieve [her] full potential commensurate with the opportunity provided to other children." The Court of Appeals affirmed.

***177** *Held:*

1. The Act's requirement of a "free appropriate public education" is satisfied ****3036** when the State provides personalized instruction with sufficient support services to permit the handicapped child to benefit educationally from that instruction. Such instruction and services must be provided at public expense, must meet the State's educational standards, must approximate grade levels used in the State's regular education, and must comport with the child's IEP, as formulated in accordance with the Act's requirements. If the child is being educated in regular classrooms, as here, the IEP should be reasonably calculated to enable the child to achieve passing marks and advance from grade to grade. Pp. 3041-3049.

(a) This interpretation is supported by the definitions contained in the Act, as well as by other provisions imposing procedural requirements and setting forth statutory findings and priorities for States to follow in extending educational services to handicapped children. The Act's language contains no express substantive standard prescribing the level of education to be accorded handicapped children. Pp. 3041-3042.

(b) The Act's legislative history shows that Congress sought to make public education available to handicapped children, but did not intend to impose upon the States any greater substantive educational standard than is necessary to make such access to public education meaningful. The Act's intent was more to open the door of public education to handicapped children by means of specialized educational services than to guarantee any particular substantive level of education once inside. Pp. 3042-3046.

(c) While Congress sought to provide assistance to the States in carrying out their constitutional responsibilities to provide equal protection of the laws, it did not intend to achieve strict equality of opportunity or services for handicapped and nonhandicapped children, but rather sought primarily to identify and evaluate handicapped children, and to provide them with access to a free public education. The Act does not require a State to maximize the potential of each handicapped child commensurate with the opportunity provided nonhandicapped children. Pp. 3046-3048.

2. In suits brought under the Act's judicial-review provisions, a court must first determine whether the State has complied with the statutory procedures, and must then determine whether the individualized program developed through such procedures is reasonably calculated to enable the child to receive educational benefits. If these requirements are met, the State has complied with the obligations imposed by Congress and the courts can require no more. Pp. 3050-3052.

***178** (a) Although the judicial-review provisions do not limit courts to ensuring that States have complied with the Act's procedural requirements, the Act's emphasis on procedural safeguards demonstrates the legislative conviction that adequate compliance with prescribed procedures will in most cases assure much, if not all, of what Congress wished in the way of substantive content in an IEP. Pp. 3050-3051.

(b) The courts must be careful to avoid imposing their view of preferable educational methods upon the States. Once a court determines that the Act's requirements have been met, questions of methodology are for resolution by the States. Pp. 3051-3052.



3. Entrusting a child's education to state and local agencies does not leave the child without protection. As demonstrated by this case, parents and guardians will not lack ardor in seeking to ensure that handicapped children receive all of the benefits to which they are entitled by the Act. P. 3052.

4. The Act does not require the provision of a sign-language interpreter here. Neither of the courts below found that there had been a failure to comply with the Act's procedures, and the findings of neither court will support a conclusion that the child's educational program failed to comply with the substantive requirements of the Act. Pp. 3052-3053.

[632 F.2d 945 \(2d Cir.\)](#), reversed and remanded.

****3037** *Raymond G. Kuntz* argued the cause for petitioners. With him on the briefs were *Robert D. Stone, Jean M. Coon, Paul E. Sherman, Jr., and Donald O. Meserve*.

Michael A. Chatoff argued the cause and filed a brief for respondents.

Elliott Schulder argued the cause for the United States as *amicus curiae* urging affirmance. On the brief were *Solicitor General Lee, Assistant Attorney General Reynolds, Walter W. Barnett, and Louise A. Lerner*.*

* Briefs of *amici curiae* urging affirmance were filed by *Charles S. Sims* for the American Civil Liberties Union; by *Jane Bloom Yohalem, Norman S. Rosenberg, Daniel Yohalem, and Marian Wright Edelman* for the Association for Retarded Citizens of the United States et al.; by *Ralph J. Moore, Jr., and Franklin D. Kramer* for the Maryland Advocacy Unit for the Developmentally Disabled, Inc., et al.; by *Marc Charmatz, Janet Stotland, and Joseph Blum* for the National Association of the Deaf et al; by *Minna J. Kotkin and Barry Felder* for the New York State Commission on the Quality of Care for the Mentally Disabled, Protection and Advocacy System; and by *Michael A. Rebell* for the United Cerebral Palsy Associations, Inc., et al.

Norman H. Gross, Gwendolyn H. Gregory, Thomas A. Shannon, and August W. Steinhilber filed a brief for the National School Boards Association et al. as *amici curiae*.

***179** Justice REHNQUIST delivered the opinion of the Court.

This case presents a question of statutory interpretation. Petitioners contend that the Court of Appeals and the District Court misconstrued the requirements imposed by Congress upon States which receive federal funds under the Education of the Handicapped Act. We agree and reverse the judgment of the Court of Appeals.

I

The Education of the Handicapped Act (Act), 84 Stat. 175, as amended, [20 U.S.C. § 1401 et seq.](#) (1976 ed. and Supp.IV), provides federal money to assist state and local agencies in educating handicapped children, and conditions such funding upon a State's compliance with extensive goals and procedures. The Act represents an ambitious federal effort to promote the education of handicapped children, and was passed in response to Congress' perception that a majority of handicapped children in the United States "were either totally excluded from schools or [were] sitting idly in regular classrooms awaiting the time when they were old enough to 'drop out.'" H.R.Rep.No. 94-332, p. 2 (1975) (H.R.Rep.). The Act's evolution and major provisions shed light on the question of statutory interpretation which is at the heart of this case.

Congress first addressed the problem of educating the handicapped in 1966 when it amended the Elementary and ***180** Secondary Education Act of 1965 to establish a grant program "for the purpose of assisting the States in the initiation, expansion, and improvement of programs and projects ... for the education of handicapped children." Pub.L. 89-750, § 161, 80 Stat. 1204. That program was repealed in 1970 by the Education of the Handicapped Act, Pub.L. 91-230, 84 Stat. 175, Part B of which established a grant program similar in purpose to the repealed legislation. Neither the 1966 nor the 1970 legislation contained specific guidelines for state use of the grant money; both were aimed primarily at stimulating the States to develop educational resources and to train personnel for educating the handicapped. [FNI](#)



[FN1.](#) See [S.Rep.No. 94-168, p. 5 \(1975\)](#) (S.Rep.); H.R.Rep., at 2-3, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1425.

Dissatisfied with the progress being made under these earlier enactments, and spurred by two District Court decisions holding that handicapped children should be given access to a public education,^{FN2} Congress in 1974 greatly increased federal funding for education of the handicapped and for the first time required recipient States to adopt “a goal of providing full educational opportunities to all handicapped children.” [Pub.L. 93-380, 88 Stat. 579, 583 \(1974 statute\)](#). The 1974 statute was recognized as an interim measure only, adopted “in order to give the Congress an additional year in which to study what if any additional Federal assistance [was] required to enable the States to meet the needs of handicapped children.” H.R.Rep., at 4. The ensuing year of study produced the Education for All Handicapped Children Act of 1975.

[FN2.](#) Two cases, [Mills v. Board of Education of District of Columbia, 348 F.Supp. 866 \(D.C.1972\)](#), and [Pennsylvania Assn. for Retarded Children v. Commonwealth, 334 F.Supp. 1257 \(ED Pa.1971\)](#) and [343 F.Supp. 279 \(1972\)](#), were later identified as the most prominent of the cases contributing to Congress' enactment of the Act and the statutes which preceded it. H.R.Rep., at 3-4. Both decisions are discussed in Part III of this opinion.

In order to qualify for federal financial assistance under the Act, a State must demonstrate that it “has in effect a policy *181 that assures all handicapped children the right to a free appropriate public education.”**3038 [20 U.S.C. § 1412\(1\)](#). That policy must be reflected in a state plan submitted to and approved by the Secretary of Education, ^{FN3} § 1413, which describes in detail the goals, programs, and timetables under which the State intends to educate handicapped children within its borders. [§§ 1412, 1413](#). States receiving money under the Act must provide education to the handicapped by priority, first “to handicapped children who are not receiving an education” and second “to handicapped children ... with the most severe handicaps who are receiving an inadequate education,” [§ 1412\(3\)](#), and “to the maximum extent appropriate” must educate handicapped children “with children who are not handicapped.” [§ 1412\(5\)](#). ^{FN4} The Act broadly defines “handicapped children” to include “mentally retarded, hard of hearing, deaf, speech impaired, visually handicapped, seriously emotionally disturbed, orthopedically impaired, [and] other health impaired children, [and] children with specific learning disabilities.” [§ 1401\(1\)](#).^{FN5}

[FN3.](#) All functions of the Commissioner of Education, formerly an officer in the Department of Health, Education, and Welfare, were transferred to the Secretary of Education in 1979 when Congress passed the Department of Education Organization Act, [20 U.S.C. § 3401 et seq.](#) (1976 ed., Supp.IV). See [20 U.S.C. § 3441\(a\)\(1\)](#) (1976 ed., Supp.IV).

[FN4.](#) Despite this preference for “mainstreaming” handicapped children—educating them with nonhandicapped children—Congress recognized that regular classrooms simply would not be a suitable setting for the education of many handicapped children. The Act expressly acknowledges that “the nature or severity of the handicap [may be] such that education in regular classes with the use of supplementary aids and services cannot be achieved satisfactorily.” [§ 1412\(5\)](#). The Act thus provides for the education of some handicapped children in separate classes or institutional settings. See *ibid.*; [§ 1413\(a\)\(4\)](#).

[FN5.](#) In addition to covering a wide variety of handicapping conditions, the Act requires special educational services for children “regardless of the severity of their handicap.” [§§ 1412\(2\)\(C\), 1414\(a\)\(1\)\(A\)](#).

The “free appropriate public education” required by the Act is tailored to the unique needs of the handicapped child by means of an “individualized educational program” (IEP). *182 [§ 1401\(18\)](#). The IEP, which is prepared at a meeting between a qualified representative of the local educational agency, the child's teacher, the child's parents or guardian, and, where appropriate, the child, consists of a written document containing



“(A) a statement of the present levels of educational performance of such child, (B) a statement of annual goals, including short-term instructional objectives, (C) a statement of the specific educational services to be provided to such child, and the extent to which such child will be able to participate in regular educational programs, (D) the projected date for initiation and anticipated duration of such services, and (E) appropriate objective criteria and evaluation procedures and schedules for determining, on at least an annual basis, whether instructional objectives are being achieved.” [§ 1401\(19\)](#).

Local or regional educational agencies must review, and where appropriate revise, each child's IEP at least annually. [§ 1414\(a\)\(5\)](#). See also [§ 1413\(a\)\(11\)](#).

In addition to the state plan and the IEP already described, the Act imposes extensive procedural requirements upon States receiving federal funds under its provisions. Parents or guardians of handicapped children must be notified of any proposed change in “the identification, evaluation, or educational placement of the child or the provision of a free appropriate public education to such child,” and must be permitted to bring a complaint about “any matter relating to” such evaluation and education. [§§ 1415\(b\)\(1\)\(D\)](#) and (E). ^{FN6} *183 **3039 Complaints brought by parents or guardians must be resolved at “an impartial due process hearing,” and appeal to the state educational agency must be provided if the initial hearing is held at the local or regional level. [§§ 1415\(b\)\(2\)](#) and (c). ^{FN7} Thereafter, “[a]ny party aggrieved by the findings and decision” of the state administrative hearing has “the right to bring a civil action with respect to the complaint ... in any State court of competent jurisdiction or in a district court of the United States without regard to the amount in controversy.” [§ 1415\(e\)\(2\)](#).

^{FN6}. The requirements that parents be permitted to file complaints regarding their child's education, and be present when the child's IEP is formulated, represent only two examples of Congress' effort to maximize parental involvement in the education of each handicapped child. In addition, the Act requires that parents be permitted “to examine all relevant records with respect to the identification, evaluation, and educational placement of the child, and ... to obtain an independent educational evaluation of the child.” [§ 1415\(b\)\(1\)\(A\)](#). See also [§§ 1412\(4\)](#), [1414\(a\)\(4\)](#). State educational policies and the state plan submitted to the Secretary of Education must be formulated in “consultation with individuals involved in or concerned with the education of handicapped children, including handicapped individuals and parents or guardians of handicapped children.” [§ 1412\(7\)](#). See also [§ 1412\(2\)\(E\)](#). Local agencies, which receive funds under the Act by applying to the state agency, must submit applications which assure that they have developed procedures for “the participation and consultation of the parents or guardian[s] of [handicapped] children” in local educational programs, [§ 1414\(a\)\(1\)\(C\)\(iii\)](#), and the application itself, along with “all pertinent documents related to such application,” must be made “available to parents, guardians, and other members of the general public.” [§ 1414\(a\)\(4\)](#).

^{FN7}. “Any party” to a state or local administrative hearing must

“be accorded (1) the right to be accompanied and advised by counsel and by individuals with special knowledge or training with respect to the problems of handicapped children, (2) the right to present evidence and confront, cross examine, and compel the attendance of witnesses, (3) the right to a written or electronic verbatim record of such hearing, and (4) the right to written findings of fact and decisions.” [§ 1415\(d\)](#).

Thus, although the Act leaves to the States the primary responsibility for developing and executing educational programs for handicapped children, it imposes significant requirements to be followed in the discharge of that responsibility. Compliance is assured by provisions permitting the withholding of federal funds upon determination that a participating state or local agency has failed to satisfy the requirements of the Act, [§§ 1414\(b\)\(2\)\(A\)](#), [1416](#), and by the provision for judicial review. At present, all States except New ^{*184} Mexico receive federal funds under the portions of the Act at issue today. Brief for United States as *Amicus Curiae* 2, n. 2.

II

This case arose in connection with the education of Amy Rowley, a deaf student at the Furnace Woods School in the Hendrick Hudson Central School District, Peekskill, N.Y. Amy has minimal residual hearing and is an



excellent lipreader. During the year before she began attending Furnace Woods, a meeting between her parents and school administrators resulted in a decision to place her in a regular kindergarten class in order to determine what supplemental services would be necessary to her education. Several members of the school administration prepared for Amy's arrival by attending a course in sign-language interpretation, and a teletype machine was installed in the principal's office to facilitate communication with her parents who are also deaf. At the end of the trial period it was determined that Amy should remain in the kindergarten class, but that she should be provided with an FM hearing aid which would amplify words spoken into a wireless receiver by the teacher or fellow students during certain classroom activities. Amy successfully completed her kindergarten year.

As required by the Act, an IEP was prepared for Amy during the fall of her first-grade year. The IEP provided that Amy should be educated in a regular classroom at Furnace Woods, should continue to use the FM hearing aid, and should receive instruction from a tutor for the deaf for one hour each day and from a speech therapist for three hours each week. The Rowleys agreed with parts of the IEP, but insisted that Amy also be provided a qualified sign-language interpreter in all her academic classes in lieu of the assistance ****3040** proposed in other parts of the IEP. Such an interpreter had been placed in Amy's kindergarten class for a 2-week experimental period, but the interpreter had reported that Amy did not need his services at that time. The school administrators^{***185**} likewise concluded that Amy did not need such an interpreter in her first-grade classroom. They reached this conclusion after consulting the school district's Committee on the Handicapped, which had received expert evidence from Amy's parents on the importance of a sign-language interpreter, received testimony from Amy's teacher and other persons familiar with her academic and social progress, and visited a class for the deaf.

When their request for an interpreter was denied, the Rowleys demanded and received a hearing before an independent examiner. After receiving evidence from both sides, the examiner agreed with the administrators' determination that an interpreter was not necessary because "Amy was achieving educationally, academically, and socially" without such assistance. App. to Pet. for Cert. F-22. The examiner's decision was affirmed on appeal by the New York Commissioner of Education on the basis of substantial evidence in the record. *Id.*, at E-4. Pursuant to the Act's provision for judicial review, the Rowleys then brought an action in the United States District Court for the Southern District of New York, claiming that the administrators' denial of the sign-language interpreter constituted a denial of the "free appropriate public education" guaranteed by the Act.

The District Court found that Amy "is a remarkably well-adjusted child" who interacts and communicates well with her classmates and has "developed an extraordinary rapport" with her teachers. [483 F.Supp. 528, 531 \(1980\)](#). It also found that "she performs better than the average child in her class and is advancing easily from grade to grade," *id.*, at 534, but "that she understands considerably less of what goes on in class than she could if she were not deaf" and thus "is not learning as much, or performing as well academically, as she would without her handicap," *id.*, at 532. This disparity between Amy's achievement and her potential led the court to decide that she was not receiving a "free appropriate public^{***186**} education," which the court defined as "an opportunity to achieve [her] full potential commensurate with the opportunity provided to other children." *Id.*, at 534. According to the District Court, such a standard "requires that the potential of the handicapped child be measured and compared to his or her performance, and that the resulting differential or 'shortfall' be compared to the shortfall experienced by nonhandicapped children." *Ibid.* The District Court's definition arose from its assumption that the responsibility for "giv [ing] content to the requirement of an 'appropriate education' " had "been left entirely to the [federal] courts and the hearing officers." *Id.*, at 533. ^{FN8}

^{FN8}. For reasons that are not revealed in the record, the District Court concluded that "[t]he Act itself does not define 'appropriate education.'" [483 F.Supp., at 533](#). In fact, the Act expressly defines the phrase "free appropriate public education," see [§ 1401\(18\)](#), to which the District Court was referring. See [483 F.Supp., at 533](#). After overlooking the statutory definition, the District Court sought guidance not from regulations interpreting the Act, but from regulations promulgated under § 504 of the Rehabilitation Act. See [483 F.Supp., at 533](#), citing [45 CFR § 84.33\(b\)](#).

A divided panel of the United States Court of Appeals for the Second Circuit affirmed. The Court of Appeals "agree[d] with the [D]istrict [C]ourt's conclusions of law," and held that its "findings of fact [were] not clearly erroneous." [632 F.2d 945, 947 \(1980\)](#).



We granted certiorari to review the lower courts' interpretation of the Act. [454 U.S. 961, 102 S.Ct. 500, 70 L.Ed.2d 376 \(1981\)](#). Such review requires us to consider two questions: What is meant by the Act's requirement of a “free appropriate public education”? And what is the role of state and federal courts in exercising the ****3041** review granted by [20 U.S.C. § 1415](#)? We consider these questions separately.^{FN9}

^{FN9}. The IEP which respondents challenged in the District Court was created for the 1978-1979 school year. Petitioners contend that the District Court erred in reviewing that IEP after the school year had ended and before the school administrators were able to develop another IEP for subsequent years. We disagree. Judicial review invariably takes more than nine months to complete, not to mention the time consumed during the preceding state administrative hearings. The District Court thus correctly ruled that it retained jurisdiction to grant relief because the alleged deficiencies in the IEP were capable of repetition as to the parties before it yet evading review. [483 F.Supp. 536, 538 \(1980\)](#). See [Murphy v. Hunt, 455 U.S. 478, 482, 102 S.Ct. 1181, 1183, 71 L.Ed.2d 353 \(1982\)](#); [Weinstein v. Bradford, 423 U.S. 147, 149, 96 S.Ct. 347, 348, 46 L.Ed.2d 350 \(1975\)](#).

*187 III

A

[\[1\]\[2\]](#) This is the first case in which this Court has been called upon to interpret any provision of the Act. As noted previously, the District Court and the Court of Appeals concluded that “[t]he Act itself does not define ‘appropriate education.’ ” [483 F.Supp., at 533](#), but leaves “to the courts and the hearing officers” the responsibility of “giv[ing] content to the requirement of an ‘appropriate education.’ ” *Ibid.* See also [632 F.2d, at 947](#). Petitioners contend that the definition of the phrase “free appropriate public education” used by the courts below overlooks the definition of that phrase actually found in the Act. Respondents agree that the Act defines “free appropriate public education,” but contend that the statutory definition is not “functional” and thus “offers judges no guidance in their consideration of controversies involving ‘the identification, evaluation, or educational placement of the child or the provision of a free appropriate public education.’ ” Brief for Respondents 28. The United States, appearing as *amicus curiae* on behalf of respondents, states that “[a]lthough the Act includes definitions of a ‘free appropriate public education’ and other related terms, the statutory definitions do not adequately explain what is meant by ‘appropriate.’ ” Brief for United States as *Amicus Curiae* 13.

We are loath to conclude that Congress failed to offer any assistance in defining the meaning of the principal substantive phrase used in the Act. It is beyond dispute that, contrary to the conclusions of the courts below, the Act does expressly define “free appropriate public education”:

***188** “The term ‘free appropriate public education’ means *special education and related services* which (A) have been provided at public expense, under public supervision and direction, and without charge, (B) meet the standards of the State educational agency, (C) include an appropriate preschool, elementary, or secondary school education in the State involved, and (D) are provided in conformity with the individualized education program required under [section 1414\(a\)\(5\)](#) of this title.” [§ 1401\(18\)](#) (emphasis added).

“Special education,” as referred to in this definition, means “specially designed instruction, at no cost to parents or guardians, to meet the unique needs of a handicapped child, including classroom instruction, instruction in physical education, home instruction, and instruction in hospitals and institutions.” [§ 1401\(16\)](#). “Related services” are defined as “transportation, and such developmental, corrective, and other supportive services ... as may be required to assist a handicapped child to benefit from special education.” [§ 1401\(17\)](#).^{FN10}

^{FN10}. Examples of “related services” identified in the Act are “speech pathology and audiology, psychological services, physical and occupational therapy, recreation, and medical and counseling services, except that such medical services shall be for diagnostic and evaluation purposes only.” [§ 1401\(17\)](#).

Like many statutory definitions, this one tends toward the cryptic rather than the comprehensive, but that is scarcely a reason for abandoning the quest for legislative intent. Whether or not the definition ****3042** is a



“functional” one, as respondents contend it is not, it is the principal tool which Congress has given us for parsing the critical phrase of the Act. We think more must be made of it than either respondents or the United States seems willing to admit.

According to the definitions contained in the Act, a “free appropriate public education” consists of educational instruction specially designed to meet the unique needs of the handicapped*189 child, supported by such services as are necessary to permit the child “to benefit” from the instruction. Almost as a checklist for adequacy under the Act, the definition also requires that such instruction and services be provided at public expense and under public supervision, meet the State's educational standards, approximate the grade levels used in the State's regular education, and comport with the child's IEP. Thus, if personalized instruction is being provided with sufficient supportive services to permit the child to benefit from the instruction, and the other items on the definitional checklist are satisfied, the child is receiving a “free appropriate public education” as defined by the Act.

Other portions of the statute also shed light upon congressional intent. Congress found that of the roughly eight million handicapped children in the United States at the time of enactment, one million were “excluded entirely from the public school system” and more than half were receiving an inappropriate education. 89 Stat. 774, note following [§ 1401](#). In addition, as mentioned in Part I, the Act requires States to extend educational services first to those children who are receiving no education and second to those children who are receiving an “inadequate education.” [§ 1412\(3\)](#). When these express statutory findings and priorities are read together with the Act's extensive procedural requirements and its definition of “free appropriate public education,” the face of the statute evinces a congressional intent to bring previously excluded handicapped children into the public education systems of the States and to require the States to adopt *procedures* which would result in individualized consideration of and instruction for each child.

Noticeably absent from the language of the statute is any substantive standard prescribing the level of education to be accorded handicapped children. Certainly the language of the statute contains no requirement like the one imposed by the lower courts—that States maximize the potential of handicapped children “commensurate with the opportunity *190 provided to other children.” [483 F.Supp., at 534](#). That standard was expounded by the District Court without reference to the statutory definitions or even to the legislative history of the Act. Although we find the statutory definition of “free appropriate public education” to be helpful in our interpretation of the Act, there remains the question of whether the legislative history indicates a congressional intent that such education meet some additional substantive standard. For an answer, we turn to that history. ^{FN11}

^{FN11}. The dissent, finding that “the standard of the courts below seems ... to reflect the congressional purpose” of the Act, *post*, at 3057, concludes that our answer to this question “is not a satisfactory one.” *Post*, at 3056. Presumably, the dissent also agrees with the District Court's conclusion that “it has been left entirely to the courts and the hearing officers to give content to the requirement of an ‘appropriate education.’ ” [483 F.Supp., at 533](#). It thus seems that the dissent would give the courts *carte blanche* to impose upon the States whatever burden their various judgments indicate should be imposed. Indeed, the dissent clearly characterizes the requirement of an “appropriate education” as open-ended, noting that “if there are limits not evident from the face of the statute on what may be considered an ‘appropriate education,’ they must be found in the purpose of the statute or its legislative history.” *Post*, at 3054. Not only are we unable to find any suggestion from the face of the statute that the requirement of an “appropriate education” was to be limitless, but we also view the dissent's approach as contrary to the fundamental proposition that Congress, when exercising its spending power, can impose no burden upon the States unless it does so unambiguously. See *infra*, at 3049, n. 26.

No one can doubt that this would have been an easier case if Congress had seen fit to provide a more comprehensive statutory definition of the phrase “free appropriate public education.” But Congress did not do so, and “our problem is to construe what Congress has written. After all, Congress expresses its purpose by words. It is for us to ascertain—neither to add nor to subtract, neither to delete nor to distort.” [62 Cases of *Jam v. United States*, 340 U.S. 593, 596, 71 S.Ct. 515, 518, 95 L.Ed. 566 \(1951\)](#). We would be less than faithful to our obligation to construe what Congress has written if in this case we were to disregard the statutory language and legislative history of the Act by concluding that Congress had



imposed upon the States a burden of unspecified proportions and weight, to be revealed only through case-by-case adjudication in the courts.

***191 **3043 B**

(i)

As suggested in Part I, federal support for education of the handicapped is a fairly recent development. Before passage of the Act some States had passed laws to improve the educational services afforded handicapped children, [FN12](#) but many of these children were excluded completely from any form of public education or were left to fend for themselves in classrooms designed for education of their nonhandicapped peers. As previously noted, the House Report begins by emphasizing this exclusion and misplacement, noting that millions of handicapped children “were either totally excluded from schools or [were] sitting idly in regular classrooms awaiting the time when they were old enough to ‘drop out.’ ” H.R.Rep., at 2. See also S.Rep., at 8. One of the Act’s two principal sponsors in the Senate urged its passage in similar terms:

[FN12](#). See H.R.Rep., at 10; Note, The Education of All Handicapped Children Act of 1975, 10 U.Mich.J.L.Ref. 110, 119 (1976).

“While much progress has been made in the last few years, we can take no solace in that progress until all handicapped children are, in fact, receiving an education. The most recent statistics provided by the Bureau of Education for the Handicapped estimate that ... 1.75 million handicapped children do not receive any educational services, and 2.5 million handicapped children are not receiving an appropriate education.” 121 Cong.Rec. 19486 (1975) (remarks of Sen. Williams).

This concern, stressed repeatedly throughout the legislative history, [FN13](#) confirms the impression conveyed by the language ***192** of the statute: By passing the Act, Congress sought primarily to make public education available to handicapped children. But in seeking to provide such access to public education, Congress did not impose upon the States any greater substantive educational standard than would be necessary to make such access meaningful. Indeed, Congress expressly “recognize[d] that in many instances the process of providing special education and related services to handicapped children is not guaranteed to produce any particular outcome.” S.Rep., at 11, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1435. Thus, the intent of the Act was more to open the door of public education to handicapped children on appropriate terms than to guarantee any particular level of education once inside.

[FN13](#). See, e.g., 121 Cong.Rec. 19494 (1975) (remarks of Sen. Javits) (“all too often, our handicapped citizens have been denied the opportunity to receive an adequate education”); *id.*, at 19502 (remarks of Sen. Cranston) (millions of handicapped “children ... are largely excluded from the educational opportunities that we give to our other children”); *id.*, at 23708 (remarks of Rep. Mink) (“handicapped children ... are denied access to public schools because of a lack of trained personnel”).

Both the House and the Senate Reports attribute the impetus for the Act and its predecessors to two federal-court judgments rendered in 1971 and 1972. As the Senate Report states, passage of the Act “followed a series of landmark court cases establishing in law the right to education for all handicapped children.” S.Rep., at 6, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1430. [FN14](#) The first case, ****3044**[Pennsylvania Assn. for Retarded Children v. Commonwealth](#), 334 F.Supp. 1257 (Ed Pa.1971) and [343 F.Supp. 279 \(1972\) \(PARC\)](#), was a suit on behalf of retarded children challenging the constitutionality of a Pennsylvania statute which acted to exclude them from public education and training. The case ended in a consent decree which enjoined the State from “deny[ing] to any mentally retarded child access to a free public program of education and training.” [334 F.Supp., at 1258](#) (emphasis added).

[FN14](#). Similarly, the Senate Report states that it was an “[i]ncreased awareness of the educational needs of handicapped children and landmark court decisions establishing the right to education for handicapped children [that] pointed to the necessity of an expanded federal fiscal role.” S.Rep., at 5, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1429. See also H.R.Rep., at 2-3.



PARC was followed by [Mills v. Board of Education of District of Columbia, 348 F.Supp. 866 \(D.C.1972\)](#), a case in which the plaintiff handicapped children had been excluded *193 from the District of Columbia public schools. The court's judgment, quoted in S.Rep., at 6, provided that

“no [handicapped] child eligible for a publicly supported education in the District of Columbia public schools shall be *excluded* from a regular school assignment by a Rule, policy, or practice of the Board of Education of the District of Columbia or its agents unless such child is provided (a) *adequate* alternative educational services suited to the child's needs, which may include special education or tuition grants, and (b) a constitutionally adequate prior hearing and periodic review of the child's status, progress, and the *adequacy* of any educational alternative.” [348 F.Supp., at 878](#) (emphasis added).

Mills and *PARC* both held that handicapped children must be given *access* to an adequate, publicly supported education. Neither case purports to require any particular substantive level of education.^{FN15} Rather, like the language of the Act, *194 the cases set forth extensive procedures to be followed in formulating personalized educational programs for handicapped children. See [348 F.Supp., at 878-883](#); [334 F.Supp., at 1258-1267](#).^{FN16} The fact that both *PARC* and *Mills* are discussed at length in the legislative Reports^{FN17} suggests that the principles which they established are the principles which, to a significant extent, guided the drafters of the Act. Indeed, immediately after discussing these cases the Senate Report describes the 1974 statute as having “incorporated the major principles**3045 of the right to education cases.” S.Rep., at 8, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1432. Those principles in turn became the basis of the Act, which itself was designed to effectuate the purposes of the 1974 statute. H.R.Rep., at 5.^{FN18}

^{FN15}. The only substantive standard which can be implied from these cases comports with the standard implicit in the Act. *PARC* states that each child must receive “access to a free public program of education and training *appropriate to his learning capacities*,” [334 F.Supp., at 1258](#) (emphasis added), and that further state action is required when it appears that “the needs of the mentally retarded child are not being *adequately served*,” [id., at 1266](#). (Emphasis added.) *Mills* also speaks in terms of “adequate” educational services, [348 F.Supp., at 878](#), and sets a realistic standard of providing *some* educational services to each child when every need cannot be met.

“If sufficient funds are not available to finance all of the services and programs that are needed and desirable in the system then the available funds must be expended equitably in such a manner that no child is entirely excluded from a publicly supported education consistent with his needs and ability to benefit therefrom. The inadequacies of the District of Columbia Public School System whether occasioned by insufficient funding or administrative inefficiency, certainly cannot be permitted to bear more heavily on the ‘exceptional’ or handicapped child than on the normal child.” [Id., at 876](#).

^{FN16}. Like the Act, *PARC* required the State to “identify, locate, [and] evaluate” handicapped [children](#), [334 F.Supp., at 1267](#), to create for each child an individual educational program, [id., at 1265](#), and to hold a hearing “on any change in educational assignment,” [id., at 1266](#). *Mills* also required the preparation of an individual educational program for each child. In addition, *Mills* permitted the child's parents to inspect records relevant to the child's education, to obtain an independent educational evaluation of the child, to object to the IEP and receive a hearing before an independent hearing officer, to be represented by counsel at the hearing, and to have the right to confront and cross-examine adverse witnesses, all of which are also permitted by the Act. [348 F.Supp., at 879-881](#). Like the Act, *Mills* also required that the education of handicapped children be conducted pursuant to an overall plan prepared by the District of Columbia, and established a policy of educating handicapped children with nonhandicapped children whenever possible. *Ibid.*

^{FN17}. See S.Rep., at 6-7; H.R.Rep., at 3-4.

^{FN18}. The 1974 statute “incorporated the major principles of the right to education cases,” by “add[ing] important new provisions to the Education of the Handicapped Act which require the States to: establish a goal of providing full educational opportunities to all handicapped children; provide procedures for



insuring that handicapped children and their parents or guardians are guaranteed procedural safeguards in decisions regarding identification, evaluation, and educational placement of handicapped children; establish procedures to insure that, to the maximum extent appropriate, handicapped children ... are educated with children who are not handicapped; ... and, establish procedures to insure that testing and evaluation materials and procedures utilized for the purposes of classification and placement of handicapped children will be selected and administered so as not to be racially or culturally discriminatory.” S.Rep., at 8, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1432.

The House Report explains that the Act simply incorporated these purposes of the 1974 statute: the Act was intended “primarily to amend ... the Education of the Handicapped Act in order to provide permanent authorization and a comprehensive mechanism which will insure that those provisions enacted during the 93rd Congress [the 1974 statute] will result in maximum benefits for handicapped children and their families.” H.R.Rep., at 5. Thus, the 1974 statute's purpose of providing handicapped children *access* to a public education became the purpose of the Act.

***195** That the Act imposes no clear obligation upon recipient States beyond the requirement that handicapped children receive some form of specialized education is perhaps best demonstrated by the fact that Congress, in explaining the need for the Act, equated an “appropriate education” to the receipt of some specialized educational services. The Senate Report states: “[T]he most recent statistics provided by the Bureau of Education for the Handicapped estimate that of the more than 8 million children ... with handicapping conditions requiring special education and related services, only 3.9 million such children are receiving an appropriate education.” S.Rep., at 8, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1432.^{FN19} This statement, which reveals Congress' view that 3.9 million handicapped children were “receiving an appropriate education” in 1975, is followed immediately in the Senate Report by a table showing that 3.9 million handicapped children were “served” in 1975 and a slightly larger number were “unserved.” A similar statement and table appear in the House Report. H.R.Rep., at 11-12.

^{FN19}. These statistics appear repeatedly throughout the legislative history of the Act, demonstrating a virtual consensus among legislators that 3.9 million handicapped children were receiving an appropriate education in 1975. See, e.g., 121 Cong.Rec. 19486 (1975) (remarks of Sen. Williams); *id.*, at 19504 (remarks of Sen. Schweicker); *id.*, at 23702 (remarks of Rep. Madden); *ibid.* (remarks of Rep. Brademas); *id.*, at 23709 (remarks of Rep. Minish); *id.*, at 37024 (remarks of Rep. Brademas); *id.*, at 37027 (remarks of Rep. Gude); *id.*, at 37417 (remarks of Sen. Javits); *id.*, at 37420 (remarks of Sen. Hathaway).

196** It is evident from the legislative history that the characterization of handicapped children as “served” referred to children who were receiving some form of specialized educational services from the States, and that the characterization of children as “unserved” referred to those who were receiving no specialized educational services. For example, a letter sent to the United States Commissioner of Education by the House Committee on Education and Labor, signed by two key sponsors of the Act in the House, asked the Commissioner to identify the number of handicapped “children served” in each State. The letter asked for statistics on the number of children “being served” in various types of “special education program[s]” and the number of children who were not “receiving educational services.” Hearings on S. 6 before the Subcommittee on the Handicapped of the Senate Committee on Labor and Public Welfare, 94th Cong., 1st Sess., 205-207 (1975). Similarly, Senator Randolph, one of the Act's principal sponsors in the Senate, *3046** noted that roughly one-half of the handicapped children in the United States “are receiving special educational services.” *Id.*, at 1.^{FN20} By ***197** characterizing the 3.9 million handicapped children who were “served” as children who were “receiving an appropriate education,” the Senate and House Reports unmistakably disclose Congress' perception of the type of education required by the Act: an “appropriate education” is provided when personalized educational services are provided.^{FN21}

^{FN20}. Senator Randolph stated: “[O]nly 55 percent of the school-aged handicapped children and 22 percent of the pre-school-aged handicapped children are receiving special educational services.” Hearings on S. 6 before the Subcommittee on the Handicapped of the Senate Committee on Labor and Public Welfare, 94th Cong., 1st Sess., 1 (1975). Although the figures differ slightly in various parts of the legislative history, the general thrust of congressional calculations was that roughly one-half of the handicapped children in the United States were not receiving specialized educational services, and thus



were not “served.” See, e.g., 121 Cong.Rec. 19494 (1975) (remarks of Sen. Javits) (“only 50 percent of the Nation’s handicapped children received proper education services”); *id.*, at 19504 (remarks of Sen. Humphrey) (“[a]lmost 3 million handicapped children, while in school, receive none of the special services that they require in order to make education a meaningful experience”); *id.*, at 23706 (remarks of Rep. Quie) (“only 55 percent [of handicapped children] were receiving a public education”); *id.*, at 23709 (remarks of Rep. Biaggi) (“[o]ver 3 million [handicapped] children in this country are receiving either below par education or none at all”).

Statements similar to those appearing in the text, which equate “served” as it appears in the Senate Report to “receiving special educational services,” appear throughout the legislative history. See, e.g., *id.*, at 19492 (remarks of Sen. Williams); *id.*, at 19494 (remarks of Sen. Javits); *id.*, at 19496 (remarks of Sen. Stone); *id.*, at 19504-19505 (remarks of Sen. Humphrey); *id.*, at 23703 (remarks of Rep. Brademas); Hearings on H.R. 7217 before the Subcommittee on Select Education of the House Committee on Education and Labor, 94th Cong., 1st Sess., 91, 150, 153 (1975); Hearings on H.R. 4199 before the Select Subcommittee on Education of the House Committee on Education and Labor, 93d Cong., 1st Sess., 130, 139 (1973). See also [34 CFR § 300.343 \(1981\)](#).

FN21. In seeking to read more into the Act than its language or legislative history will permit, the United States focuses upon the word “appropriate,” arguing that “the statutory definitions do not adequately explain what [it means].” Brief for United States as *Amicus Curiae* 13. Whatever Congress meant by an “appropriate” education, it is clear that it did not mean a potential-maximizing education.

The term as used in reference to educating the handicapped appears to have originated in the *PARC* decision, where the District Court required that handicapped children be provided with “education and training appropriate to [their] learning capacities.” [334 F.Supp., at 1258](#). The word appears again in the *Mills* decision, the District Court at one point referring to the need for “an appropriate educational program,” [348 F.Supp., at 879](#), and at another point speaking of a “suitable publicly-supported education,” *id.*, at 878. Both cases also refer to the need for an “adequate” education. See [334 F.Supp., at 1266](#); [348 F.Supp., at 878](#).

The use of “appropriate” in the language of the Act, although by no means definitive, suggests that Congress used the word as much to describe the settings in which handicapped children should be educated as to prescribe the substantive content or supportive services of their education. For example, [§ 1412\(5\)](#) requires that handicapped children be educated in classrooms with nonhandicapped children “to the maximum extent appropriate.” Similarly, [§ 1401\(19\)](#) provides that, “whenever appropriate,” handicapped children should attend and participate in the meeting at which their IEP is drafted. In addition, the definition of “free appropriate public education” itself states that instruction given handicapped children should be at an “appropriate preschool, elementary, or secondary school” level. [§ 1401\(18\)\(C\)](#). The Act’s use of the word “appropriate” thus seems to reflect Congress’ recognition that some settings simply are not suitable environments for the participation of some handicapped children. At the very least, these statutory uses of the word refute the contention that Congress used “appropriate” as a term of art which concisely expresses the standard found by the lower courts.

***198 (ii)**

Respondents contend that “the goal of the Act is to provide each handicapped child with an equal educational opportunity.” Brief for Respondents 35. We think, however, that the requirement that a State provide specialized educational services to handicapped children generates no additional requirement that the services so provided be sufficient to maximize each child’s potential “commensurate with the opportunity provided other children.” Respondents****3047** and the United States correctly note that Congress sought “to provide assistance to the States in carrying out their responsibilities under ... the Constitution of the United States to provide equal protection of the laws.” S.Rep., at 13, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1437. **FN22** But we do not think that such statements imply a congressional intent to achieve strict equality of opportunity or services.

FN22. See also 121 Cong.Rec. 19492 (1975) (remarks of Sen. Williams); *id.*, at 19504 (remarks of Sen.



Humphrey).

The educational opportunities provided by our public school systems undoubtedly differ from student to student, depending upon a myriad of factors that might affect a particular student's ability to assimilate information presented in the classroom. The requirement that States provide “equal” educational opportunities would thus seem to present an entirely unworkable standard requiring impossible measurements and comparisons. Similarly, furnishing handicapped children with only such services as are available to nonhandicapped*199 children would in all probability fall short of the statutory requirement of “free appropriate public education”; to require, on the other hand, the furnishing of every special service necessary to maximize each handicapped child's potential is, we think, further than Congress intended to go. Thus to speak in terms of “equal” services in one instance gives less than what is required by the Act and in another instance more. The theme of the Act is “free appropriate public education,” a phrase which is too complex to be captured by the word “equal” whether one is speaking of opportunities or services.

The legislative conception of the requirements of equal protection was undoubtedly informed by the two District Court decisions referred to above. But cases such as *Mills* and *PARC* held simply that handicapped children may not be excluded entirely from public education. In *Mills*, the District Court said:

“If sufficient funds are not available to finance all of the services and programs that are needed and desirable in the system then the available funds must be expended equitably in such a manner that no child is entirely excluded from a publicly supported education consistent with his needs and ability to benefit therefrom.” [348 F.Supp., at 876.](#)

The *PARC* court used similar language, saying “[i]t is the commonwealth's obligation to place each mentally retarded child in a free, public program of education and training appropriate to the child's capacity...” [334 F.Supp., at 1260.](#) The right of access to free public education enunciated by these cases is significantly different from any notion of absolute equality of opportunity regardless of capacity. To the extent that Congress might have looked further than these cases which are mentioned in the legislative history, at the time of enactment of the Act this Court had held at least twice that the Equal Protection Clause of the Fourteenth *200 Amendment does not require States to expend equal financial resources on the education of each child. [San Antonio Independent School Dist. v. Rodriguez, 411 U.S. 1, 93 S.Ct. 1278, 36 L.Ed.2d 16 \(1973\);](#) [McInnis v. Shapiro, 293 F.Supp. 327 \(ND Ill.1968\),](#) aff'd [sub nom. McInnis v. Ogilvie, 394 U.S. 322, 89 S.Ct. 1197, 22 L.Ed.2d 308 \(1969\).](#)

In explaining the need for federal legislation, the House Report noted that “no congressional legislation has required a precise guarantee for handicapped children, i.e. a basic floor of opportunity that would bring into compliance all school districts with the constitutional right of equal protection with respect to handicapped children.” H.R.Rep., at 14. Assuming that the Act was designed to fill the need identified in the House Report—that is, to provide a “basic floor of opportunity” consistent with equal protection—neither the Act nor its history persuasively demonstrates that Congress thought that equal protection required anything more than equal **3048 access. Therefore, Congress' desire to provide specialized educational services, even in furtherance of “equality,” cannot be read as imposing any particular substantive educational standard upon the States.

The District Court and the Court of Appeals thus erred when they held that the Act requires New York to maximize the potential of each handicapped child commensurate with the opportunity provided nonhandicapped children. Desirable though that goal might be, it is not the standard that Congress imposed upon States which receive funding under the Act. Rather, Congress sought primarily to identify and evaluate handicapped children, and to provide them with access to a free public education.

(iii)

Implicit in the congressional purpose of providing access to a “free appropriate public education” is the requirement that the education to which access is provided be sufficient to confer some educational benefit upon the handicapped child. It would do little good for Congress to spend millions of dollars in providing access to a public education only to have the *201 handicapped child receive no benefit from that education. The statutory definition of “free appropriate public education,” in addition to requiring that States provide each child with



“specially designed instruction,” expressly requires the provision of “such ... supportive services ... as may be required to assist a handicapped child *to benefit* from special education.” [§ 1401\(17\)](#) (emphasis added). We therefore conclude that the “basic floor of opportunity” provided by the Act consists of access to specialized instruction and related services which are individually designed to provide educational benefit to the handicapped child.^{[FN23](#)}

[FN23](#). This view is supported by the congressional intention, frequently expressed in the legislative history, that handicapped children be enabled to achieve a reasonable degree of self-sufficiency. After referring to statistics showing that many handicapped children were excluded from public education, the Senate Report states:

“The long range implications of these statistics are that public agencies and taxpayers will spend billions of dollars over the lifetimes of these individuals to maintain such persons as dependents and in a minimally acceptable lifestyle. With proper education services, many would be able to become productive citizens, contributing to society instead of being forced to remain burdens. Others, through such services, would increase their independence, thus reducing their dependence on society.” S.Rep., at 9, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1433.

See also H.R.Rep., at 11. Similarly, one of the principal Senate sponsors of the Act stated that “providing appropriate educational services now means that many of these individuals will be able to become a contributing part of our society, and they will not have to depend on subsistence payments from public funds.” 121 Cong.Rec. 19492 (1975) (remarks of Sen. Williams). See also *id.*, at 25541 (remarks of Rep. Harkin); *id.*, at 37024-37025 (remarks of Rep. Brademas); *id.*, at 37027 (remarks of Rep. Gude); *id.*, at 37410 (remarks of Sen. Randolph); *id.*, at 37416 (remarks of Sen. Williams).

The desire to provide handicapped children with an attainable degree of personal independence obviously anticipated that state educational programs would confer educational benefits upon such children. But at the same time, the goal of achieving some degree of self-sufficiency in most cases is a good deal more modest than the potential-maximizing goal adopted by the lower courts.

Despite its frequent mention, we cannot conclude, as did the dissent in the Court of Appeals, that self-sufficiency was itself the substantive standard which Congress imposed upon the States. Because many mildly handicapped children will achieve self-sufficiency without state assistance while personal independence for the severely handicapped may be an unreachable goal, “self-sufficiency” as a substantive standard is at once an inadequate protection and an overly demanding requirement. We thus view these references in the legislative history as evidence of Congress' intention that the services provided handicapped children be educationally beneficial, whatever the nature or severity of their handicap.

202** The determination of when handicapped children are receiving sufficient educational benefits to satisfy the requirements of the Act presents a more difficult problem. The Act requires participating States to educate a wide spectrum of handicapped children, from the marginally hearing-impaired to the profoundly retarded and palsied.*3049** It is clear that the benefits obtainable by children at one end of the spectrum will differ dramatically from those obtainable by children at the other end, with infinite variations in between. One child may have little difficulty competing successfully in an academic setting with nonhandicapped children while another child may encounter great difficulty in acquiring even the most basic of self-maintenance skills. We do not attempt today to establish any one test for determining the adequacy of educational benefits conferred upon all children covered by the Act. Because in this case we are presented with a handicapped child who is receiving substantial specialized instruction and related services, and who is performing above average in the regular classrooms of a public school system, we confine our analysis to that situation.

The Act requires participating States to educate handicapped children with nonhandicapped children whenever possible.^{[FN24](#)} When that “mainstreaming” preference of the Act ***203** has been met and a child is being educated in the regular classrooms of a public school system, the system itself monitors the educational progress of the child.



Regular examinations are administered, grades are awarded, and yearly advancement to higher grade levels is permitted for those children who attain an adequate knowledge of the course material. The grading and advancement system thus constitutes an important factor in determining educational benefit. Children who graduate from our public school systems are considered by our society to have been “educated” at least to the grade level they have completed, and access to an “education” for handicapped children is precisely what Congress sought to provide in the Act.^{FN25}

[FN24. Title 20 U.S.C. § 1412\(5\)](#) requires that participating States establish “procedures to assure that, to the maximum extent appropriate, handicapped children, including children in public or private institutions or other care facilities, are educated with children who are not handicapped, and that special classes, separate schooling, or other removal of handicapped children from the regular educational environment occurs only when the nature or severity of the handicap is such that education in regular classes with the use of supplementary aids and services cannot be achieved satisfactorily.”

[FN25.](#) We do not hold today that every handicapped child who is advancing from grade to grade in a regular public school system is automatically receiving a “free appropriate public education.” In this case, however, we find Amy’s academic progress, when considered with the special services and professional consideration accorded by the Furnace Woods school administrators, to be dispositive.

C

When the language of the Act and its legislative history are considered together, the requirements imposed by Congress become tolerably clear. Insofar as a State is required to provide a handicapped child with a “free appropriate public education,” we hold that it satisfies this requirement by providing personalized instruction with sufficient support services to permit the child to benefit educationally from that instruction. Such instruction and services must be provided at public expense, must meet the State’s educational standards, must approximate the grade levels used in the State’s regular education, and must comport with the child’s IEP. In addition, the IEP, and therefore the personalized instruction, should be formulated in accordance with the requirements of ***204** the Act and, if the child is being educated in the regular classrooms of the public education system, should be reasonably calculated to enable the child to achieve passing marks and advance from grade to grade.^{FN26}

[FN26.](#) In defending the decisions of the District Court and the Court of Appeals, respondents and the United States rely upon isolated statements in the legislative history concerning the achievement of maximum potential, see H.R.Rep., at 13, as support for their contention that Congress intended to impose greater substantive requirements than we have found. These statements, however, are too thin a reed on which to base an interpretation of the Act which disregards both its language and the balance of its legislative history. “Passing references and isolated phrases are not controlling when analyzing a legislative history.” [Department of State v. Washington Post Co.](#), 456 U.S. 595, 600, 102 S.Ct. 1957, 1960, 72 L.Ed.2d 358 (1982).

Moreover, even were we to agree that these statements evince a congressional intent to maximize each child’s potential, we could not hold that Congress had successfully imposed that burden upon the States.

“[L]egislation enacted pursuant to the spending power is much in the nature of a contract: in return for federal funds, the States agree to comply with federally imposed conditions. The legitimacy of Congress’ power to legislate under the spending power thus rests on whether the State voluntarily and knowingly accepts the terms of the ‘contract.’ ... Accordingly, if Congress intends to impose a condition on the grant of federal moneys, it must do so unambiguously.” [Pennhurst State School v. Halderman](#), 451 U.S. 1, 17, 101 S.Ct. 1531, 1539-40, 67 L.Ed.2d 694 (1981) (footnote omitted).

As already demonstrated, the Act and its history impose no requirements on the States like those imposed by the District Court and the Court of Appeals. *A fortiori* Congress has not done so unambiguously, as required in the valid exercise of its spending power.



A

[3] As mentioned in Part I, the Act permits “[a]ny party aggrieved by the findings and decision” of the state administrative hearings “to bring a civil action” in “any State court of competent jurisdiction or in a district court of the United States without regard to the amount in controversy.” [§ 1415\(e\)\(2\)](#). The complaint, and therefore the civil action, may concern “any matter relating to the identification, evaluation, or educational placement of the child, or the provision*205 of a free appropriate public education to such child.” [§ 1415\(b\)\(1\)\(E\)](#). In reviewing the complaint, the Act provides that a court “shall receive the record of the [state] administrative proceedings, shall hear additional evidence at the request of a party, and, basing its decision on the preponderance of the evidence, shall grant such relief as the court determines is appropriate.” [§ 1415\(e\)\(2\)](#).

The parties disagree sharply over the meaning of these provisions, petitioners contending that courts are given only limited authority to review for state compliance with the Act's procedural requirements and no power to review the substance of the state program, and respondents contending that the Act requires courts to exercise *de novo* review over state educational decisions and policies. We find petitioners' contention unpersuasive, for Congress expressly rejected provisions that would have so severely restricted the role of reviewing courts. In substituting the current language of the statute for language that would have made state administrative findings conclusive if supported by substantial evidence, the Conference Committee explained that courts were to make “independent decision[s] based on a preponderance of the evidence.” [S.Conf.Rep.No.94-455, p. 50 \(1975\)](#), U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1503. See also 121 Cong.Rec. 37416 (1975) (remarks of Sen. Williams).

But although we find that this grant of authority is broader than claimed by petitioners, we think the fact that it is found in [§ 1415](#), which is entitled “Procedural safeguards,” is not without significance. When the elaborate and highly specific procedural safeguards embodied in [§ 1415](#) are contrasted with the general and somewhat imprecise substantive admonitions contained in the Act, we think that the importance Congress attached to these procedural safeguards cannot be gainsaid. It seems to us no exaggeration to say that Congress placed every bit as much emphasis upon compliance with procedures giving parents and guardians a large measure of participation at every stage of the administrative process, see, e.g., [§§ 1415\(a\)-\(d\)](#), as it did upon the measurement of the resulting*206 IEP against a substantive standard. We think that the congressional emphasis upon full participation of concerned parties throughout the development of the IEP, as well as the requirements that state and local plans be submitted to the Secretary for approval, demonstrates the legislative conviction that adequate compliance with the procedures prescribed would in most cases assure much if not all of what Congress wished in the way of substantive content in an IEP.

**3051 Thus the provision that a reviewing court base its decision on the “preponderance of the evidence” is by no means an invitation to the courts to substitute their own notions of sound educational policy for those of the school authorities which they review. The very importance which Congress has attached to compliance with certain procedures in the preparation of an IEP would be frustrated if a court were permitted simply to set state decisions at naught. The fact that [§ 1415\(e\)](#) requires that the reviewing court “receive the records of the [state] administrative proceedings” carries with it the implied requirement that due weight shall be given to these proceedings. And we find nothing in the Act to suggest that merely because Congress was rather sketchy in establishing substantive requirements, as opposed to procedural requirements for the preparation of an IEP, it intended that reviewing courts should have a free hand to impose substantive standards of review which cannot be derived from the Act itself. In short, the statutory authorization to grant “such relief as the court determines is appropriate” cannot be read without reference to the obligations, largely procedural in nature, which are imposed upon recipient States by Congress.

Therefore, a court's inquiry in suits brought under [§ 1415\(e\)\(2\)](#) is twofold. First, has the State complied with the procedures set forth in the Act? ^{FN27} And second, is the *207 individualized educational program developed through the Act's procedures reasonably calculated to enable the child to receive educational benefits?^{FN28} If these requirements are met, the State has complied with the obligations imposed by Congress and the courts can require no more.

^{FN27}. This inquiry will require a court not only to satisfy itself that the State has adopted the state plan, policies, and assurances required by the Act, but also to determine that the State has created an IEP for the child in question which conforms with the requirements of [§ 1401\(19\)](#).



[FN28](#). When the handicapped child is being educated in the regular classrooms of a public school system, the achievement of passing marks and advancement from grade to grade will be one important factor in determining educational benefit. See Part III, *supra*.

B

[4] In assuring that the requirements of the Act have been met, courts must be careful to avoid imposing their view of preferable educational methods upon the States.^{[FN29](#)} The primary responsibility for formulating the education to be accorded a handicapped child, and for choosing the educational method most suitable to the child's needs, was left by the Act to state and local educational agencies in cooperation with the parents or guardian of the child. The Act expressly charges States with the responsibility of “acquiring and disseminating to teachers and administrators of programs for handicapped children significant information derived from educational research, demonstration, and similar projects, and [of] adopting, where appropriate, promising educational practices and materials.” [§ 1413\(a\)\(3\)](#). In the face of such a clear statutory directive, it seems highly unlikely that Congress intended ***208** courts to overturn a State's choice of appropriate educational theories in a proceeding conducted pursuant to [§ 1415\(e\)\(2\)](#).^{[FN30](#)}

[FN29](#). In this case, for example, both the state hearing officer and the District Court were presented with evidence as to the best method for educating the deaf, a question long debated among scholars. See [Large, Special Problems of the Deaf Under the Education for All Handicapped Children Act of 1975, 58 Wash.U.L.Q. 213, 229 \(1980\)](#). The District Court accepted the testimony of respondents' experts that there was “a trend supported by studies showing the greater degree of success of students brought up in deaf households using [the method of communication used by the [Rowleys](#)].” [483 F.Supp., at 535](#).

[FN30](#). It is clear that Congress was aware of the States' traditional role in the formulation and execution of educational policy. “Historically, the States have had the primary responsibility for the education of children at the elementary and secondary level.” 121 Cong.Rec. 19498 (1975) (remarks of Sen. Dole). See also [Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97, 104, 89 S.Ct. 266, 270, 21 L.Ed.2d 228 \(1968\)](#) (“By and large, public education in our Nation is committed to the control of state and local authorities”).

****3052** We previously have cautioned that courts lack the “specialized knowledge and experience” necessary to resolve “persistent and difficult questions of educational policy.” [San Antonio Independent School Dist. v. Rodriguez, 411 U.S., at 42, 93 S.Ct., at 1301](#). We think that Congress shared that view when it passed the Act. As already demonstrated, Congress' intention was not that the Act displace the primacy of States in the field of education, but that States receive funds to assist them in extending their educational systems to the handicapped. Therefore, once a court determines that the requirements of the Act have been met, questions of methodology are for resolution by the States.

V

Entrusting a child's education to state and local agencies does not leave the child without protection. Congress sought to protect individual children by providing for parental involvement in the development of state plans and policies, *supra*, at 3038, and n. 6, and in the formulation of the child's individual educational program. As the Senate Report states:

“The Committee recognizes that in many instances the process of providing special education and related services to handicapped children is not guaranteed to produce any particular outcome. By changing the language [of the provision relating to individualized educational programs] to emphasize the process of parent and child ***209** involvement and to provide a written record of reasonable expectations, the Committee intends to clarify that such individualized planning conferences are a way to provide parent involvement and protection to assure that appropriate services are provided to a handicapped child.” S.Rep., at 11-12, U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1435.

See also S.Conf.Rep.No.94-445, p. 30 (1975); [34 CFR § 300.345 \(1981\)](#). As this very case demonstrates, parents and guardians will not lack ardor in seeking to ensure that handicapped children receive all of the benefits



to which they are entitled by the Act.^{FN31}

^{FN31}. In addition to providing for extensive parental involvement in the formulation of state and local policies, as well as the preparation of individual educational programs, the Act ensures that States will receive the advice of experts in the field of educating handicapped children. As a condition for receiving federal funds under the Act, States must create “an advisory panel, appointed by the Governor or any other official authorized under State law to make such appointments, composed of individuals involved in or concerned with the education of handicapped children, including handicapped individuals, teachers, parents or guardians of handicapped children, State and local education officials, and administrators of programs for handicapped children, which (A) advises the State educational agency of unmet needs within the State in the education of handicapped children, [and] (B) comments publicly on any rules or regulations proposed for issuance by the State regarding the education of handicapped children.” § [1413\(a\)\(12\)](#).

VI

⁵ Applying these principles to the facts of this case, we conclude that the Court of Appeals erred in affirming the decision of the District Court. Neither the District Court nor the Court of Appeals found that petitioners had failed to comply with the procedures of the Act, and the findings of neither court would support a conclusion that Amy's educational program failed to comply with the substantive requirements of the Act. On the contrary, the District Court found that the “evidence firmly establishes that Amy is receiving an *210 ‘adequate’ education, since she performs better than the average child in her class and is advancing easily from grade to grade.” [483 F.Supp., at 534](#). In light of this finding, and of the fact that Amy was receiving personalized instruction and related services calculated by the Furnace Woods school administrators to meet her educational needs, the lower courts should not have concluded that the Act requires the provision of a sign-language interpreter. Accordingly, the decision of the Court of Appeals is reversed, and the case is **3053 remanded for further proceedings consistent with this opinion.^{FN32}

^{FN32}. Because the District Court declined to reach respondents' contention that petitioners had failed to comply with the Act's procedural requirements in developing Amy's IEP, [483 F.Supp., at 533, n. 8](#), the case must be remanded for further proceedings consistent with this opinion.

So ordered.

Justice BLACKMUN, concurring in the judgment.

Although I reach the same result as the Court does today, I read the legislative history and goals of the Education of the Handicapped Act differently. Congress unambiguously stated that it intended to “take a more active role under its responsibility for equal protection of the laws to guarantee that handicapped children are provided *equal educational opportunity*.” [S.Rep.No.94-168, p. 9](#) (1975), U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1433 (emphasis added). See also [20 U.S.C. § 1412\(2\)\(A\)\(i\)](#) (requiring States to establish plans with the “goal of providing full educational opportunity to all handicapped children”).

As I have observed before, “[i]t seems plain to me that Congress, in enacting [this statute], intended to do more than merely set out politically self-serving but essentially meaningless language about what the [handicapped] deserve at the hands of state ... authorities.” [Pennhurst State School v. Halderman, 451 U.S. 1, 32, 101 S.Ct. 1531, 1547, 67 L.Ed.2d 694 \(1981\)](#) (opinion concurring in part and concurring in the judgment). The clarity of the legislative *211 intent convinces me that the relevant question here is not, as the Court says, whether Amy Rowley's individualized education program was “reasonably calculated to enable [her] to receive educational benefits,” *ante*, at 3051, measured in part by whether or not she “achieve[s] passing marks and advance[s] from grade to grade,” *ante*, at 3049. Rather, the question is whether Amy's program, *viewed as a whole*, offered her an opportunity to understand and participate in the classroom that was substantially equal to that given her nonhandicapped classmates. This is a standard predicated on equal educational opportunity and equal access to the educational process, rather than upon Amy's achievement of any particular educational outcome.

In answering this question, I believe that the District Court and the Court of Appeals should have given greater



deference than they did to the findings of the School District's impartial hearing officer and the State's Commissioner of Education, both of whom sustained petitioners' refusal to add a sign-language interpreter to Amy's individualized education program. Cf. [20 U.S.C. § 1415\(e\)\(2\)](#) (requiring reviewing court to “receive the records of the administrative proceedings” before granting relief). I would suggest further that those courts focused too narrowly on the presence or absence of a particular service—a sign-language interpreter—rather than on the total package of services furnished to Amy by the School Board.

As the Court demonstrates, *ante*, at 3039-3040, petitioner Board has provided Amy Rowley considerably more than “a teacher with a loud voice.” See *post*, at 3055 (dissenting opinion). By concentrating on whether Amy was “learning as much, or performing as well academically, as she would without her handicap,” [483 F.Supp. 528, 532 \(S.D.N.Y.1980\)](#), the District Court and the Court of Appeals paid too little attention to whether, on the entire record, respondent's individualized education program offered her an educational opportunity*212 substantially equal to that provided her nonhandicapped classmates. Because I believe that standard has been satisfied here, I agree that the judgment of the Court of Appeals should be reversed.

Justice WHITE, with whom Justice BRENNAN and Justice MARSHALL join, dissenting.

In order to reach its result in this case, the majority opinion contradicts itself, the **3054 language of the statute, and the legislative history. Both the majority's standard for a “free appropriate education” and its standard for judicial review disregard congressional intent.

I

The majority first turns its attention to the meaning of a “free appropriate public education.” The Act provides:

“The term ‘free appropriate public education’ means special education and related services which (A) have been provided at public expense, under public supervision and direction, and without charge, (B) meet the standards of the State educational agency, (C) include an appropriate preschool, elementary, or secondary school education in the State involved, and (D) are provided in conformity with the individualized education program required under [section 1414\(a\)\(5\)](#) of this title.” [20 U.S.C. § 1401\(18\)](#).

The majority reads this statutory language as establishing a congressional intent limited to bringing “previously excluded handicapped children into the public education systems of the States and [requiring] the States to adopt *procedures* which would result in individualized consideration of and instruction for each child.” *Ante*, at 3042. In its attempt to constrict the definition of “appropriate” and the thrust of the Act, the majority opinion states: “Noticeably absent from the language of the statute is any substantive standard prescribing the level of education to be accorded handicapped children. Certainly *213 the language of the statute contains no requirement like the one imposed by the lower courts—that States maximize the potential of handicapped children ‘commensurate with the opportunity provided to other children.’ ” *Ante*, at 3042, quoting [483 F.Supp. 528, 534 \(SDNY 1980\)](#).

I agree that the language of the Act does not contain a substantive standard beyond requiring that the education offered must be “appropriate.” However, if there are limits not evident from the face of the statute on what may be considered an “appropriate education,” they must be found in the purpose of the statute or its legislative history. The Act itself announces it will provide a “*full* educational opportunity to all handicapped children.” [20 U.S.C. § 1412\(2\)\(A\)](#) (emphasis added). This goal is repeated throughout the legislative history, in statements too frequent to be “ ‘passing references and isolated phrases.’ ” ^{FNI} *Ante*, at 3049, n. 26, quoting [Department of State v. Washington Post Co., 456 U.S. 596, 600, 102 S.Ct. 1957, 1960, 72 L.Ed.2d 358 \(1982\)](#). These statements elucidate the meaning of “appropriate.” According to the Senate Report, for example, the Act does “guarantee that handicapped children are provided *equal* educational opportunity.” [S.Rep.No.94-168, p. 9](#) (1975), U.S.Code Cong. & Admin.News 1975, p. 1433 (emphasis added). This promise appears throughout the legislative history. See 121 Cong.Rec. 19482-19483 (1975) (remarks of Sen. Randolph); *id.*, at 19504 (Sen. Humphrey); *id.*, at 19505 (Sen. Beall); *id.*, at 23704 (Rep. Brademas); *id.*, at 25538 (Rep. Cornell); *id.*, at 25540 (Rep. Grassley); *id.*, at 37025 (Rep. Perkins); *id.*, at *214 37030 (Rep. Mink); *id.*, at 37412 (Sen. Taft); *id.*, at 37413 (Sen. Williams); *id.*, at 37418-37419 (Sen. Cranston); *id.*, at 37419-37420 (Sen. Beall). Indeed, at times the purpose of the Act was described as tailoring each handicapped child's educational plan to enable the child “to achieve his or her maximum



potential.” H.R.Rep.No.94-332, pp. 13, 19 (1975); see 121 Cong.Rec. 23709 (1975). **3055 Senator Stafford, one of the sponsors of the Act, declared: “We can all agree that education [given a handicapped child] should be equivalent, at least, to the one those children who are not handicapped receive.” *Id.*, at 19483. The legislative history thus directly supports the conclusion that the Act intends to give handicapped children an educational opportunity commensurate with that given other children.

FN1. The Court's opinion relies heavily on the statement, which occurs throughout the legislative history, that, at the time of enactment, one million of the roughly eight million handicapped children in the United States were excluded entirely from the public school system and more than half were receiving an inappropriate education. See, *e.g.*, *ante*, at 3042, 3045, 3046, n. 20. But this statement was often linked to statements urging equal educational opportunity. See, *e.g.*, 121 Cong.Rec. 19502 (1975) (remarks of Sen. Cranston); *id.*, at 23702 (remarks of Rep. Brademas). That is, Congress wanted not only to bring handicapped children into the schoolhouse, but also to benefit them once they had entered.

The majority opinion announces a different substantive standard, that “Congress did not impose upon the States any greater substantive educational standard than would be necessary to make such access meaningful.” *Ante*, at 3043. While “meaningful” is no more enlightening than “appropriate,” the Court purports to clarify itself. Because Amy was provided with *some* specialized instruction from which she obtained *some* benefit and because she passed from grade to grade, she was receiving a meaningful and therefore appropriate education.^{FN2}

FN2. As further support for its conclusion, the majority opinion turns to [Pennsylvania Assn. for Retarded Children v. Commonwealth](#), 334 F.Supp. 1257 (ED Pa.1971), 343 F.Supp. 279 (1972) (*PARC*), and [Mills v. Board of Education of District of Columbia](#), 348 F.Supp. 866 (D.C.1972). That these decisions served as an impetus for the Act does not, however, establish them as the limits of the Act. In any case, the very language that the majority quotes from *Mills*, *ante*, at 3044, 3047, sets a standard not of *some* education, but of educational opportunity equal to that of non-handicapped children.

Indeed, *Mills*, relying on decisions since called into question by this Court's opinion in [San Antonio Independent School Dist. v. Rodriguez](#), 411 U.S. 1, 93 S.Ct. 1278, 36 L.Ed.2d 16 (1973), states:

“In [Hobson v. Hansen](#), [269 F.Supp. 401 (D.C.1967)] Judge Wright found that denying poor public school children educational opportunity equal to that available to more affluent public school children was violative of the Due Process Clause of the Fifth Amendment. *A fortiori*, the defendants' conduct here, denying plaintiffs and their class not just an equal publicly supported education but all publicly supported education while providing such education to other children, is violative of the Due Process Clause.” [348 F.Supp., at 875.](#)

Whatever the effect of *Rodriguez* on the validity of this reasoning, the statement exposes the majority's mischaracterization of the opinion and thus of the assumptions of the legislature that passed the Act.

***215** This falls far short of what the Act intended. The Act details as specifically as possible the kind of specialized education each handicapped child must receive. It would apparently satisfy the Court's standard of “access to specialized instruction and related services which are individually designed to provide educational benefit to the handicapped child,” *ante*, at 3048, for a deaf child such as Amy to be given a teacher with a loud voice, for she would benefit from that service. The Act requires more. It defines “special education” to mean “specifically designed instruction, at no cost to parents or guardians, to *meet the unique needs* of a handicapped child....” § 1401(16) (emphasis added).^{FN3} Providing a teacher with a loud voice would not meet Amy's needs and would not satisfy the Act. The basic floor of opportunity is instead, as the courts below recognized, intended to eliminate the effects of the handicap, at least to the extent that the child will be given an equal opportunity to learn if that is reasonably possible. Amy Rowley, without a sign-language interpreter, comprehends less than half of what is said in the classroom-less than half of what normal children comprehend. This is hardly an equal opportunity to learn, even if Amy makes passing grades.

FN3. “Related services” are “transportation, and such developmental, corrective, and other supportive



services ... as may be required to assist a handicapped child to benefit from special education.” [§ 1401\(17\)](#).

Despite its reliance on the use of “appropriate” in the definition of the Act, the majority opinion speculates that “Congress used the word as much to describe the settings in which *216 handicapped children should be educated as to prescribe the substantive content or supportive services of their education.” *Ante*, at 3046, n. 21. Of course, the word “appropriate” can be applied in many ways; at times in the Act, Congress used it to recommend mainstreaming**3056 handicapped children; at other points, it used the word to refer to the content of the individualized education. The issue before us is what standard the word “appropriate” incorporates when it is used to modify “education.” The answer given by the Court is not a satisfactory one.

II

The Court’s discussion of the standard for judicial review is as flawed as its discussion of a “free appropriate public education.” According to the Court, a court can ask only whether the State has “complied with the procedures set forth in the Act” and whether the individualized education program is “reasonably calculated to enable the child to receive educational benefits.” *Ante*, at 3051. Both the language of the Act and the legislative history, however, demonstrate that Congress intended the courts to conduct a far more searching inquiry.

The majority assigns major significance to the review provision’s being found in a section entitled “Procedural safeguards.” But where else would a provision for judicial review belong? The majority does acknowledge that the current language, specifying that a court “shall receive the records of the administrative proceedings, shall hear additional evidence at the request of a party, and, basing its decision on the preponderance of the evidence, shall grant such relief as the court determines is appropriate,” [§ 1415\(e\)\(2\)](#), was substituted at Conference for language that would have restricted the role of the reviewing court much more sharply. It is clear enough to me that Congress decided to reduce substantially judicial deference to state administrative decisions.

The legislative history shows that judicial review is not limited to procedural matters and that the state educational agencies are given first, but not final, responsibility for the *217 content of a handicapped child’s education. The Conference Committee directs courts to make an “independent decision.” [S.Conf.Rep.No.94-455, p. 50 \(1975\)](#). The deliberate change in the review provision is an unusually clear indication that Congress intended courts to undertake substantive review instead of relying on the conclusions of the state agency.

On the floor of the Senate, Senator Williams, the chief sponsor of the bill, Committee Chairman, and floor manager responsible for the legislation in the Senate, emphasized the breadth of the review provisions at both the administrative and judicial levels:

“Any parent or guardian may present a complaint concerning *any matter* regarding the identification, evaluation, or educational placement of the child or the provision of a free appropriate public education to such child. In this regard, Mr. President, I would like to stress that the language referring to ‘free appropriate education’ has been adopted to make clear that a complaint may involve matters such as questions respecting a child’s individualized education program, questions of whether special education and related services are being provided without charge to the parents or guardians, questions relating to whether the services provided a child meet the standards of the State education agency, or *any other question* within the scope of the definition of ‘free appropriate public education.’ In addition, it should be clear that a parent or guardian may present a complaint alleging that a State or local education agency has refused to provide services to which a child may be entitled or alleging that the State or local educational agency has erroneously classified a child as a handicapped child when, in fact, that child is not a handicapped child.” 121 Cong.Rec. 37415 (1975) (emphasis added).

There is no doubt that the state agency itself must make substantive decisions. The legislative history reveals that the *218 courts are to consider, *de novo*, the same **3057 issues. Senator Williams explicitly stated that the civil action permitted under the Act encompasses all matters related to the original complaint. *Id.*, at 37416.

Thus, the Court’s limitations on judicial review have no support in either the language of the Act or the legislative history. Congress did not envision that inquiry would end if a showing is made that the child is receiving



passing marks and is advancing from grade to grade. Instead, it intended to permit a full and searching inquiry into any aspect of a handicapped child's education. The Court's standard, for example, would not permit a challenge to part of the IEP; the legislative history demonstrates beyond doubt that Congress intended such challenges to be possible, even if the plan as developed is reasonably calculated to give the child some benefits.

Parents can challenge the IEP for failing to supply the special education and related services needed by the individual handicapped child. That is what the Rowleys did. As the Government observes, “courts called upon to review the content of an IEP, in accordance with [20 U.S.C. \[§\] 1415\(e\)](#) inevitably are required to make a judgment, on the basis of the evidence presented, concerning whether the educational methods proposed by the local school district are ‘appropriate’ for the handicapped child involved.” Brief for United States as *Amicus Curiae* 13. The courts below, as they were required by the Act, did precisely that.

Under the judicial review provisions of the Act, neither the District Court nor the Court of Appeals was bound by the State's construction of what an “appropriate” education means in general or by what the state authorities considered to be an appropriate education for Amy Rowley. Because the standard of the courts below seems to me to reflect the congressional purpose and because their factual findings are not clearly erroneous, I respectfully dissent.

U.S.N.Y.,1982.

Board of Educ. of Hendrick Hudson Central School Dist., Westchester County v. Rowley
458 U.S. 176, 102 S.Ct. 3034, 73 L.Ed.2d 690, 5 Ed. Law Rep. 34, 1 A.D.D. 85

END OF DOCUMENT



Appendix H: Centennial School District v. Department of Education, 517 Pa. 540, 539 A.2d 785 (1988)

CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT, Appellant, v. COMMONWEALTH of Pennsylvania, DEPARTMENT OF EDUCATION and Robert C. Wilburn, Secretary of Education, Appellees

No. 60 E.D. Appeal Docket, 1987

Supreme Court of Pennsylvania

517 Pa. 540; 539 A.2d 785; 1988 Pa. LEXIS 95

**December 7, 1987, Argued
March 22, 1988, Decided**



Understanding Gifted Special Education Due Process Hearings A Guide for Parents

PRIOR HISTORY: [***1] Appeal from the Order entered January 31, 1986 in the Commonwealth Court of Pennsylvania at No. 1345 C.D. 1984, which affirmed the Order entered April 11, 1984 by the Secretary of Education as Special Education Opinion No. 229.

CASE SUMMARY:

PROCEDURAL POSTURE: Appellant school district appealed an order from the Commonwealth Court (Pennsylvania), affirming appellee secretary of education's order finding that appellant was required to set up specialized instruction for a gifted student, in addition to an enrichment program. Appellant claimed that the enrichment program was all that it was required to provide under *24 P.S. § 13-1372(1, 2)*.

OVERVIEW: Appellant school district devised an individualized education program (IEP) for a mentally gifted student. The enrichment program added certain materials to the regular curriculum, but did not provide accelerated instruction in any academic area. The student's parents claimed that the IEP was insufficient to address the child's need for accelerated instruction. A hearing officer determined that the student should be given specialized instruction in math and reading, in addition to the enrichment program. The secretary of education and a trial court affirmed the hearing officer. The school district appealed, claiming that appellant's enrichment program was all it was required to provide. The appellate court affirmed. The court found that under *24 P.S. § 13-1372(1, 2)*, appellant was required to provide accelerated instruction. Further, the secretary of education did not exceed his authority in promulgating regulations for gifted students. However, appellant was not required to provide instruction that "maximized" the student's ability to benefit from the IEP, such as providing individual tutors or an exclusive individual program beyond appellant's regular offerings.

OUTCOME: The court affirmed the trial court's judgment that a gifted student in appellant school district was entitled to specialized instruction. Because school districts were required to set up individualized education programs for mentally gifted students, the student was entitled to accelerated instruction. However, instruction did not have to be specialized to the extent it included individual tutors or an exclusive individual program.

COUNSEL: John Philip Diefenderfer, Newtown, for appellant.

Michael I. Levin, Harrisburg, for amicus -- Pennsylvania School Bds. Assoc.

Caryl Oberman, Philadelphia, for amicus -- Pennsylvania Assoc. for Gifted Educ.

John A. Alzamora, Mary Beth O'Hara Osborne, Harrisburg, for Department of Educ.

Thomas E. Coval, Willow Grove, David M. Donaldson, Deputy Atty. Gen., Andrew S. Gordon, Chief, Deputy Atty. Gen., for appellees.

JUDGES: Nix, C.J., and Larsen, Flaherty, McDermott, Zappala and Papadakos, JJ. Stout, J., did not participate in the consideration or decision of this matter.

OPINION BY: FLAHERTY

OPINION

[*542] [**786] OPINION OF THE COURT

The issue in this case is whether the Public School Code and regulations promulgated by the Department of Education require school districts to provide an individualized program of education for mentally gifted students, or whether school districts may lawfully elect to provide only generalized education programs for such students.



In 1981 Centennial [***2] School District (the school district) devised an individualized education program (IEP) for an exceptional student, Terry Auspitz, which recommended that Terry be included in the district's program for mentally gifted students. This program (an "enrichment" program) added certain materials to the regular curriculum, but did not attempt to provide accelerated instruction in particular academic areas. Terry's parents agreed that their son should participate in the enrichment program, but they asserted that the enrichment program was insufficient to address Terry's need for accelerated instruction in reading and mathematics. Because the parents and the school district could not agree on the IEP, the parents requested a due process hearing as provided for in 22 Pa. Code § 13.32.

[*543] The hearing officer concluded that Terry was a mentally gifted student whose academic abilities were advanced beyond his chronological age and that Terry required placement in an age-appropriate setting because his social and emotional development were not advanced beyond that typical of his chronological age. Further, he determined that Terry should be given specialized instruction in mathematics [***3] and reading in addition to inclusion in the "enrichment" program provided by the district. The hearing officer wrote:

Within the Commonwealth of Pennsylvania, mentally gifted students are considered to be educationally exceptional and therefore entitled to an individually prescribed educational program appropriate [**787] to their unique educational needs. The fact that most school districts meet this obligation by providing a part-time program of educational enrichment does not mean that such programming is appropriate for all mentally gifted students. In order to provide an appropriate program for an individual student, that student's IEP must be developed based on *his* current educational levels and needs regardless of administrative considerations. Further, unlike other educationally exceptional students, mentally gifted students may receive their education within the regular and/or special education programs of the school; this determination is to be based on the student's individual needs and IEP as well.

In the case of Terry, his current educational program is neither appropriate nor adequate in terms of his intellectual potential and levels of academic achievement reflected [***4] by considerable evaluation. His inconsistent classroom performance and distracting behaviors can be viewed as indications of boredom and cries for attention from a child whose intellectual development has far exceeded his emotional social [sic] development. In meeting his educational needs, this imbalance must be remembered. Therefore, as much of his educational program as possible should be provided in age-appropriate normalized settings. Although this will undoubtedly present administrative [*544] and instructional difficulties and challenges to the school staff, it is consistent with both Terry's needs and the legal mandate for education within the least restrictive environment.

On March 2, 1983, the school district filed exceptions to the hearing officer's decision with the Secretary of Education. In affirming the hearing officer, the Secretary wrote:

Simply because PDE has approved the district's program of enrichment for gifted students does not relieve the district of its duty under 24 P.S. § 13-1371, § 13-1372, 22 Pa.Code § 13.31, § 341.1, and § 341.15, to provide Terry with an appropriate academic education. Furthermore, the fact that PDE approves a district's [***5] special education program does not mean that the program is necessarily appropriate for all students within a particular exceptionality or that individual modifications may not be necessary to meet individual needs

A regular program with special instruction in accordance with a child's IEP specifying enrichment could be appropriate for certain exceptional children, however, such a gifted enrichment program without advanced instruction in reading and math is not appropriate for Terry. *See In re the Educational assignment of Eric L.*, Special Education Opinion # 119 (1978). Moreover, the district is specifically responsible for developing educational programs appropriate for the needs of *each* child, not of all children generally. *Shanberg v. Comm. Secretary of Ed.*, 57 Pa.Comwlth.Ct. 384, 426 A.2d 232, 233 (1981).



Secretary's Opinion at 10. The school district appealed this order to Commonwealth Court, which on January 31, 1986, affirmed the decision of the Secretary. Commonwealth Court stated that each school district is required to identify exceptional children and to develop an appropriate program of education suited to each [***6] child's individual needs. The court also observed that the Secretary of Education is responsible for determining what educational program is [545] suited for each individual child. 94 Pa.Comwlth.Ct. 530, 537, 503 A.2d 1090, 1094 (1986). The court added:

As for whether the IEP prescribed by the Secretary is in accordance with the law, we note that 22 Pa.Code § 341.15, which sets forth the elements of an IEP, requires that the IEP include a statement of the specific educational services that are to be provided to the child, including a "description of all special education and related services required to meet the unique needs of the child . . ." Moreover, 22 Pa.Code § 13.22 specifies that "[c]urricula for gifted and talented school-aged persons shall be conducted in accordance with standards established by the Secretary and shall include provisions for . . . (3) Amount of supervision and [788] special teaching, determined by the type and degree of mental abilities or talents." In approving an IEP for Terry, the Secretary acted in accordance with the above regulations and with the underlying requirement that exceptional children be given an appropriate [7] education, designed to address their individual needs.

Id. at 538, 503 A.2d at 1095.

We granted allocatur to determine whether the Secretary and Commonwealth Court exceeded the mandate of the Public School Code in requiring the school district to provide a gifted student with an individualized program of instruction which goes beyond that provided by the district's "enrichment" program.

The School Code defines "exceptional children" as follows:

(1) The term "exceptional children" shall mean children of school age who deviate from the average in physical, mental, emotional or social characteristics to such an extent that they require special educational facilities or services and shall include all children in detention homes.

24 P.S. § 13-1371(1). In 1973, the State Board of Education published its first proposed regulations on the subject of special education. Citing *section 13-1371*, the proposed regulation states:

[546] The provisions of this Chapter shall provide for the comprehensive education and special training necessary for pupils who are:

- (1) mentally impaired;
- (2) physically impaired; or
- (3) *gifted and talented*.

[8] 22 Pa.Code § 13.3, 3 Pa. Bulletin 1473 (1973). (Emphasis added).¹ Four years later, the General Assembly, which had theretofore made no reference to "gifted" students in the School Code, amended Section 13-1372(3) of the School Code to include the following language:

[T]he institution of special classes and programs at the secondary level for *exceptional children who are gifted and talented students* may be deferred until September 1978.

(Emphasis added.) The expressed and clear import of this new language is that by 1977, both the General Assembly and the Department of Education included gifted children within the meaning of "exceptional" children.



1 This section was not finally adopted by the State Board of Education, but the Board did adopt Section 13.1, 5 Pa. Bulletin 1542 (1975), which defines "exceptional persons" as "gifted and talented school-aged persons." This provision may be found currently at 22 Pa.Code § 13.1.

In general, the School Code requires special treatment for exceptional students: [***9]

(1) Standards for Proper Education and Training of Exceptional Children. The State Board of Education *shall adopt and prescribe standards and regulations for the proper education and training of all exceptional children by school districts or counties singly or jointly . . .*

(2) Plans for Education and Training Exceptional Children. Each intermediate unit, cooperatively with other intermediate units and with school districts shall prepare and submit to the Superintendent of Public Instruction, on or before the first day of August . . . for his approval or disapproval, *plans for the proper education and training of all exceptional children in accordance [*547] with the standards and regulations adopted by the State Board of Education.* Plans as provided for in this section shall be subject to revision from time to time as conditions warrant, subject to the approval of the Superintendent of Public Instruction.

24 P.S. § 13-1372(1, 2). (Emphasis added.)²

2 The superintendent of every school district is required to identify "every exceptional child" within his district and report that information to the proper intermediate unit. 24 P.S. § 13-1371(2).

[***10] In sum, *Section 13-1372* requires that the State Board of Education promulgate standards and regulations for the education of all exceptional children, and that each intermediate [*789] unit and each school district within those units cooperate to prepare a plan for the education of all exceptional children, subject to the approval of the Superintendent of Public Instruction. In response to this statutory mandate, the State Board of Education has prescribed the following pertinent definitions and regulations:

22 [Pa.Code] § 341.1. Definitions.

(iv) *Mentally gifted.* -- Outstanding intellectual and creative ability the development of which requires special activities or services not ordinarily provided in the regular program. Persons shall be assigned to a program for the gifted when they have an IQ of 130 or higher. A limited number of persons with IQ scores lower than 130 may be admitted to gifted programs when other educational criteria in the profile of the person strongly indicate gifted ability.

22 [Pa.Code] § 341.15. Individualized Education Program.

The Individualized Education Program for each person assigned to special education programs or services shall include: [***11]

- (1) A statement of the present level of educational performance of the person.
- (2) A statement of annual goals which describes the expected behaviors to be achieved through the implementation [*548] of the Individualized Education Program of the person.
- (3) A statement of short-term instructional objectives.
- (4) A statement of specific educational services to be provided to the child, including a description of special education and related services required to meet the unique needs of the child, a special instructional media and materials to be provided, and the type of physical education program in which the child will participate.
- (5) A description of the extent to which the child will be able to participate in regular education programs.



(6) The projected date for initiation and the anticipated duration of services.

(7) Appropriate objective criteria, evaluation procedures and schedules for determining, on at least an annual basis, whether the instructional objectives are being achieved.

[22 Pa.Code] § 13.1. Definitions.

The following words and terms, when used in this chapter, have the following meanings, unless the context clearly indicates otherwise:

* * *

Appropriate [***12] *program* -- A program of education or training for exceptional school-aged persons which meets their individual needs as agreed to by a parent, school district or intermediate unit personnel; or as ordered by a hearing officer; or upon appeal as ordered by the Secretary of Education.

Exceptional persons -- Persons of school-age who deviate from the average in physical, mental, emotional or social characteristics to such an extent that they require special educational programs, facilities or services and shall include school-aged persons in detention homes and State schools and hospitals.

(i)

(ii) *Gifted and talented school-aged persons* -- Those who, in accordance with criteria prescribed in standards developed by the Secretary of Education, have outstanding [*549] intellectual or creative ability, the development of which requires special activities or services not ordinarily provided to regular children by local educational agencies.

* * *

Special education -- A basic education program adjusted to meet the educational needs of exceptional persons.

These regulatory provisions can be fairly summarized as requiring that mentally gifted students be [***13] provided with a plan of individualized instruction (an "appropriate program") designed to meet "the unique needs of the child."

At the root of this case is the school district's concern about costs. The district asks whether it is required to become a Harvard or a Princeton for those who have IQ's over 130, and the School Boards Association, arguing as amicus curiae, asserts that a "subjective standard" will lead to [**790] "bankruptcy of the public school system." Both the district and the association assert that what is required of school districts is only that they provide an approved program for exceptional children which "to some degree" addresses the needs of exceptional children. They argue that the district's "enrichment" program, which has been approved by the Secretary, is all they are required to provide. The "enrichment" program, which consists of materials added to the regular curriculum available to exceptional students, augments the regular curriculum, but does not attempt to address the needs of individual students.

Our response to these claims need go no further than reference to the Public School Code and the regulations. It is plain that *section 13-1372(1)* of the Code [***14] requires that the State Board of Education "adopt and prescribe standards and regulations for the proper education . . . of all exceptional children," and it is equally plain that *section 13-1372(2)* requires the school districts to participate in the planning of educational programs for these children, *in accordance with the Superintendent's standards and regulations* and subject to his approval. See *24 P.S. § 13-1372(2)*, supra. It is also abundantly clear that the State [*550] Board has promulgated standards and regulations



which require the production of an individualized education program for each exceptional child, including "gifted and talented" children, as defined by the General Assembly. *22 Pa.Code § 341.15*, supra.

In light of this, the district's claim that individualized planning and education for gifted exceptional children is not required is unfounded. The district's related claim that its *section 13-1372(2)* approved plan, which consists of "enrichment" of the regular curriculum, is all that it is required to do with respect to gifted students, is equally unfounded. The General Assembly has authorized the State Board of Education to define and regulate special [***15] education for exceptional children in Pennsylvania. This the State Board has done, and it has done it in such a way as to require *individualized*, as well as group planning and education of exceptional children. The district is correct in recognizing that it is required to formulate a plan pursuant to *section 13-1372(2)* to educate exceptional youngsters, that this plan must be approved by the Secretary, and that the plan may be general in nature, as is the district's "enrichment" program. But it does not follow from the school district's completion of this threshold requirement that it is excused from completing the other requirements found in the regulations concerning exceptional children.

Among these other requirements are that the school district identify all children who may be in need of special education programs or services, *22 Pa.Code § 341.12*; that the district evaluate such students, *id.* § 341.13; that the district prepare an individualized education program for each child assigned to the special education program, *id.* at 341.15; that the district conduct a conference with the parent concerning the IEP, *id.* § 341.16; that the IEP be developed jointly by [***16] parents and school personnel, and if parents disagree with the program, they may request a hearing before a hearing officer, who will issue an opinion and order defining the assignment, program and services to be provided the child. *Id.* at § 341.18, § 13.1.

[*551] Since the State Board of Education has been mandated to promulgate regulations concerning the "proper education and training of all exceptional children," and since these regulations have been duly promulgated and instruct the school districts as indicated above, it is difficult to understand the school district's claim that the districts are required to do no more than provide the generalized "enrichment" programs mentioned earlier.

It is true that the School Code itself does not identify individualized education programs and does not speak, as do the regulations, of the unique needs of each exceptional child. That is to be expected, for when the General Assembly delegated to the State Board of Education the duty of providing the details of "proper education and training of all exceptional children," *24 P.S. § 13-1372(1)*, it had no need to be more specific.

[**791] The district argues, however, that even if the State Board [***17] is empowered to promulgate regulations, these particular regulations exceed its authority. This argument also is without merit. The General Assembly required the State Board to promulgate regulations concerning the proper education and training of exceptional children. That is exactly what these regulations treat, and they are not, therefore, beyond the authority granted by the General Assembly.

Finally, with respect to cost, we not only sympathize, but agree with the district and the Pennsylvania School Boards Association that the district's responsibility *is not without limits*. The instruction to be offered need not "maximize" the student's ability to benefit from an individualized program. However, the idea that the school district's obligation is limited is not new and does not compel the district's conclusions in this case. In *Scott S. v. Department of Education*, 99 Pa.Comwlth.Ct. 57, 512 A.2d 790 (1986), limits were set on the amount of individualized mathematics instruction which a school district could be required to provide to a gifted student. After observing that a senior high curriculum must offer three years of [*552] mathematics [***18] acceptable for college admission, that it *may* offer advanced placement courses, and *may* allow part-time college enrollment, the Secretary wrote:

Although gifted exceptional students are entitled to a program of special education which will address the student's individual needs, the district's responsibility to provide such is not without bounds Accordingly, Scott is entitled to a basic education program adjusted to meet his needs. The curriculum of this program is to be adapted from the regular basic education curriculum. In this regard, the district witnesses testified on the hearing record that Scott had exhausted the district's curricular offerings in mathematics In other words, we may assume that Scott has exhausted the



district's curricular mathematics offerings in both regular and special education and has completed the mathematics courses required for graduation. Yet, Scott's parents wish him to be provided with more.

We can find neither legal nor factual basis for this. The district has addressed Scott's giftedness, specifically in the area of mathematics for several years. This has been accomplished by accelerating Scott to higher level classes [***19] or by providing independent study In this manner the district addressed Scott's individual needs for mathematics instruction. However, to provide Scott with yet another mathematics course at this point in time *would go beyond adaptation of the district's legally required mathematics curriculum* and . . . constitute provision of more than an appropriate program of special education to Scott.

In Re the Educational Placement of Scott S. (Special Education Opinion No. 250), p. 5, *aff'd Scott S. v. Dept. of Education*, 99 Comwlth Ct. 57, 512 A.2d 790 (1986).

The rule which we extrapolate and endorse from this well-reasoned opinion of the Secretary is that a school district may not be required to become a Harvard or a Princeton to all who have IQ's over 130. We agree that "gifted" students are entitled to special programs as a [*553] group to bring their talents to as complete a fruition as our facilities allow. We do not, however, construe the legislation as authorizing individual tutors or exclusive individual programs outside or beyond the district's existing, regular and special education curricular offerings.

Because we can [***20] find no legal basis to determine that the Secretary has exceeded his authority in promulgating regulations pertinent to this case and because the regulations clearly require that school districts create individualized educational plans for exceptional students (which may or may not involve accelerated instruction) as well as create a general plan to educate exceptional students, we affirm the order of Commonwealth Court.³

3 The school district's additional claim that the Secretary improperly limited his review of the hearing officer's report is also without merit. As observed by Commonwealth Court, although the Secretary was free to make his own findings, the record indicates that he adopted the findings of the hearing officer after an independent examination of the record led him to concur with the reasoning and findings of the hearing officer.

Affirmed.



**Appendix I: B.C. v. Penn Manor School District, 906 A.2d 642
(Pa. Commw. 2006**

**B.C., by and through his parent and natural guardian, J.C., Petitioner v. Penn
Manor School District, Respondent**

No. 1150 C.D. 2005

COMMONWEALTH COURT OF PENNSYLVANIA

906 A.2d 642; 2006 Pa. Commw. LEXIS 445

**April 3, 2006, Argued
August 15, 2006, Decided
August 15, 2006, Filed**



PRIOR HISTORY: [**1] Appealed from No. 1604. State Agency Special Education Due Process Appeals Review Panel.

CASE SUMMARY:

PROCEDURAL POSTURE: Petitioner student, by and through his parent and natural guardian, appealed the determination of the Special Education Due Process Appeals Review Panel (Pennsylvania), which affirmed a hearing officer's award of one hour of compensatory education for every school day of the 2003-04 school year and no compensatory education for the 2002-03 or 2004-05 school years.

OVERVIEW: On appeal, the student argued that the Panel erred in applying a one-year statute of limitations period to his challenge of the 2002-03 gifted individualized education programs (GIEP) and in awarding an insufficient amount of compensatory education for the 2003-04 and 2004-05 school years. Several of the student's arguments were waived because he failed to argue them below and had not identified in his brief where the issues were properly raised and preserved below. Because the student failed to demonstrate why he was delayed in requesting a due process hearing or why his delay should be excused, the appellate court held that the Panel appropriately applied a one-year statute of limitations period. Finally, the appellate court concluded that where there was a finding that a student was denied a free and appropriate public education (FAPE) and the Panel determined that an award of compensatory education was appropriate, the student was entitled to an amount of compensatory education reasonably calculated to bring him to the position that he would have occupied but for the school district's failure to provide a FAPE. Thus, the award to the student was appropriate.

OUTCOME: The Panel's order was affirmed.

COUNSEL: James R. Clark, Lancaster, for petitioner.

Kim R. Smith, Lancaster, for respondent.

JUDGES: BEFORE: HONORABLE BERNARD L. MCGINLEY, Judge, HONORABLE BONNIE BRIGANCE LEADBETTER, Judge, HONORABLE JOSEPH F. McCLOSKEY, Senior Judge. OPINION BY JUDGE LEADBETTER.

OPINION BY: BONNIE BRIGANCE LEADBETTER

OPINION

[*643] OPINION BY JUDGE LEADBETTER

B.C. (Student), by and through his parent and natural guardian, J.C., appeals from a determination of the Special Education [*644] Due Process Appeals Review Panel (Panel), which affirmed a hearing officer's award of one hour of compensatory education for every school day of the 2003-04 school year and no compensatory education for the 2002-03 or 2004-05 school years. We affirm.

Student, who began kindergarten in the Penn Manor School District (District) during the 2000-01 school year, was identified as a gifted student during the 2001-02 school year.¹ On November 12, 2002, the District issued a report concluding that Student was eligible for the District's Discover program, which is a "pull-out," theme-based enrichment program for gifted students.² As such, the District [**2] created a gifted individualized education program (GIEP)³ for Student for the 2002-03 school year. When it was finalized, Student's parents (Parents) signed the Notice of Recommended Assignment (NORA) agreeing to the services contained therein. The 2002-03 GIEP essentially tracked the Discover program's themes, but provided little individualized education. *See* R.R. 1051a-57a.



1 Student is unquestionably a gifted student with a full scale IQ of 144, a verbal IQ of 148 and a performance IQ of 132. Generally, to qualify for gifted services in Pennsylvania, a student must have an IQ at or above 130. *See 22 Pa. Code § 16.21(d)*.

2 Essentially, the Discover program involves topic-oriented instruction, in which students are encouraged to pick an individual project involving one or more school subject areas within the Discover program's topics.

3 Title 22, Chapter 16 of the Pennsylvania Code sets forth the extensive requirements for drafting GIEPs, including identifying the gifted child, completing a multi-disciplinary evaluation and reevaluation, and writing a GIEP with the student, the student's parents, and representatives from the school District. *See 22 Pa. Code § 16.21-16.32*. The GIEP is to include: 1) a statement of the student's present levels of educational performance; 2) annual goals and short-term learning outcomes which are responsive to the student's needs as identified in the evaluation report; 3) a statement of the specially designed instruction and support services that the student will receive; 4) projected dates for initiation and duration of the GIEP services; 5) objective criteria, assessment procedures, and timelines to determine whether the student has met the goals and learning outcomes; and 6) the names of the persons who helped draft the GIEP and the date of the meeting. *22 Pa. Code § 16.32(e)*.

[**3] On September 4, 2003, the 2003-04 GIEP was finalized with Parents signing the NORA. The 2003-04 GIEP outlined that Student would receive advanced math instruction, but did not provide any other individualized instruction. Once again, the short-term learning outcomes and goals tracked the three topics presented within the Discover program that year (Student participated in Discover during the 2003-04 school year for approximately 1.5 to 2.0 hours per school day out of a "six-school-day cycle"). Additionally, as per the 2003-04 GIEP, Student received accelerated math instruction in a small group for fifty minutes per day.

Because they believed Student was not receiving sufficiently individualized instruction, on March 8, 2004, Parents requested that Student be re-evaluated, which the District did between May 20 and 21, 2004. Additionally, Parents twice had Student independently evaluated.⁴ Subsequently, Student rejected the proposed 2004-05 GIEP and ensuing revisions thereto. Eventually, on August 5, 2004 [*645] Parents requested a due process hearing.⁵

4 Parents shared these independent evaluations with the District. Additionally, Student presented the testimony of the independent evaluators and their reports to the hearing officer. Student's experts concluded that Student was gifted in all areas of instruction, especially math, with the exception of art.

[**4]

5 Following Parents' request for a due process hearing, the Parents further rejected four additional revisions to the 2004-05 GIEP.

Between December 6, 2004, and February 15, 2005, the requested due process hearing took place with Student and the District presenting extensive testimony, including that from Student's teachers, persons who evaluated Student, Student, and his father, and copious documents, including Student's GIEPs (from 2002 through 2005), various evaluations performed upon Student, Student's schoolwork, correspondence between the District and Student's Parents, and Student's academic record. On April 2, 2005, the hearing officer filed extensive findings of fact and conclusions of law. Although Student presented evidence on the 2002-03 GIEP, the hearing officer held that any claim regarding the 2002-03 GIEP was time-barred under *Montour School District v. S.T., 805 A.2d 29 (Pa. Cmwlth. 2002) (Montour)* (establishing that the statute of limitations in compensatory education cases begins one year from the date that a due process hearing is requested, unless the [**5] party proves that mitigating circumstances existed, which extends the statute of limitations to two years prior to the due process hearing request) and *Carlynton School District v. D.S., 815 A.2d 666 (Pa. Cmwlth. 2003) (Carlynton)* (applying *Montour* to compensatory education claims involving gifted students). Further, the hearing officer held that Student failed to prove that mitigating circumstances existed to excuse his delay in requesting a due process hearing.

On Student's claim for compensatory education for the 2003-04 school year, the hearing officer found that the 2003-04 GIEP was procedurally deficient in that it failed to sufficiently describe Student's present abilities or needs, did not contain necessary test scores or descriptive goals, and generally failed to provide student with individualized instruction. As for the 2004-05 GIEP, the hearing officer found that, although it did not contain short-term learning outcomes or a sufficient spelling program, it was a vast improvement over the 2003-04 GIEP, as it provided for further testing of Student and individualized instruction in virtually every subject area. Based on



her findings, the hearing officer concluded that Student was denied a free and appropriate public education (FAPE) for the 2003-04 school year and ordered one hour of compensatory education for every school day of the 2003-04 school year. In contrast, the hearing officer found that Student received a FAPE for the 2004-05 school year and, thus, did not award any compensatory education for that school year. However, she did order the District to draft the 2004-05 GIEP with short-term learning outcomes.

Both Student and the District filed exceptions to the hearing officer's decision with the Panel.⁶ The Panel conducted an independent review of the evidence, assessed credibility, and weighed the evidence. *See York Suburban Sch. Dist. v. S.P.*, 872 A.2d 1285 (Pa. Cmwlth. 2005) (establishing that the Panel is the fact-finding body and that the Panel must make an independent review of the evidence). First, the Panel rejected Student's exception that the statute of limitations was actually two years. The Panel held that the recently reauthorized Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 20 U.S.C. §§ 1400, *et seq.*, was inapplicable to gifted students⁷ and that, in any case, the provisions that Student pointed to in support were not effective until July 1, 2005. Further, the Panel held that Student failed to present any mitigating circumstances to excuse his delay in requesting a due process hearing, and thus, the appropriate statute of limitations under *Montour* and *Carlynton* was one year.

6 Student's exceptions and brief in support of those exceptions were not included with the original record. Although the District filed a supplemental reproduced record containing a copy of Student's brief, it was not considered by this court as it is not part of the original record. Thus, any discussion that follows regarding Student's exceptions is taken from the Panel's characterization of those exceptions.

7 *See Saucon Valley Sch. Dist. v. Jason O.*, 785 A.2d 1069, 1075 n.10 (Pa. Cmwlth. 2001) (determining that IDEA, which is a federal statute that applies only to students receiving special education, is not applicable to gifted students, to whom Title 22, Chapter 16 of the Pennsylvania Code applies).

Second, the Panel rejected Student's exception to the amount of compensatory education awarded, finding that Student was not entitled to a full day of compensatory education for each day of the 2003-04 school year, nor was he automatically entitled to compensatory education for the 2004-05 school year by virtue of the presence of minor deficiencies in the 2004-05 GIEP. Specifically, the Panel held:

On the other hand, for the 2004-05 school year, we conclude that the ultimately revised GIEP met the applicable standard. Unlike its predecessors for the previous years, it was not of the cookie-cutter variety. More specifically, it included, *inter alia*, the following features reasonably responsive to the Student's individual, gifted needs: 1) specific present educational levels; 2) acceleration and enrichment in math and reading, [sic] 3) coordinated enrichment activities and social studies and science; and 4) sufficient support services.

Overall, we conclude that the hearing officer's calculus of one hour for each day in the 2003-04 school year, i.e., a total compensatory education award of approximately 180 hours, was within equitable bounds. For the relevant year, the amount of gifted support approximated an average of slightly more than an hour per day. This amount does not include the differentiated instruction amounting to specially designed education beyond the pull-out program. Yet, various equitable reductions, including but not limited to absences, [and services received in both the Discover program and small math group] serve as counterbalancing offsets. Moreover, although the relevant GIEP for our determination usually is the latest one proposed before the Parents filed for the hearing, in this case the period of time that the District took to improve the 7/4/04 GIEP to the point of being appropriate effectively serves as a reasonable measure of the reduction for reasonable rectification. Thus, although she did not specifically explain her process of calculation, the hearing officer's bottom line in terms of the amount of compensatory education passes equitable muster as a reasonably tailored level of relief in this case.

In re: The Educational Assignment of B.C., (Special Educ. Op. No. 1604, filed May 6, 2005), slip op. at 8-9 (footnotes omitted). As such, the Panel affirmed the hearing officer's award of one hour of compensatory education for every school day of the 2003-04 school year, but modified the part of the hearing officer's order that required the District to draft short-term learning outcomes for the 2004-05 GIEP to be merely a strong suggestion.⁸



8 The Panel also rejected the District's exception that it had proved the 2003-04 GIEP was sufficiently individualized.

[*647] Student appealed to this court arguing that the Panel erred in applying a one-year statute of limitations period to his challenge of the 2002-03 GIEP because: 1) the Panel should have applied a six-year statute of limitations period under *Section 5527* of the Judicial Code, 42 Pa. C.S. § 5527; ⁹ 2) the minority tolling provisions of *Section 5533(b)* of the Judicial Code, 42 Pa.C.S. § 5533(b), should have tolled the statute of limitations period until student reached eighteen years of age; 3) *Montour* and *Carlynton* were wrongly decided and this court should adopt an "equitable statute of limitations, [*11]" which runs from the time the District knows or should have known that the GIEP is deficient; and 4) the Panel erred in failing to find that mitigating circumstances existed. Student also argues that the Panel erred in awarding an insufficient amount of compensatory education for the 2003-04 and 2004-05 school years.

9 The Judicial Code has been recently amended by the Act of May 4, 2006 (Act No. 34 of 2006), to take effect in 120 days. The amendment is of no moment in this particular case.

Issue Preservation

Before reaching the merits of the issues that Student has appealed, we first address whether Student has properly preserved all of the issues he is now raising for our review. It is well-settled that, where an issue was not raised below, it will not be addressed for the first time in this court. *Pa. R.A.P. 1551*. To preserve an issue for review, a litigant must make a timely objection at the hearing before the lower tribunal. *In re: Condemnation by the County of Allegheny of a Certain Parcel of Land in Robinson Twp.*, 453 A.2d 744, 745, 70 Pa. ommw. 642 (Pa. Cmwlth. 1982). Furthermore, the Rules of Appellate Procedure require a petitioner to set forth the location in the record where the issue was raised and preserved below. *See Pa. R.A.P. 2117(c)* (requiring the statement of the case in an appellate brief to identify the place and manner in which the issues were raised and preserved below); and *Pa. R.A.P. 2119(e)* (requiring argument in an appellate brief to identify where the issues were raised below).

Our review of the record indicates that Student failed to argue, before either administrative body, that: 1) a six-year statute of limitations applied; 2) the minority tolling provision of the Judicial Code tolled the statute of limitations; or, 3) this court should disregard *Montour* and *Carlynton* and adopt an "equitable statute of limitations." Moreover, Student has not identified anywhere in his brief where these issues were properly raised and preserved below. Although Student argues that he is merely "refining" issues that he did raise below, we disagree. Instead, Student [*13] is raising entirely new arguments regarding the applicable statute of limitations, all of which he never identified or raised before either lower body. What the record reveals is that Student has consistently changed his legal theory regarding the statute of limitations in an attempt to find a meritorious argument.¹⁰ Thus, [*648] these arguments are waived. Even if that were not the case, we are bound by the decisions in *Montour* and *Carlynton* and decline Student's invitation to re-evaluate these precedents.

10 In his reply brief, Student argues that these issues are not waived because: 1) he has merely refined his argument; 2) equity requires that this court apply a longer statute of limitations period; and 3) the District's citation in its brief to the Local Agency Law, 2 Pa. C.S. § 753(a), rather than to the Administrative Agency Law, results in waiver. These contentions are all unmeritorious. First, as discussed above, Student has not merely refined his argument but, instead, is raising new legal arguments for the first time before this court. Second, in *Montour*, this court considered the equitable nature of a compensatory education award and chose to limit the statute of limitations to one year. *Id. at 37 and 40*. Finally, assuming *arguendo* that an incorrect citation alone can be the basis for waiver, this court may raise the issue of waiver *sua sponte*. Furthermore, although the District incorrectly cited to the Local Agency Law instead of to *Section 703(a)* of the Administrative Agency Law, 2 Pa. C.S. § 703, District's subsequent citations to case law discussing waiver under *Section 703(a)*, such as *Wing v. Unemployment Compensation Board of Review*, 496 Pa. 113, 436 A.2d 179 (1981) and *Sharp Equipment Co. v. Unemployment Compensation Board of Review*, 808 A.2d 1019 (Pa. Cmwlth. 2002), sufficiently asserted waiver.

[*14] Statute of Limitations

We next turn to Student's argument that he proved mitigating circumstances existed to extend the limitations period beyond one year.¹¹ *Montour* and *Carlynton* established that, in compensatory education cases, a party can



only challenge the GIEPs falling within the one-year period prior to the request for a due process hearing, unless that party proves that mitigating circumstances existed to excuse their delay in requesting a due process hearing. Then, the statute of limitations period is extended to two years prior to the request for a due process hearing. Although this court has not identified standards to measure "mitigating circumstances,"¹² we need not do so here because Student has failed to present any relevant facts demonstrating why he was delayed in requesting a due process hearing, much less why we should excuse this delay.¹³ Thus, in light of Student's failure to articulate any relevant facts demonstrating why he was delayed in requesting a due process hearing or why his delay should be excused, we hold that the Panel's finding that Student failed to prove mitigating circumstances is supported by substantial evidence. [**15] We therefore conclude that the panel appropriately applied a one-year statute of limitations period and, consequently, only considered Student's claims regarding the 2003-04 and 2004-05 GIEPs.

11 Our review is limited to determining whether the panel's decision was supported by substantial evidence or whether the panel committed an error of law. *Brownsville Area Sch. Dist. v. Student X*, 729 A.2d 198 (Pa. Cmwlth. 1999).

12 Student requests that we define "mitigating circumstances" broadly in compensatory education cases yet has not suggested a definition for this court to adopt.

13 As proof of mitigating circumstances, Student points to the District's policy of screening all second grade students for giftedness, but not before that unless a teacher identifies a kindergartner or first grader as exceptional. We agree with the Panel that Student fails to explain how this policy delayed his request for a due process hearing before August 2004. Additionally, Student received gifted services in his second grade year (2002-03) but is attempting to contest the adequacy of those services.

[**16] Award of Compensatory Education

We next turn to Student's argument that the Panel erred in awarding him only one hour per school day of compensatory education for the 2003-04 year and no compensatory education for the 2004-05 year. This court has recognized that when a gifted child is denied a FAPE, compensatory education may be an appropriate remedy for the District's failure to provide an adequate educational program for the gifted child. *Brownsville Area Sch. Dist. v. Student X*, 729 A.2d 198 (Pa. Cmwlth. 1999). "[Compensatory education's] purpose is to fairly compensate the student whose school district has failed to provide the student a free appropriate public education." *Id.* at 200. However, in the context of gifted education, the compensatory education award must be limited to the [*649] education available within the curriculum of the school district. *Id.*¹⁴ Although this court has determined that compensatory education is an appropriate remedy once the Panel finds that the student was denied a FAPE, we have found no decision setting out a standard for determining the amount of compensatory education to be awarded to a student. [**17]

14 In so holding, the *Brownsville* decision relied upon the Supreme Court's decision in *Centennial School District v. Department of Education*, 517 Pa. 540, 539 A.2d 785 (1988). In *Centennial School District*, the Supreme Court stated:

a school district may not be required to become a Harvard or a Princeton to all who have IQ's over 130. We agree that "gifted" students are entitled to special programs as a group to bring their talents to as complete a fruition as our facilities allow. We do not, however, construe the legislation as authorizing individual tutors or exclusive individual programs outside or beyond the district's existing, regular and special education curricular offerings.

Id. at 552-53, 539 A.2d at 791.

However, three federal circuits have addressed the appropriate standard for determining the amount of compensatory education to be awarded under IDEA.¹⁵ Although these cases involve a different statutory scheme that applies only to students [**18] receiving special education services (and not to gifted children), we find the discussions contained therein instructive. Additionally, in their briefs, the parties have suggested standards that they urge this court to adopt in reviewing whether a compensatory education award is appropriate. Student's suggested standard, "[c]ompensatory education equal to the period of the deprivation," is similar to the standard adopted by the United States Court of Appeals for the Third Circuit. Petitioner's Brief at 33. In *M.C. v. Central*



Regional School District, 81 F.3d 389 (3d Cir. 1996), the court held that "a disabled child is entitled to compensatory education for a period equal to the period of deprivation." *Id.* at 397. See also *Westendorp v. Indep. Sch. Dist.*, 35 F. Supp. 2d 1134, 1137 (D. Minn. 1998) (presuming that an award equal to the period of deprivation is the appropriate remedy based on balancing the equities and facts in the case). As such, in cases under the IDEA, the Third Circuit awards compensatory education solely on the basis of the actual time a student was deprived of a FAPE, without further analysis.

15 We have found no decisions from the courts of appeal of the other nine circuits.

[**19] In contrast, the school district suggests a less rigid approach, stating that an award of compensatory education is an equitable, and, hence, discretionary, award, which gives the Panel flexibility in tailoring a particularized award based on the facts and equities of the case. The school district's emphasis on the equitable and discretionary aspect of a compensatory education award is similar to the standard adopted in the Ninth and District of Columbia Circuits. Specifically, when looking at whether a compensatory education award was appropriate, the Ninth Circuit rejected the argument that the student was "ipso facto" entitled to an amount of compensatory education equal to the time of deprivation "without any further analysis." *Parents of Student W v. Puyallup Sch. Dist.*, No. 3, 31 F.3d 1489, 1497 (9th Cir. 1994). The court stated, "[t]here is no obligation to provide a day-for-day compensation for time missed. Appropriate relief is relief designed to ensure that the student is appropriately educated within the meaning of the IDEA." *Id.* In determining the appropriate amount of compensatory education to be awarded, that court focused on compensatory education's [**20] equitable nature and held that the district court should apply a fact-specific analysis [**650] that focused on both parties' conduct and what the student had or had not achieved. *Id.*

Similarly, in *Reid v. District of Columbia*, 365 U.S. App. D.C. 234, 401 F.3d 516 (D.C. Cir. 2005), the court rejected a "mechanical calculation" of a compensatory education award. *Id.* at 518. Specifically, the court stated:

"[C]ompensatory education is not a contractual remedy, but an equitable remedy, part of the court's resources in crafting 'appropriate relief.'" More specifically, as the Fourth Circuit has explained, "[c]ompensatory education involves discretionary, prospective, injunctive relief crafted by a court to remedy what might be termed an educational deficit created by an educational agency's failure over a given period of time to provide a FAPE to a student." Overlooking this equitable focus, the [student's] hour-for-hour formula in effect treats compensatory education as a form of damages -- a charge on school districts equal to expenditures they should have made previously. Yet "[t]he essence of equity jurisdiction" is "to do equity and to mould each [**21] decree to the necessities of the particular case. Flexibility rather than rigidity has distinguished it."

Id. at 523-24 (citations omitted). The court agreed with the Ninth's Circuit's rejection of "day-for-day compensation for time missed," stating:

We think it would be highly incongruous if this qualitative focus on individual needs gave way to mechanical hour-counting when past rather than current violations of the FAPE standard were at issue. Accordingly, just as IEPs focus on disabled students' individual needs, so must awards compensating past violations rely on individualized assessments.

Unlike the [student's] one-for-one standard, this flexible approach will produce different results in different cases depending on the child's needs. Some students may require only short, intensive compensatory programs targeted at specific problems or deficiencies. Others may need extended programs, perhaps even exceeding hour-for-hour replacement of time spent without FAPE. In addition, courts have recognized that in setting the award, equity may sometimes require consideration of the parties' conduct, such as when the school system reasonably "require[s] some time [**22] to respond to a complex problem," or when parents' refusal to accept special education delays the child's receipt of appropriate services. In every case, however, the inquiry must be fact-specific and, to accomplish IDEA's purposes, the ultimate award must be reasonably calculated to provide the educational benefits that likely would have accrued from special education services the school district should have supplied in the first place.



Id. at 524 (citations omitted). In conclusion, the court held that the student was not entitled "to an amount of such [compensatory education as] predetermined by a cookie-cutter formula, but rather to an informed and reasonable exercise of discretion regarding what services he needs to elevate him to the position he would have occupied absent the school district's failures." *Id. at 527*.

We find the Ninth and District Columbia's Circuits' standard more persuasive and workable than that of the Third Circuit, as it tailors the equitable award of compensatory education to the particular student's needs, which a one-for-one standard fails to do. Hence, we reject Student's proposed hour-for-hour standard. Rather, we hold that where there [**23] is a finding that a student is denied a FAPE and the Panel determines that an award of compensatory [*651] education is appropriate, the student is entitled to an amount of compensatory education reasonably calculated to bring him to the position that he would have occupied but for the school district's failure to provide a FAPE. As noted by the District of Columbia Circuit, doing so may require awarding the student more compensatory education time than a one-for-one standard would, while in other situations the student may be entitled to little or no compensatory education, because (s)he has progressed appropriately despite having been denied a FAPE.

Of course, since we have not previously set out this standard in these terms, it was not specifically addressed by the hearing officer or the Panel, as should occur in future cases. Nonetheless, given the evidence in this case, the special expertise of hearing officers and the Panel in such matters and the equitable nature of compensatory awards, we are satisfied that the award here was not an abuse of discretion, but was appropriate under the circumstances.

Accordingly, we affirm.

BONNIE BRIGANCE LEADBETTER, Judge

ORDER

[**24] AND NOW, this 15th day of August, 2006, the order of the Special Education Due Process Appeals Panel in the above captioned matter is hereby AFFIRMED.

BONNIE BRIGANCE LEADBETTER, Judge



Appendix J: Generally Applicable Pre-Hearing Directions

Generally Applicable Pre-Hearing Directions



Appendix K: Sample Due Process Complaint

OUTLINE OF A “DUE PROCESS COMPLAINT”

Date

Method of Correspondence (Example: “*Via e-mail and first class mail*”)

Name of School District’s Attorney or Special Education Director
Address

Re: Student Name / School District Name – Due Process Complaint Form

Dear [School District’s Attorney or Special Education Director],

Paragraph 1: Introduce yourself and your child. Let the reader know that this is a Due Process Complaint, and provide the basic information required in the complaint.

Example: My name is [name of parent]. This is a Due Process Complaint filed on behalf of my [son or daughter, first and last name,] against the [name of school district]. We reside at [address]. [Child’s name]’s date of birth is [date].

Paragraph 2: Provide relevant information about your child’s eligibility as a gifted student. Write a brief statement (one or two sentences) about why you are filing the complaint.

You may want to use the following questions as a guide for this paragraph:

- Is the student identified as gifted? If yes, when were they identified?
 - What is the date on the first Multidisciplinary Evaluation Report and your child’s first GIEP?
- What type of gifted education services do they currently receive from the school district?
- Why are you filing this complaint at this time? What made you decide to file it at this time?

Nature of the Problem

This section should describe the problem that led you to file a Due Process Complaint. It should describe the problem in enough detail that the school district will understand why you are filing the complaint and what issues you will be asking the Hearing Officer to decide. In this section, you may want to describe why you believe the school district is violating the law, or why your position is legally correct. You may need to educate yourself on the law in order to write this section of the complaint. You will find resources on how to learn about the law in this manual, as well as phone numbers for organizations you can call for assistance in understanding the law.



Proposed Resolution

This section should describe what you are asking the District to do in order to resolve your complaint.

For example, depending on the issues involved in your complaint, you may be asking the District to do one or more of the following in order to resolve your complaint:

- Provide a reevaluation for your child
- Provide an appropriate placement for your child
- Provide the services necessary for your child to receive an appropriate education Provide educational services to make up for services they have failed to provide in the past

Note: Your proposed resolution may include other suggestions other than any of the examples listed above. Your proposed resolution should be specific to your complaint, and should describe what you want the District to do to resolve your complaint.

Sincerely,
Your Name



SAMPLE “DUE PROCESS COMPLAINT”

May 20, 2015

Via e-mail and first class mail

Mr. Joseph Smith, Esquire
Smith & Lucas
555 Main St.
Hometown, PA 15155

Re: Jane Doe / Hometown School District – Due Process Complaint

Dear Mr. Smith,

My name is Joanna Doe. This is a Due Process Complaint filed on behalf of my daughter, Jane Doe, against the Hometown School District. We reside at 123 Main Street Hometown, PA 15155, an address located within the Hometown School District. [Jane’s date of birth is March 3, 1999.](#)

Jane is a 16-year-old student who is gifted. She currently attends 10th grade at Hometown High School. Through her GIEP, Jane receives math and science enrichment and is enrolled in a 10th grade Honors English class.

Nature of the Problem

At Jane’s most recent GIEP meeting, on May 1, 2015, the school district recommended that Jane no longer participate in honors English class for 11th grade. We disagree with the District’s proposal and file this Due Process Complaint seeking an order to prevent the District from changing Jane’s English class at the end of this school year.

We agree with Jane’s Honors English teacher that Jane can be successful in Honors English for 11th grade. Jane has also expressed an interest in remaining in Honors English class and she would benefit from continuing in that class again next year.

After receiving the NORA at Jane’s most recent GIEP meeting, we requested mediation with the District. We participated in mediation on May 15, 2015, but were unable to resolve our disagreement. Following that meeting, the District again issued a NORA recommending that Jane no longer participate in Honors English after the end of this school year. We again disagreed and now file this Due Process Complaint Form

Pennsylvania’s Chapter 16 requires public schools to provide students with GIEPs a free appropriate public education (FAPE). Her current Honors English teacher and we believe she would benefit from continuing in Honors English beyond this school year.



Proposed Resolution

To resolve this complaint, we seek an order that the school district:

Permit Jane to participate in Honors English class in 11th grade during the 2015-16 school year.

Please feel free to contact me if you have any questions or would like to discuss this with me.

Sincerely,

Joanna Doe

Joanna Doe
(Parent of Jane Doe)

cc: Office for Dispute Resolution (via e-mail)



Appendix L: Blank Complaint Form

[Blank Complaint Form](#)

Appendix M: Guide to Mediation

[Guide to Mediation](#)

Appendix N: Gifted Due Process Procedures Fact Sheet

[Gifted Due Process Procedures Fact Sheet](#)



Appendix O: Example of 5-Day Disclosure Letter

Date:

Student Last Name/School District

ODR File No.:

Re: 5-Day Disclosures

Dear [School attorney's name]:

I intend to call the following witnesses and use the following exhibits at the hearing:

1. Jane Marks (parent)
2. Joe Marks (parent)
3. Mrs. Smith (teacher)
4. Dr. Jones (psychologist)

Exhibits

1. Letter from [teacher's name] to [parent's name] dated 10/21/2006
2. Report card dated 11/21/06
3. Evaluation by [expert's name] dated 12/30/06
4. Homework samples August 2006-December 2006
5. Letter from [parent's name] to School dated January 2, 2007
6. NORA dated January 2007
7. GIEP developed January 2007
8. Homework samples January 2007-June 2007
9. Letter from [teacher's name] to [parent's name] dated 3/10/07
10. Final report card June 2007

[Your Signature]



Appendix P: Examples of Marked Exhibits

Sample

Exhibit

In

Portrait

Format

P-1 page 1 of 2



Sample
Exhibit
In
Landscape
Format



Appendix Q: Example of Cover Sheet for Exhibit Notebook

Parent Exhibits

Student Last Name/School District

<u>Tab</u>	<u>Exhibit #</u>	<u>Exhibit Name</u>
1	P-1	Letter from [teacher's name] to [parent's name] dated 10/21/2006
2	P-2	Report card dated 11/21/06
3	P-3	Evaluation by [expert's name] dated 12/30/06
4	P-4	Homework samples August 2006-December 2006
5	P-5	Letter from [parent's name] to School dated January, 2, 2007
6	P-6	NOREP dated January 2007
7	P-7	IEP developed January 2007
8	P-8	Homework samples January 2007-June 2007
9	P-9	Letter from [teacher's name] to [parent's name] dated 3/10/07
10	P-10	Final report card June 2007



Appendix R: Sample Motion

Jones Law Firm
P. O. Box 388
Center City, PA 99999

August 1, 2011

Via Electronic Mail and First Class Mail

Hearing Officer
P. O. Box 91
Pittsburgh, PA 10000

Re: Student vs. Pennsylvania School District, ODR File No. 12345-1112
Motion to Dismiss

Dear Hearing Officer:

This office represents the Pennsylvania School District in this matter. Following our review of the Parents' due process complaint, we believe the Parents have attempted to raise one or more issues which do not set forth a valid claim. Therefore, please accept this Motion to Dismiss on behalf of the District or, in the alternative, a challenge to the sufficiency of the Parents' complaint.

There are specific requirements for a due process complaint. 34 C.F.R. §§ 300.508(a), (b), and (c). In their complaint, the Parents fail to provide a "description of the nature of the problem" as required by 34 C.F.R. § 300.508(b)(5). The Parents also fail to state a "proposed resolution of the problem to the extent known and available" as required by 34 C.F.R. § 300.508(b)(6). The District suggests that this information is necessary so that it can understand what issues the Parents are raising so that it can propose a solution. Without this information, the District is not able to conduct the required resolution meeting or properly prepare for the hearing scheduled for August 29, 2011.

The District respectfully requests that the hearing officer conclude that the due process complaint fails to state a proper claim and dismiss the complaint.

Should the hearing officer decline to dismiss the complaint, the District requests that the Parents be required to amend their complaint in conformity with 34 C.F.R. § 300.508, and that the hearing scheduled for August 29, 2011 be rescheduled according to the adjusted timelines set forth in 34 C.F.R. § 300.508(d)(4).

Very truly yours,
Allison Jones, Esquire



Recursos adicionales

Existe una cantidad de excelentes recursos con consejos y sugerencias para la comunicación eficaz entre padres y escuelas:

La Red de Asistencia Técnica y de Entrenamiento de Pennsylvania (PaTTAN por sus siglas en inglés) ha preparado el documento *Comunicándose con su escuela*.

El Centro para la Resolución Apropiaada de Disputas de Educación Especial (CADRE por sus siglas en inglés), tiene un sinnúmero de recursos para padres en su página web, <http://www.directionservice.org/cadre/>

